C O R T E S**DIARIO DE SESIONES DEL****CONGRESO DE LOS DIPUTADOS****COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Y LIBERTADES PUBLICAS****PRESIDENTE: Don Emilio Attard Alonso****Sesión número 22****celebrada el viernes, 16 de junio de 1978****S U M A R I O**

Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.

Proyecto de Constitución (XXII).

Artículo 144. — El señor Presidente recuerda que al final de la sesión de ayer se quedó en anticipar el debate sobre este artículo, que podría pasar a ser el apartado 3 del artículo 141, que es el que fue objeto de debate y votación al terminar aquella sesión.

Intervienen los señores Meilán Gil, López Rodó, Peces-Barba Martínez y Martín Toval. Se vota la enmienda del señor López Rodó, que fue rechazada por 26 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.—Se vota a continuación el texto de la Ponencia, que fue aprobado por 25 votos a favor y ninguno en contra, con tres abstenciones.

Con el asentimiento general, este texto se convierte en el apartado 3 del artículo 141.

Artículo 141 (continuación). — Para explicar el voto intervienen los señores López Rodó, Solé Tura, Benegas Haddad, Arzalluz Antía, Roca Junyent, Meilán Gil, Martín Toval y Fuejo Lago.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Artículo 142, apartado 1.—Intervienen los señores De la Fuente de la Fuente y Meilán Gil, quien formula una enmienda «in voce». — El señor Presidente anuncia que se va a proceder a debatir seguidamente el artículo 143, el cual, según se desprende de las intervenciones habidas, pasaría a ser el apartado 3 del artículo 142.

Artículo 143. — El señor De la Fuente de la Fuente defiende su enmienda. — Contesta-

ción del señor Roca Junyent en nombre de la Ponencia.—Réplica del señor De la Fuente de la Fuente. — Interviene a continuación el señor Arzalluz Antía.

Artículo 142, apartado 2.—El señor Letamendía Belzunce defiende su enmienda de supresión de este apartado.

Se vota a continuación la enmienda del señor Meilán Gil al apartado 1, que es aprobada por 25 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones.—Se vota la enmienda del señor De la Fuente de la Fuente, proponiendo que el artículo 143 pase a ser el apartado 2 del 142, enmienda que fue rechazada por 23 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.—Se vota el artículo 143, que será el apartado 2 del 142, que es aprobado por 24 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones.—Se vota la enmienda del señor Letamendía Belzunce de supresión de este apartado 2, que es rechazada por 24 votos en contra y uno a favor, sin abstenciones.

Apartado 3.—Se vota la enmienda de Unión de Centro Democrático como texto de este apartado, que es aprobada por 26 votos a favor y ninguno en contra, con una abstención.

Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.

Artículo 143 bis. — El señor Zapatero Gómez defiende una enmienda del Grupo Socialistas del Congreso en el sentido de que los números 5 y 6 de la Disposición adicional pasen a constituir el artículo 143, en lugar del artículo 143 bis, ya que aquél ha dejado de ser artículo 143 para pasar a constituir el apartado 2 del 142.—Intervienen los señores Vizcaya Retana, Roca Junyent, Peces-Barba Martínez y Solé Tura.—Se vota la enmienda del Grupo Vasco, que es rechazada por 21 votos en contra y uno a favor, con tres abstenciones.—A continuación se vota la enmienda del Grupo Socialistas del Congreso, cuyo texto constituiría el artículo 143 bis, que es aprobada por 23 votos a favor y ninguno en contra, con una abstención.—Para explicar el voto intervienen los señores Peces-Barba Martínez y Meilán Gil.

Artículo 144 (nuevo).—El señor Roca Junyent defiende su enmienda en el sentido de reconducir el número 7 de la Disposición adicional a un artículo 144 (nuevo).—El señor Reventós Carner defiende una enmienda «in voce» a la también «in voce» de la Minoría Catalana. — El señor Vizcaya Retana apoya esta enmienda con ciertas matizaciones. — Observaciones del señor Carro Martínez, que le son aclaradas por el señor Roca Junyent, apoyado por el señor Peces-Barba Martínez.—El señor Carro Martínez pide una breve interrupción para deliberar, a lo que accede el señor Presidente.

Reanudada la sesión, interviene de nuevo el señor Carro Martínez.—A continuación, se vota la enmienda del señor Roca Junyent con la del Grupo Socialistas de Cataluña, que es aprobada por unanimidad, con 27 votos.—Seguidamente, se vota la enmienda del señor Vizcaya Retana, que es rechazada por 12 votos en contra y uno a favor, con 15 abstenciones.—Para explicar el voto intervienen los señores Pérez-Llorca Rodrigo, Solé Tura, Guerra Fontana y Vizcaya Retana.

Disposición transitoria primera.—El señor Solé Tura defiende una enmienda «in voce» sobre este tema, que podría convertirse en Disposición transitoria primera.—Intervienen en apoyo de esta enmienda los señores Carro Martínez y Peces-Barba Martínez.—Se vota esta enmienda, que es aprobada por unanimidad, con 28 votos.—Para explicar el voto intervienen los señores Meilán Gil y Peces-Barba Martínez.

Disposición transitoria segunda. — El señor Meilán Gil defiende una enmienda para esta nueva Disposición transitoria, que se corresponde con la Disposición adicional número 4. — El señor Peces-Barba Martínez sugiere una pequeña modificación a dicha enmienda.—Se vota esta enmienda con la modificación indicada, que es aprobada por 25 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

Artículo 145.—Intervienen los señores Meilán Gil, Carro Martínez, Peces-Barba Martínez y Pérez-Llorca Rodrigo.—El señor Meilán Gil lee el texto de la letra b), por él enmendada, ya que el resto del artículo es el de la Ponencia.—Se vota la enmienda del señor

Meilán Gil, que es aprobada por unanimidad, con 29 votos, quedando aprobado en su totalidad este artículo.

Artículo 146. — Se aprueba por unanimidad, con 29 votos.

Artículo 147, apartado 1.—El señor Letamendía Belzunce defiende una enmienda.—Intervienen los señores Pérez-Llorca Rodrigo y Carro Martínez. — La señora Revilla López defiende un voto particular de Unión de Centro Democrático, como enmienda «in voce».—Se vota el texto de la Ponencia con la enmienda introducida por la señora Revilla López, que fue aprobado por unanimidad, con 30 votos.—Se vota la enmienda del señor Letamendía Belzunce, que fue rechazada por 28 votos en contra y ninguno a favor, con dos abstenciones.

Apartado 2.—Se aprueba el texto de la Ponencia por unanimidad, con 27 votos.

Artículo 148.—Intervienen los señores Carro Martínez y Roca Junyent.—Se votan conjuntamente los apartados 1 y 2, que son aprobados por unanimidad, con 29 votos, el 1 del texto de la Ponencia y el 2 de la enmienda de la Minoría Catalana. — Se vota la enmienda del señor De la Fuente de la Fuente, que es rechazada por 16 votos en contra y dos a favor, con 12 abstenciones.

Artículo 149.—Intervienen los señores Vizcaya Retana, Cisneros Laborda, Peces-Barba Martínez, Guerra Fontana y Gastón Sanz. Turno en contra del señor Cisneros Laborda.—El señor Echevarría Gangoiti defiende una enmienda a la letra b) del apartado 1. — Después de una breve suspensión para deliberar, el señor Echevarría Gangoiti retira su enmienda. — El señor Carro Martínez defiende una enmienda en nombre del señor De la Fuente de la Fuente.—Contestación del señor Solé Tura en nombre de la Ponencia.—Se vota la enmienda del señor Gastón Sanz a la letra c) del apartado 1, que fue rechazada por 28 votos en contra y ninguno a favor, sin abstenciones.—A continuación se vota otra enmienda del señor Gastón Sanz de adición de una letra f) al mismo apartado 1, que fue rechazada por 24 votos en contra y uno a favor, con una abstención.—Se vota el texto de la Ponencia para el apartado 1, que

fue aprobado por unanimidad, con 28 votos.—Se vota la enmienda del señor De la Fuente de la Fuente al apartado 2, que fue rechazada por 26 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.—Se vota el texto de la Ponencia para el apartado 2, que fue aprobado por unanimidad, con 28 votos.—Se vota a continuación la enmienda del Grupo Socialistas de Cataluña al apartado 3, que fue aprobada por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.—No ha lugar, pues, a votar el texto de la Ponencia. — Se vota la enmienda del Grupo Vasco para un apartado 4, que fue rechazada por ocho votos en contra y uno a favor, con 18 abstenciones. — Para explicar el voto interviene el señor Vizcaya Retana.

Artículo 158, apartado 1. — El señor Carro Martínez defiende una enmienda del señor De la Fuente de la Fuente. — Contestación del señor Solé Tura en nombre de la Ponencia.—El señor Solé Tura defiende su enmienda al apartado 2.—Se vota la enmienda del señor De la Fuente de la Fuente al apartado 1, que fue rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 12 abstenciones.—A continuación se vota el texto de la Ponencia, que fue aprobado por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.—Se vota la enmienda «in voce» del Grupo Comunista al apartado 2, que fue aprobada por unanimidad, con 27 votos, por lo que no procede votar el texto de la Ponencia. — Se vota la enmienda del señor De la Fuente de la Fuente al apartado 2, que fue rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 11 abstenciones.—Se vota la enmienda del señor Gómez de las Rocas de adición de un apartado 3, que fue rechazada por 25 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.

Artículo 151.—Intervienen los señores Carro Martínez, Solé Tura y Peces-Barba Martínez.—Se vota la enmienda del señor Carro Martínez, de supresión de este artículo, que fue aprobada por unanimidad, con 24 votos.

El señor Letamendía Belzunce defiende su enmienda que anteriormente fue al artículo 148, pero denominado título VIII bis.—Contestación del señor Pérez-Llorca Rodri-

go.—Se vota la enmienda del señor Letamendía Belzunce, que fue rechazada por 24 votos en contra y uno a favor, sin abstenciones.—Para explicar el voto intervienen los señores Solé Tura, Peces-Barba Martínez, Vizcaya Retana, Presidente (quien hace determinadas aclaraciones), Carro Martínez, Cisneros Laborda, Roca Junyent, Guerra Fontana y Vizcaya Retana.

Artículo 152.—Intervienen los señores Letamendía Belzunce, Roca Junyent, Cisneros Laborda, Peces-Barba Martínez y Pérez-Llorca Rodrigo.—Se vota la enmienda del señor Barrera Costa al apartado 1, que fue rechazada por 24 votos en contra y ninguno a favor, con dos abstenciones.—Se votan conjuntamente todos los apartados, que son aprobados por unanimidad, con 26 votos.

Se levanta la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, recordarán SS. SS. que se cerró la sesión en el día de ayer a punto de comenzar el turno de explicación de voto sobre el artículo 141.

El señor LOPEZ RODO: Si no entendí mal, donde nos quedamos es en si pasaba a ser apartado 3 del artículo 141 el actual artículo 144.

Artículo 144 El señor PRESIDENTE: Podemos optar por esa solución, pero en tal caso sería preciso debatir primero el artículo 144, ya que no es posible pasarlo sin saber lo que dice, y lo que dice sólo se sabe después de haberlo votado.

El artículo 144 es el antiguo 140, 3. Existe una enmienda del señor Canyellas Balcells, la número 245, y otra del señor López Rodó proponiendo una supresión parcial, la de la frase que dice «... en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas». Es la enmienda de S. S. número 691.

No había más enmiendas al precepto, aunque el señor Sánchez Ayuso tenía la número 572 que creo no se mantiene.

El señor FUEJO LAGO: Se retira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por lo tanto, don Laureano López Rodó tiene la palabra.

El señor LOPEZ RODO: Perdón, señor Presidente, no encuentro la enmienda y quisiera releerla; pido disculpas. (Pausa.)

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Hay una enmienda «in voce».

El señor PRESIDENTE: Enmienda «in voce» que dice que el actual artículo 144 pase a ser apartado 3 del 141.

¿El señor Meilán tiene enmienda al artículo 144?

El señor MEILAN GIL: Lo único que yo había solicitado de la Presidencia, por escrito, era el traslado del actual 144 al apartado 3 del 141. No hay nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Es lo que esta Presidencia ha dicho de antemano.

El señor LOPEZ RODO: Estoy en condiciones de defender mi enmienda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Rodó; celebramos sus condiciones.

El señor LOPEZ RODO: Mi enmienda tiene por objeto que la primera frase del actual artículo 144 del proyecto de la Ponencia diga simplemente: «El derecho del Estado prevalece sobre el de las Comunidades Autónomas», suprimiendo, por tanto, la coletilla: «... en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas».

El señor PRESIDENTE: Exactamente, eso es lo que yo he dicho.

El señor LOPEZ RODO: Y ello porque entendemos que la afirmación de la supremacía del derecho del Estado sobre el derecho de las Comunidades Autónomas debe ser tajante y absoluta. Ya expliqué ayer que la soberanía jamás puede ser compartida, que en cuanto un soberano admite junto a sí a otro

soberano, deja de ser soberano. Por tanto, el Estado abdicaría de su soberanía si admitiera que pudiera existir un sistema de «tanto monta, monta tanto», entre el derecho del Estado y el derecho de las Comunidades Autónomas.

El derecho de las Comunidades Autónomas es, siempre, un derecho de segundo grado y subordinado al del Estado; incluso atentaría también contra la soberanía del pueblo español que encarnan las Cortes Generales, que son la fuente del Poder legislativo.

Por consiguiente, esta afirmación de que el derecho del Estado prevalece sobre el de las Comunidades Autónomas ha de ser clara y rotunda, sin que se le ponga ningún aditamento que venga a oscurecerla ni a disminuirla.

En este sentido, pues, solicito el voto favorable para mi enmienda. (*Varios señores Diputados piden la palabra.*)

El señor PRESIDENTE: Perdón, pero tenía solicitada la palabra el señor Peces-Barba.

La Presidencia solicitaría brevedad, concisión y síntesis, si pretendemos acabar nuestro trabajo con la rapidez que exige la demo-
ra que llevamos.

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Con toda la rapidez que sea posible, para oponerme a la enmienda del señor López Rodó, que me parece absolutamente inaceptable e incompatible con la organización del ordenamiento jurídico en una sociedad democrática, y mucho más en una sociedad democrática organizada en régimen de autonomías.

Entendemos que si el principio que mantiene el señor López Rodó —que es un principio de los siglos XIII o XIV, o incluso de la Edad Antigua— de que exista una única fuente exclusiva de Derecho, personificado casi en la idea del monarca absoluto, prosperase, no sería necesaria la Constitución: bastaría con que se dijese que un derecho del Estado, que es el que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica, sin ninguna distinción, lo cual es absolutamente inaceptable en una sociedad moderna.

El señor López Rodó se olvida de que estamos en un Estado de autonomías constitucionalmente garantizadas y que, por consiguien-

te, la Constitución, que es la norma jurídica máxima, atribuye competencias propias a las autonomías y a otras formas de organización territorial inferior, como son las provincias o los municipios. La afirmación de que el derecho del Estado prevalece siempre, es tanto como decir que el derecho del Estado puede suplir al bando de un alcalde cuando éste actúa en su propia competencia, o que puede suplir la sentencia del Tribunal de las Aguas de Valencia, por ejemplo, cuando dicho Tribunal actúa también en el ámbito de su competencia.

El señor López Rodó olvida toda la moderna teoría del ordenamiento jurídico: los criterios de la unidad, de la coherencia y de la plenitud y el principio de jerarquía normativa, y que solamente con una afirmación como la que se establece en el actual artículo 144 puede darse una garantía suficiente de defensa del derecho propio de las Comunidades Autónomas, del derecho inferior e incluso de las normas últimas del derecho local o del derecho provincial.

Por esas razones, entendemos que el equilibrio está logrado en el artículo 144, haciendo la afirmación general de la jerarquía superior del derecho del Estado, salvo la excepción de aquellas normas a cuyo establecimiento tienen derecho las Comunidades Autónomas; es decir, aquellos supuestos en que hay un poder, una facultad de producción normativa por parte de las Comunidades Autónomas. Lo que se completa con la afirmación de que el derecho del Estado es supletorio del derecho propio, con las salvedades que ya en otros artículos se han hecho sobre algunos otros derechos supletorios que existen en determinadas Comunidades Autónomas, sobre todo en el ámbito del Derecho privado.

Por todas estas razones, porque creemos que para una Constitución, quizá, del imperio asirio-babilonio o de otra comunidad estatal de aquellos tiempos sería aceptable la posición del señor López Rodó, pero no para una Constitución que constitucionaliza las autonomías, que las protege a nivel constitucional, nos oponemos a la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peces-Barba. Ya me temía yo lo del imperio. (*Risas.*)

Tiene la palabra el señor López Rodó,

El señor LOPEZ RODO: Después de estos brincos históricos que ha dado el señor Peces-Barba, que lo mismo se ha referido al imperio persa que a los siglos XII y XIII, he de aclararle que en los siglos XII y XIII no había monarcas absolutos; el absolutismo en Europa es muy posterior a estos siglos medievales. Pero, en definitiva, no he venido a defender aquí la supremacía para el monarca, sino —y lo he dicho expresamente— para las Cortes Generales, que son la representación legítima del pueblo español; he reivindicado la soberanía del pueblo español y no la soberanía de ningún monarca absoluto.

Todos los argumentos que ha dado el señor Peces-Barba son, con todo respeto para él, absolutamente inconsistentes, porque ha hablado de que existe una jerarquía normativa y, por consiguiente, según él, del principio de jerarquía normativa se sigue que el derecho del Estado no puede ser prevalente sobre otros derechos.

Pues bien, del principio de jerarquía normativa se sigue exactamente lo contrario —por algo se habla de jerarquía normativa—: unas normas están por encima de las otras, y las que quedan por debajo en la línea de la jerarquía normativa se supeditan, indudablemente, a la norma que está por encima, a la que ocupa una posición superior en la jerarquía normativa. De modo que el principio de jerarquía normativa que él ha invocado, y que está ya aprobado en el proyecto de Constitución, justamente me da la razón a mí y se la quita a él.

Precisamente porque existe el principio de jerarquía normativa, las normas emanadas de las Cortes Generales han de ser las que prevalezcan sobre otras que puedan emanar de asambleas de comunidades autónomas. Y no voy a poner casos imaginarios, no es que los dedos se me hagan huéspedes: yo creo que todos recordamos el conflicto que suscitó el viejo Estatuto Cataluña de 1932, con ocasión de la aprobación por el Parlamento catalán de la Ley de Contratos de Cultivo («Llei de Contractes de Conreu»). Esta Ley de Contratos de Cultivo fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pues bien, al día siguiente de pronunciarse el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por la inconstitucionalidad de la

Ley de Contratos de Cultivo, el Parlamento catalán volvió a aprobar la misma Ley de Contratos de Cultivo.

Creo que esto nos conduciría a una situación de verdadera anarquía y, por supuesto, de absoluta inseguridad jurídica. Es preciso que quede muy claro en la Constitución que el derecho del Estado prevalece sobre el de las Comunidades Autónomas. Ha puesto el señor Peces-Barba el ejemplo de los bandos de los alcaldes. Pues, evidentemente, los bandos de los alcaldes están supeditados a todo cuanto, respecto a las facultades de los alcaldes, y a su capacidad para dictar bandos, establece la Ley de Régimen Local, la cual es claro que, en la jerarquía normativa, está por encima de los bandos de los alcaldes. De modo que los dos ejemplos que nos ha puesto me parece que no prueban la tesis que él trata de defender.

Insisto en que, si no queremos provocar una situación de caos legislativo, de concurrencia de normas jurídicas emanadas del Estado, unas, y de las Comunidades Autónomas, otras, a las que queremos colocar en un pie de igualdad; si no queremos que se produzca este caos legislativo por la concurrencia, en pie de igualdad, de normas jurídicas emanadas del Estado y de las Comunidades Autónomas, no tenemos más remedio que consignar de un modo claro que el derecho del Estado prevalece sobre el de las Comunidades Autónomas.

El señor PRESIDENTE: El señor Martín Toval tiene la palabra.

El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente, para un segundo turno también en contra, lógicamente, de la intervención del señor López Rodó, que procuraré desarrollar brevemente.

El artículo 139, que recuerdo al señor López Rodó ha sido ya aprobado por esta Comisión, introduce un apartado 1 que recoge el artículo 132 del texto del anteproyecto, donde se configura como parte integrante, y parte reconocida y amparada, del ordenamiento jurídico del Estado a los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Ciertamente que el precepto que nos ocupa no se refiere a estos Estatutos, sino al derecho emanado o surgido de las asambleas legislativas que puedan

existir en las Comunidades Autónomas, derecho reglamentario, derecho administrativo producido por los entes de gobierno de estas entidades.

Ahora bien, lo cierto es que estamos discutiendo una Constitución, elaborando una Constitución, y ésta ha de establecer un marco de distribución de competencias dentro del ordenamiento jurídico total: la Constitución y el correspondiente Estatuto, que es fuente básica también de ese ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo crear, y así lo dice la Constitución, unos poderes con capacidad de creación de normas tanto a nivel legislativo como reglamentario, de las cuales no puede predicarse prevalencia de nada, porque la prevalencia, naturalmente, es del ordenamiento jurídico del Estado, pero en origen, que distribuye y cede esta capacidad, o parte de la soberanía normativa del Estado, a unas instituciones concretas que también lo son del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto, el precepto es muy correcto en la medida en que distingue la prevalencia, por un lado, y la supletoriedad, por otro; y sí puede predicarse supletoriedad, jurídicamente hablando, de las normas del Estado sobre las emanadas de las Comunidades Autónomas, nunca la prevalencia, como hace este precepto, en el supuesto de que la competencia en cuestión no esté atribuida en exclusiva a las Comunidades Autónomas.

Nosotros creemos que la introducción de la enmienda defendida por Alianza Popular en este precepto supondría, aparte de una aberración política, vista la configuración, el esquema y la estructura que se está dando a este título de las autonomías y, por tanto, las regulaciones constitucionales de las autonomías, una clara contradicción con ese esqueleto y con esa estructura de las autonomías. Además, desde una perspectiva técnico-jurídica, es ciertamente inadmisibile y, desde luego, sorprende mucho que sea presentada y defendida por un jurista.

El señor PRESIDENTE: No existiendo más enmiendas que la número 691, de don Laureano López Rodó, y el texto de la Ponencia, procede, en primer lugar, poner a votación la enmienda que, recuerdo a SS. SS., propone suprimir el último punto y aparte del texto de

la Ponencia. Desde donde dice el texto de la Ponencia para el artículo 144: «Será, en todo caso, supletorio...», suprimido.

El señor LOPEZ RODO: Perdón, señor Presidente, eso se mantiene. Lo que propugna la enmienda es que se supriman las palabras: «... en todo lo que no esté...».

El señor PRESIDENTE: Bien; suprimir las palabras «en todo lo que no esté atribuido a la competencia de éstas».

Se pone a votación la enmienda.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 26 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación el texto íntegro del artículo 144 del informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por 25 votos a favor y ninguno en contra, con tres abstenciones.

El señor LOPEZ RODO: ¿Queda aprobado como apartado 3?

El señor PRESIDENTE: Ahora solicitaré de SS. SS. manifiesten si están todos conformes en que se incorpore como apartado 3 del artículo 141. (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Por asentimiento general, se transfiere al apartado 3 del artículo 141. **Artículo 141 (Continuación)**

Comienza, por consiguiente, el turno de explicación de voto. Vuelvo a repetir que la profundidad no es incompatible con la síntesis. Se invita a los Grupos Parlamentarios a que hagan uso de la palabra para explicar su voto en el artículo 141. (Pausa.)

Tiene la palabra el señor López Rodó.

El señor LOPEZ RODO: Alianza Popular ha votado favorablemente a la mayoría de los apartados del artículo 141, bien en la redacción de la Ponencia, bien en la redacción más perfeccionada de distintas enmiendas «in voce» que se presentaron a lo largo de la jornada de ayer.

En cambio, en algunos de los apartados hemos votado en contra y, de un modo especial, en el número 25, relativo al orden público. Hemos votado en contra, entre otras cosas, porque contribuyeron a afianzarnos en nuestra convicción las palabras, que no puedo por menos de deplorar, del señor Letamendía en la sesión de ayer.

No quisiéramos, pues, perder esta oportunidad para salir al paso del apelativo de fuerzas represivas que el señor Letamendía aplicó a nuestras ejemplares Fuerzas de Orden Público, que han sido víctimas inocentes del terrorismo. Queremos también manifestar la más firme condena de todo género de violencia, que supone en los pueblos que la practican volver al salvajismo o al primitivismo.

Por último, quisiera apostillar que la solución simplista que nos ofreció el señor Letamendía para resolver el grave problema del terrorismo vasco a mí me recuerda el castizo arbitrarismo de Fernando VII, que indultó al «Tempranillo» y lo nombró Comandante del escuadrón franco de protección y seguridad pública de Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Rodó. ¿Otro turno? (Pausa.)

El señor Solé Tura, del Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, también yo quiero ser breve. Yo creo que el artículo 141 que hemos aprobado es un artículo muy importante porque da, en cierto sentido, el tono, junto con los que ya hemos aprobado, de lo que está siendo la regulación de este Título VIII. Quisiera decir que el Título VIII de la Constitución es, sin ninguna duda, el Título fundamental, es el más importante, el Título del que depende que la Constitución acabe funcionando o no. Si somos capaces de resolver, no sólo ahora en la teoría, sino también luego en la práctica, los problemas que plantea el Título VIII, habremos hecho un gran servicio para que la Constitución realmente funcione. Yo sé que esto va a ser muy difícil, que esto va a provocar incluso tensiones en el cuerpo social español. Pero aquí está la base para ir realmente hacia un modelo nuevo de gobierno de este país.

Nosotros hemos votado el artículo 141 prácticamente entero, con excepción de algún

punto, concretamente el 29, que hace referencia a la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, porque me parece innecesario, dada la regulación ya existente en el artículo 85. Pero quiero poner de relieve que hemos aprobado cosas significativas, y, concretamente, la regulación de la Administración de Justicia, no por lo que dice el texto, sino por las reservas que hicimos respecto a la posibilidad de regularlo de manera distinta; en sentido favorable también, a la intervención de las Comunidades Autónomas, cuando llegue su momento.

Creo que ha sido un progreso importante las modificaciones que se han hecho en relación con la legislación procesal, con la legislación civil y las fuentes del Derecho, con las bases y la coordinación de la planificación económica. Creo que también es importante la regulación del tema de la seguridad pública y me parece importante también, aunque con un tono de cierta ambigüedad, lo relativo a la educación.

Creo que es también muy importante, respecto al conjunto general del artículo, el hecho de que se hayan incorporado al mismo sus actuales párrafos 2 y 3 que lo completan y le dan su sentido más exacto. Con eso quiero decir que ese artículo 141 no hay que verlo como artículo que cierra, sino como un artículo que abre; es decir, como un artículo que establece los límites máximos de la competencia del Estado central, pero al mismo tiempo deja abierta una serie de posibilidades de delegación para que esas facultades sean ejercidas tanto a nivel ejecutivo como a nivel reglamentario, como incluso a nivel legislativo en algunos casos, por las Comunidades Autónomas. Lo cual hace que, en definitiva, el sistema sea, o, más exactamente, será si somos capaces de hacerlo funcionar, un sistema flexible que dará respuesta a muchas de las inquietudes actuales. Y aquí es donde quisiera yo ahora referirme a un problema que me parece fundamental. Este artículo, digo, abre y no cierra y quisiera que de eso fuéramos conscientes todos los que estamos en esta Comisión Constitucional y muy concretamente —y a ellos me dirijo— los compañeros del Partido Nacionalista Vasco. Por lo ocurrido ayer, yo tengo la sensación de que se pro-

duce aquí una situación difícil, pero que puede resultar todavía más difícil de cara al futuro. Un problema como éste significa, en definitiva, afrontar la cuestión de cómo hacer funcionar este país saliendo no de cuarenta años, sino de muchos más años de centralismo burocrático, de centralismo esterilizador, de centralismo que ha sido el instrumento de poder de unas clases oligárquicas, que han controlado y que han dominado el país a su guisa.

Superar esta situación no va a ser nada fácil. No lo es a la hora de elaborar el texto y no lo va a ser a la hora de la práctica. Vamos a pasar unos años difíciles en este sentido, pero al mismo tiempo exaltantes, si sabemos todos estar a la altura de nuestras responsabilidades. Vamos a tener problemas de toda índole, y es evidente que esto no va a resolverse en unos pocos años y, desde luego, no va a resolverse en cuatro días. Por eso se prevé en la propia Constitución un cierto margen de maniobra y se intenta graduar este paso a las autonomías, de modo que en unos cuantos años, sin traumas, podamos llegar a una solución constructiva del problema. Y aquí cada cual debe estar a la altura de sus responsabilidades. Si este problema no es asumido como tal, con todos sus aspectos constructivos en Euzkadi, es evidente que tenemos aquí un flanco abierto que puede, literalmente, destrozar el sistema en toda España.

Yo creo que ésta es una cuestión muy seria, y no quisiera aquí que mis palabras se tomasen simplemente como una especie de prurito personal, porque no se trata de eso. Yo creo que para todos nosotros, durante estos años del franquismo, el tema de Euzkadi ha sido un tema fundamental en la lucha por la democracia; creo que los compañeros de Euzkadi han podido contar en todo momento con nuestra solidaridad y saben lo importante que esto ha sido, pero también sabemos que ahora estamos en una situación distinta, que no se puede seguir viendo con el prisma de hace unos años. Por eso insisto en que aquí cada cual tiene que asumir sus responsabilidades, de un lado y de otro. El problema de Euzkadi no se puede sólo resolver con medidas como las que se propusieron ayer, por importantes que sean y sin duda lo son. Es

necesario adoptar otras y, sobre todo, es necesario hacer que surjan interlocutores claros, que permitan resolver el problema con toda claridad.

Finalmente, quiero también insistir en otra cosa, y con eso termino. Resolver un problema de estas características exige por parte de todos, ya lo he dicho antes y repetido, sentido de responsabilidad, pero exige también ganas de llegar a un acuerdo; y cuando se llega a un acuerdo entre fuerzas que son tan diferentes, y hasta cierto punto contradictorias, todos sabemos que es necesario dejarnos a veces cosas en el tintero, cosas que nos parecen que son importantes, pero que sabemos situar en un plano secundario para conseguir lo principal. Y puede ocurrir entonces que aquí se establezcan dos categorías de actuación: la de los que para conseguir resultados positivos en lo fundamental tenemos que sacrificar cosas secundarias, pero que nos cuestan y hasta pueden deteriorar nuestra imagen, y luego la de los que, gracias a que otros hemos resuelto el problema, tienen el terreno libre para desarrollar pura y simplemente una actividad testimonial. Y eso creo que es importante que se diga, porque me parece que cada cual —como decía al principio— tiene que asumir sus responsabilidades, sabiendo mojarse en lo que hay que mojarse, pero no intentando nadar y guardar la ropa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé. ¿Otro turno para explicación de voto al 141? (Pausa.)

El señor Benegas, del Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor BENEGAS HADDAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista ha votado favorablemente en su globalidad al artículo 141 por considerarlo como un paso enormemente positivo en la tarea de la descentralización del Estado y en la creación de un nuevo Estado, en el cual los derechos de las nacionalidades y de las regiones, durante tantos años ignorados y aplastados, puedan ser reconocidos. Nosotros no solamente contemplamos el artículo 141, que votamos ayer, de una forma aislada, sino

que lo contemplamos en el conjunto del texto del articulado que se está aprobando en este capítulo de autonomías. Lo contemplamos en el conjunto y lo valoramos positivamente, porque por primera vez en España se reconoce el Estado plurinacional y plurirregional; por primera vez en España se reconoce la existencia de las Comunidades Autónomas como una estructura del Estado junto con el municipio y la provincia y el derecho de estas Comunidades Autónomas a conseguir progresivamente cotas de autogobierno, cotas de profundización en sus propias instituciones y en su propia democracia, conjuntamente con el resto de los pueblos que integran España.

Creemos que el artículo 141 abre puertas de esperanza, que el artículo 141 no es un artículo cerrado, puesto que esto hay que completarlo con la posibilidad de delegación que se contemplará en artículos de ejecución de titularidades de competencia exclusiva del Estado, en artículos sucesivos, y también de delegación por parte del Estado de la legislación delegada. Creo que esto abre unas posibilidades reales de autogobierno para las nacionalidades y regiones que integran España.

A veces tengo miedo de pensar de una forma subjetiva y de pensar que me guía un cierto optimismo al hacer esta valoración positiva en nombre de mi Grupo, pero me conforma la idea de que no es así el que ayer en un programa de Televisión todos los representantes de otra nacionalidad puntera del Estado, la Minoría Catalana, Socialistas de Cataluña y el representante del PSUC, señor Solé, afirmaron públicamente que con lo que se había conseguido en el artículo 141, la Generalitat podrá recobrar todas sus Instituciones de autogobierno, podrá recobrar el pueblo catalán las facultades que en su día tuvo de autogobierno.

Me pregunto si una de las nacionalidades punteras en su conciencia de pueblo diferenciado puede, a través de lo conseguido en este artículo 141, recuperar aquello a que hacían referencia los diversos representantes catalanes, y en este sentido creo que el resto de los pueblos del Estado, incluida la otra nacionalidad con más conciencia, con una conciencia más avanzada de pueblo, Euzkadi, también tienen abierta para nuestros pueblos

esta posibilidad y por eso me muestro optimista.

El Grupo Socialista valora lo que hemos aprobado como el principio o, por lo menos, como la esperanza del principio del fin del Estado centralista. Creemos que hemos dado un paso histórico en la Historia de España abriendo una nueva era que pone fin al Estado centralista, o esperamos que ponga fin al Estado centralista y a tantos años de opresión y sufrimientos por parte de los pueblos que integran España.

Lo que está aprobado es un articulado rico en posibilidades, rico en futuras profundizaciones, por lo que creemos que se abren unas expectativas importantes para los pueblos que integran el Estado. Debemos comprender que la historia de los pueblos no se hace en unos días y que quizá la historia de los pueblos no dependa tanto de matizaciones en palabras, sino de una profundización progresiva a lo largo de los años para conseguir una verdadera descentralización y autonomía para los pueblos que integran España.

Ayer estuvo, a lo largo de todo el debate, presente el País Vasco de una forma o de otra. Lo que me mueve a intervenir y a referirme al País Vasco es una sensación de que creo que es muy peligroso para un pueblo tan conflictivo (para un pueblo que ha vivido tantos traumas, para un pueblo en el que todavía no se ha producido por diversas razones la reconciliación democrática que se está produciendo en el resto del Estado) crear nuevas sensaciones de frustración, crear nuevas desesperanzas. Creo que lo que se está abriendo es la esperanza y la posibilidad de que el Pueblo Vasco camine hacia cotas de autogobierno importantes.

Leer la prensa vasca ayer me producía una cierta decepción. Titulares como «Sólo el Partido Nacionalista y Ortzi luchan por las nacionalidades y las autonomías», o «La Constitución cierra la posibilidad del Estado federal», me parecen peligrosos, porque no son justos. En ningún momento nadie, ni Euzkadi-ko Ezkerra, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni ningún Grupo, han mantenido enmiendas a favor del Estado federal en esta Constitución, y las malas interpretaciones que puede hacerse de los debates en esta sala para el Pueblo Vasco, ese pueblo que necesita salir de

tantos traumas y conseguir una pacificación, me parecen enormemente peligrosas.

Creo que el artículo 141 se ha mejorado sensiblemente si se analiza con seriedad, profundidad y rigor, y se ha mejorado negociando. En esta hora de la negociación, como ha dicho nuestro compañero Solé, no son las posiciones que cada uno sustentábamos inicialmente las que triunfan, sino que hay una confluencia, pero esta confluencia ha sido posible gracias al esfuerzo de todos y creo que lo conseguido es realmente positivo.

Se ha trabajado a veces en la sombra, y los socialistas hemos hecho un esfuerzo autonomista importante, juntamente con otros Grupos Parlamentarios, porque muchas de las mejoras lo han sido porque hemos contribuido con nuestro esfuerzo. Esto se ha hecho sin discursos testimoniales, se ha hecho por la vía del pragmatismo, por la vía de pensar no sólo en el País Vasco o en una zona del Estado, sino de pensar también que estamos construyendo entre todos un nuevo Estado democrático y que a la hora de construir un nuevo Estado tenemos que tener presente de dónde venimos, qué época abandonamos, cuál es la correlación de las fuerzas del actual Parlamento y cuáles son los problemas que nuestro país tiene que superar.

En este sentido creo que, como ya he dicho, el País Vasco estuvo ayer latente en todas las discusiones. Yo, en algunos momentos en que se debatía el orden público, estuve tentado de intervenir y no lo hice porque a veces es mejor que no se confundan responsabilidades como la Consejería del Interior, con posiciones de Partido, porque cuando se asumen las responsabilidades de la Consejería del Interior del Consejo General Vasco hay que despegarse un poco de las posiciones del partido. Este temor de que se creen nuevas frustraciones en nuestro pueblo es lo que me ha hecho intervenir hoy en nombre del Grupo Socialista.

Quiero argumentar también, porque a veces hay organizaciones, partidos o grupos que se atribuyen en exclusividad la representación de los pueblos, que hoy no sólo estoy hablando en nombre del Grupo Socialista, sino hablando también en nombre de un partido integrado en el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Euzkadi, que repre-

senta cerca de 300.000 votos en el País Vasco, que representa un voto eminentemente obrero y que representa también una alternativa importante que no puede ser ignorada en Euzkadi. Con todo el cariño que me merecen los compañeros del Partido Nacionalista Vasco, e incluso el amigo Letamendía, es preciso que todos comprendamos que Euzkadi, esa Euzkadi tan difícil y tan traumática, no puede ser construida al margen de partidos mayoritarios y no puede ser construida al margen de lo que piensan los representantes de la clase trabajadora.

Quiero seguir argumentando a favor del artículo 141 centrándome un poco en las cuestiones que fueron quizá más debatidas ayer y que pueden ser peligrosas en cuanto que puedan dar lugar a posiciones negativistas, que puedan alentar nuevas desesperanzas y nuevas tentaciones a soluciones desesperadas en el País Vasco.

Creo que la valoración que hay que hacer desde una perspectiva de Euzkadi es positiva, porque se avanza hacia posibilidades de autogobierno del Pueblo Vasco y se avanza a que nuestro pueblo pueda conseguir realmente ese sueño que lleva esperando desde hace cien años, que es el ser un pueblo dentro de una comunidad libre de España, con todas sus instituciones de autogobierno.

El Grupo Socialista, y los socialistas vascos integrados en el mismo, compartimos lo que se decía ayer desde posiciones de un representante de nuestro pueblo, el señor Letamendía, compartimos plenamente la posibilidad de que los pueblos de España tengan acceso, como ayer se defendió, a llegar a un mismo nivel de autonomía, y hay que tener en cuenta que la negociación constitucional ha establecido alguna diferencia, pero no en la posibilidad, sino en el proceso. Pero también hay que decir las cosas en serio y con profundidad. No vale decir que se defienden autonomías exactamente iguales para todos, cuando a la vez se defienden o se pretenden defender sistemas de Hacienda diferentes para Euzkadi o se pretenden defender disposiciones transitorias o adicionales diferentes para Euzkadi.

Que no se interpreten mal mis palabras, porque para mí no estoy haciendo en estos momentos una valoración sobre si estoy a

favor o en contra de esas disposiciones sobre Hacienda diferentes, o esa Disposición transitoria, porque incluso los compañeros y amigos del Partido Nacionalista Vasco saben que en otras instancias he pedido el que se incluya esa Disposición adicional que ellos reclaman. Pero tenemos que ser serios y saber que a la hora de tratar temas tan delicados no se pueden mantener reclamaciones de igualdad para todos los pueblos de España a nivel de autonomía si a la vez se pretenden especialidades para uno de los pueblos que integran el Estado español.

Ayer se elogió mucho la Constitución republicana en materia de autonomías. Creo que, en aras de la verdad, esta Constitución abre tantas o más posibilidades a algunas materias concretas que la Constitución republicana, y que además es más progresiva en muchas cosas. Sobre todo es más progresiva en la concepción del Estado, ya que las autonomías no se contemplan como una excepción para un pueblo o para un grupo de pueblos, sino que las autonomías se contemplan como el derecho de todos los pueblos de España a un régimen descentralizado y de autogobierno.

Por eso pienso que lo que se está haciendo es positivo y progresivo y que en algún aspecto concreto ha podido ser más avanzada la Constitución republicana, pero en cuanto a la concepción del nuevo Estado que estamos creando ésta es más progresiva.

Hay un tema fundamental que quizá fue el que más tiempo llevó ayer en la Comisión, el que más se debatió, que es el tema del orden público. Tema del orden público que, además, se ligó a intervenciones sobre la pacificación de Euzkadi.

Creo que en mi partido hemos sido los primeros que en este proceso de transición hacia la democracia hemos reclamado la policía vasca en todos los sitios: en Madrid, en nuestro país y ante el Ministerio del Interior del Gobierno Central. No solamente hemos reclamado la Policía y el Orden Público vascos, sino que, en estos momentos, el único proyecto existente en el Ministerio del Interior sobre un Orden Público autónomo es el proyecto de la Policía autónoma del País Vasco, que está siendo estudiado y negociado.

Yo coincido con parte de la intervención

del señor Letamendía en el sentido de que muchas veces es mal entendido, pero ayer pronunció unas frases para mí inaceptables, al calificar de fuerzas de ocupación a las Fuerzas de Orden Público. No obstante, dijo cosas importantes, como, por ejemplo, que hay que abandonar la lucha armada y la violencia, y se manifestó públicamente ante la Comisión como partidario de la vía pacífica y de la discusión y el juego democrático. Creo que esto es muy importante, dicho por el señor Letamendía, y me gustaría que todas estas cosas no solamente se dijeran aquí, en esta Comisión, sino también en los actos públicos que se celebran en Euzkadi.

Tiene razón el señor Letamendía cuando habla de los incontrolados y de los problemas de orden público que existen en el País Vasco. Otra vez debo decir que sobre el tema de los incontrolados algo sabe este Diputado que se dirige a SS. SS., y que se está haciendo un esfuerzo importante por acabar con el mismo en el País Vasco.

También en orden a la pacificación de Euzkadi SS. SS. saben que en el Partido Socialista se está manteniendo una de las posiciones quizá más abiertas de las que pueden mantenerse hacia aquellas personas que surgieron como organización armada contra la dictadura, y que en estos momentos de transición a la democracia siguen manteniendo. Es de todos conocida nuestra posición. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo por la pacificación de Euzkadi, tanto en lo que se refiere a un orden público autónomo, en la lucha contra los incontrolados, como en lo que afecta a la flexibilidad de la negociación con quienes lucharon armadamente contra la dictadura. Es algo que nadie puede ignorar en estos momentos.

Sin embargo, ayer se mantuvieron posiciones inaceptables en materia de Orden Público, y me parece peligroso que en este tema se puedan mantener posiciones que voy a calificar, con cariño, de demagógicas, porque pueden crear nuevas frustraciones en nuestro pueblo.

Nosotros, a la hora de pacificar Euzkadi, estamos pensando también en el Estado democrático que queremos crear. No existe ningún Estado en el mundo que no tenga Policía propia y competencia en materia de Or-

den Público. Mantener que el Estado no debe tener competencias en materia de Orden Público, como se hizo de forma indirecta respecto a alguna enmienda, me parece muy peligroso. Porque el argumentar y el defender que había que suprimir totalmente la referencia a la seguridad pública en el artículo 141, significa, de una forma indirecta, que como todas las comunidades autónomas pueden acceder a todas aquellas competencias que no estén en el artículo 141, podría darse el caso en España de que todas las Comunidades Autónomas tuvieran competencias en el Orden Público y que el Estado no tuviera ningún tipo de competencias en esta materia.

Esto es absolutamente inviable e inaceptable. Cada gobierno, cada órgano de gobierno, tanto sea gobierno del Estado o sea un gobierno autónomo, tiene que tener un poder coercitivo para poder mantener su autoridad. Y en esto los Estados federales que fueron citados ayer en Estados Unidos y otros Estados federales citados como ejemplo de autonomía de Orden Público, en todos ellos existe Policía federal, y en todos existen también Policías de las comunidades.

El problema es establecer cuáles deben ser las competencias de la Policía del Estado y cuáles las competencias de los entes federados o las Policías de las Comunidades Autónomas.

Se mantuvieron también posiciones inaceptables para el Grupo Parlamentario Socialista, como la de que el Orden Público o la Policía del Estado solamente puede intervenir en conflictos que superen los límites territoriales de las Comunidades Autónomas, lo cual me parece incluso regresivo y peligroso. Porque o el conflicto o el desorden público se da justo en la misma delimitación entre territorios, por decirlo de alguna forma, en donde acaba un territorio y empieza el otro, o viene referido a un enfrentamiento entre dos Comunidades, cosa muy peligrosa, o peor todavía —y aquí viene la parte regresiva—, puede haber conflictos de Orden Público que trasciendan a una Comunidad, como puede ser una huelga general convocada en todo el Estado, o pueden ser también unas manifestaciones convocadas el mismo día en todo el Estado. Esa enmienda que quería ser progresiva convierte o da la posibilidad de que la

Policía del Estado intervenga en manifestaciones en cada una de las Comunidades Autónomas que deberían tener su Orden Público propio.

Por tanto, creo y afirmo —ayer lo dije a los medios de comunicación— que quedan abiertas, con la redacción que se ha dado al artículo que hace referencia a la seguridad pública, todas las posibilidades para que el País Vasco pueda tener su Orden Público autónomo, pueda tener su propia Policía, pueda tener su propia Policía vasca. Queda abierta, por la vía de la realidad, del posibilismo, del pragmatismo y de la negociación, no por la vía de los testimonios, y queda abierta porque por primera vez se reconoce que las comunidades autónomas pueden crear sus propias Policías. Luego toda Comunidad Autónoma puede tener su propio Orden Público en principio.

No se dice, pero se induce, que las competencias de estas Policías autónomas habrán de quedar negociadas o serán negociadas en los Estatutos de autonomía, en el marco de una ley orgánica, con la cual queda abierta una nueva negociación, que puede ser muy esperanzadora para el País Vasco. En todo caso, aunque estas vías no pudieran ser suficientes, queda una tercera vía que se puede utilizar perfectamente, que es la de la delegación de la ejecución de las titularidades de competencias del Estado. Porque en Orden Público y en materia policial lo importante es la ejecución, y si se puede conseguir toda la ejecución del Orden Público a través de esta vía para el País Vasco, en su día o en el momento que se estime oportuno, queda abierta la posibilidad de un Orden Público autónomo para las Comunidades que integran España.

Creo que esto es importante y que los socialistas hemos contribuido, juntamente con otros Grupos Parlamentarios, a ir por la vía del pragmatismo y de la posibilidad; creo que lo que se está consiguiendo es importante para la Constitución del nuevo Estado, y creo que es importante que el pueblo vasco sepa que la representación de cerca del 28 por ciento, o de 300.000 votos, es optimista en estos momentos, que los representantes de la clase trabajadora del pueblo vasco son optimis-

tas sobre el futuro que se abre para España y el futuro que se abre para el pueblo vasco.

Quiero agradecer la benevolencia de la Presidencia por el tiempo que me ha concedido para mi intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.

Tiene la palabra el señor Arzalluz, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor ARZALLUZ ANTIA: Con brevedad, voy a intentar exponer los criterios que han presidido nuestra postura a lo largo del artículo 141 y del capítulo VIII.

Hemos podido dar la impresión, como hemos recogido por las intervenciones de otros compañeros, de que nuestra postura a lo largo del artículo 141 ha sido testimonial; incluso que en la situación grave que vive el País Vasco nuestra postura ha podido echar más leña al fuego, cuando de lo que se trata es de pacificar. Se ha hablado hasta de rabietas, se ha hablado de sentido de la responsabilidad. Yo quisiera decir claramente una cosa: también yo concibo que este artículo está en el conjunto de todo un articulado constitucional.

Cuando por voces tan diversas se ha dicho que Euzkadi es el cáncer de España, cuando se ha hablado aquí mismo del terrorismo vasco, es evidente que el problema vasco es un problema que no puede ser localizado en un ámbito territorial, sino que afecta a todo el Estado. Lo tremendo del caso es que este problema no es coyuntural, porque el terrorismo puede desaparecer, y yo espero que desaparezca en breve plazo, y haremos todo lo posible para ello, quede bien claro; pero conviene decir también que no es un problema coyuntural, y no vamos a empezar aquí a hablar del cura Santa Cruz o de todas las batallas que en estos últimos cien años ha habido, trágicamente, en nuestro entorno vasco.

Nosotros (tengo que decirlo también, y quisiéramos que se tuvieran en cuenta estas palabras) vemos el artículo 141 en el conjunto de la Constitución. Hubiéramos pasado por todos y cada uno de los apartados del artículo 141 tal como han quedado aprobados, y aun por un artículo 141 más pobre, si, efectivamente, en esta Constitución tuviéramos la

garantía de que el capítulo o el tema de la asunción de poderes por los entes autonómicos quedara lo suficientemente abierto como para que a la medida de la madurez de cada uno de los pueblos pudieran ir asumiendo aquellas funciones que esa madurez fuera requiriendo, sin necesidad de una reforma constitucional que, precisamente, para los partidos pequeños y locales es una tarea imposible, cosa que no lo es para los grandes partidos.

Yo concibo perfectamente que determinados partidos que tienen una concepción sociopolítica y económica diferente, e incluso revolucionaria, exijan de la Constitución que no sea cerrada, exijan que, efectivamente, puesto que pueden ser, y es deseable que lo sean, una alternativa de Poder, al llegar esa alternativa tengan una apertura mínima para poder ir realizando sus programas de cambio social para el que han nacido, y ésa es precisamente la esencia de estos partidos. Una Constitución que fuera un corsé que impidiera mínimamente un cambio racional de la sociedad a través de los programas de cada partido sería una Constitución destinada a corta vida. Y, exactamente, ésta ha sido nuestra preocupación.

Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, hemos venido a colaborar en esta Constitución con una idea fundamental, con la idea de cerrar de una vez el contencioso vasco. Nos acusan muchas veces de separatismo, y nosotros hemos traído unos postulados claros de unidad. Cuando muchas veces se defiende la unidad por ámbitos muy diferentes, unidad que no queremos discutir y que estamos dispuestos a aceptar en un marco concreto, hace la impresión de que lo que les preocupa no es tanto esa unidad cuanto una concepción de Estado, cuanto una detentación de un nivel de poder que, lógicamente, para partidos grandes llamados a presidirlo puede ser muy tentadora.

Nosotros hemos venido, repito, a intentar en esta ocasión histórica —porque como toda ocasión constitucional y más después de cuarenta años de autarquía, y después de la experiencia republicana, es tal vez ésta una ocasión que en muchos otros años no vamos a encontrar— cerrar el contencioso vasco haciendo un entronque histórico en el pleito de

cien años; y para integrar el Estado a la medida o desde nuestra propia perspectiva.

No hemos pedido más que la realización de este entronque, la posibilidad de este entronque y una apertura, cuyo techo estamos siempre abiertos a determinar; pero que posibilite, efectivamente, esta integración, este entronque a través de la asunción de poderes que creemos que no caracterizan en absoluto al Estado, ni son necesarios para comprender y mantener su unidad, y sí son necesarios para poder garantizar el desarrollo de un pueblo con personalidad propia.

Hay que decir que eso, hasta ahora, no ha sido posible, no hay garantías de esa apertura. No me basta que se hable de delegaciones legislativas, ni menos de delegaciones de funciones, porque toda delegación entraña, consigo misma, las facultades de control y las medidas de reversión.

En nuestro concepto no son poderes que cede el Estado o delega; son poderes porque concebida toda sociedad, y toda sociedad política estructurada de abajo arriba, concebidos pueblos soberanos que se integran cediendo sus propias facultades, porque un pueblo es un cuerpo social, ceden facultades y forman el Estado, forman la estructura política superior cediendo todas aquellas facultades que son necesarias para el mantenimiento y para el mejor gobierno de esa unidad, pero ni más ni menos que las necesarias y convenientes.

Y aquí está la disparidad de criterios. Nosotros sí creemos también que es positivo este artículo 141. Nosotros sí creemos también que abre grandes posibilidades al desarrollo de los pueblos que viven en el seno de este Estado; pero lo que nos preocupaba, era el poder volver diciendo: «Señores, el pleito está zanjado». Esto es lo que no vemos claro; no se interprete por tanto nuestra postura en el artículo 141 como una postura testimonial, ni mucho menos una pataleta, porque no lo es. A lo largo de la discusión de esta Constitución ha habido más de una pataleta y no somos nosotros los que la hemos provocado.

Hemos aceptado todo aquello que hemos creído que en el momento presente era algo que se debía aceptar. Hemos aceptado la Monarquía y no somos monárquicos. Hemos aceptado concepciones, hemos aceptado ar-

ticulados que no responden en absoluto a nuestro programa; pero comprendemos que una Constitución es un texto, es un proyecto en el que se basa la misma convivencia política, aunque no satisfaga a ninguno de los que operan en ella, porque cada cual, y sobre todo en la gama diferente de partidos, de concepciones y de ideologías que aquí estamos presentes, tiene naturalmente un espejo, una imagen de esa sociedad política muy diferente.

Por tanto, todos hemos de tener que dejar «pelos en la gatera» y no nos preocupaba el dejarlos; hemos pedido, simplemente, un poco de apertura, para verificar esta integración, para poder volver y decir: «Estamos en el camino. Esta Constitución es abierta, lo suficientemente abierta para restaurar plenamente nuestra personalidad». Lo que nosotros tememos es volver y no poder decir eso.

Puede que estemos equivocados, pero ésa es, exclusivamente, la motivación de nuestra postura que no ha sido testimonial, sino el deseo de exponer y de forzar, de convencer para que se produzca esa apertura mínima que nos permita afirmar eso: «Esta Constitución es válida». Si después no es posible una recuperación de esa personalidad política de un pueblo, de esa personalidad cultural de un pueblo, no será por la Constitución; será porque las leyes que vengan después, orgánicas o no, no han dado pie a ello; pero no será por ser anticonstitucionales.

Esto es lo que yo quisiera que entendieran mis compañeros de Comisión. Nosotros seguiremos colaborando. Nuestro tope, como el de todos los partidos, es aquel en que la esencia de los fines que pretende se ve frustrada, y nosotros la veríamos frustrada en esa falta mínima de apertura. Hasta entonces colaboraremos, y creo que un disenso es perfectamente democrático. No hay por qué echar las campanas al vuelo y empezar un capítulo de recriminaciones, que tampoco las hemos llevado nosotros ni hemos querido colocar a nadie entre la espada y la pared porque haya habido un disenso sobre un capítulo. Disensos graves ha habido en esta Constitución respecto a artículos que se han dejado para el final de la discusión de la Constitución, cuando su sitio lógico era muy an-

terior, y nadie ha echado las campanas al vuelo.

Seamos todos responsables, asumamos cada cual nuestra postura y comprendamos la de los demás. Esta es exactamente nuestra postura. El rascar una facultad más o menos es absolutamente indiferente. Estábamos dispuestos a tener incluso la concreción autonómica mucho más breve, mucho más pobre, siempre que se nos garantizara una capacidad de progreso sin el recurso a una reforma constitucional que para nosotros, a través de nuestra propia fuerza y porque no queremos callejear y porque no queremos movilizaciones populares, es prácticamente imposible. Nada más, señores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arzalluz. ¿Algún otro Grupo Parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Roca, de la Minoría Catalana.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores comisionados, lo que me preocupa de mi intervención es que, por la suerte del reparto de las palabras, tenga que producirse después de la de los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, porque no quisiera en modo alguno que esto pudiera interpretarse ni como planteamientos contrapuestos ni como intentos de polemizar ni de réplica, porque ellos saben muy bien que ésta no es nuestra actitud, sino todo lo contrario.

Hecha esta salvedad, quisiera no obstante explicar muy concretamente cuál ha sido nuestra posición y cuál ha sido nuestra valoración del artículo 141 que acabamos de votar, porque esto es un trámite de explicación de voto. Trámite, no obstante, de explicación de voto que debe incardinarse, que debe incorporarse a una actitud que, como partido nacionalista o como partidos nacionalistas que son los que integran nuestro Grupo Parlamentario, viene dada en función de un planteamiento general en este tema constitucional.

Y como ya hemos dicho nosotros en el debate inicial, era una doble finalidad la que perseguíamos en este tema constitucional: primero, obtener la máxima autonomía posible,

y, en segundo término, que esta máxima autonomía posible se viera en un Estado fuerte y eficaz, superando así viejas concepciones y recelos.

Necesitamos un Estado fuerte y eficaz y lo necesitamos no ya por concepción, ni por principios, ni por conceptos desfasados, sino porque sin un Estado fuerte y eficaz no hay posibilidad de consolidar la democracia y, sin democracia, el ejercicio de la autonomía, del derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España no es posible. Sólo en la democracia las nacionalidades del Estado español han encontrado una vía hacia el reconocimiento de sus derechos, y precisamente con el fin de la democracia estos derechos se han visto siempre perseguidos y negados.

Por tanto, no hay nadie que con mayor ahínco quiera consolidar la democracia en España que aquellos que en definitiva se juegan también en ello el reconocimiento de su propia personalidad como pueblo.

Por tanto, queremos un Estado fuerte y eficaz. En el artículo 141 también esto estaba en juego.

Un segundo punto es el de que queremos la máxima autonomía posible. Lógicamente, aquí cabe decir qué es lo que entendemos unos por una autonomía posible y qué entendemos otros, y que muy posiblemente haya aquí diferencias en que unos queríamos más —nosotros mismos queríamos más— y quizá otros hubiesen querido menos. Pero ésta es una transacción legítima, porque también esto es un pacto.

Hay un pacto, y el pacto quiere decir reconocer que diversas concepciones confluyen en el juego constitucional y que cada una de estas concepciones legítimas, todas ellas tienen derecho a exponer y a plantear sus diversas concepciones del Estado y que como consecuencia de esta exposición resulta un pacto. Cuando yo acepto el resultado de este pacto, no hago con ello ningún tributo al partidismo catalán, sino que hago un tributo a las nobles reglas del juego democrático y, por tanto, a pesar de que en algunos aspectos yo hubiese querido más, me compensa el hecho de que ello sea un pacto constitucional con la validez, vigencia, nobleza y

solemnidad que en estos casos tiene este tipo de acuerdos.

Esta es para nosotros una Constitución abierta, es una Constitución que hace posible un Estatuto de autonomía que, para nosotros, desde la perspectiva de la Minoría Catalana, hace posible la recuperación de los principios e instituciones que configuraron nuestro Estatuto de autonomía de 1932.

Hoy esto es un problema de recuperación de libertad, y esto es una cosa que hemos podido conseguir. Es un problema de recuperación de libertad con una nueva adición importante, de modo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar aspectos también relevantes de nuestros específicos planteamientos, que es la exigencia de que esta recuperación de libertad se dé en el marco de una política de solidaridad. La solidaridad obliga a muchas cosas, obliga entre otras cosas a aceptar las exigencias de una situación en la que ya los hechos singulares, a través de su reconocimiento, no se contentan con este reconocimiento, sino que hoy encuentran un aspecto todavía más; es el de que en la solución de estas singularidades se ha querido encontrar la solución a la estructura general del Estado español.

Este es un aspecto en el que para nosotros valen pactos, valen transacciones y valen muchas cosas. Hemos pasado de una situación en que la singularidad tenía que ser resuelta a través de planteamientos singulares y exclusivos, con todo lo que ello crea de recelos, a una situación en la que la aceptación del hecho singular se positivice a base de exportar, transportar, generalizar el modelo de la solución de esta singularidad, dando a ello una estructura general del Estado.

Quisiera decir que en este punto había otro aspecto fundamental para el Grupo Parlamentario que yo represento, un aspecto fundamental que hoy me satisface poder decir que se ha cumplido plenamente, y es que esta política de recuperación, esta política de solución de nuestros específicos problemas en el marco de una política de solidaridad, se base también partiendo de una unidad básica de las fuerzas políticas catalanas.

Hoy se puede decir con satisfacción que hemos contemplado nuestra posición aquí en una línea de absoluta convivencia, en una

línea de absoluto entendimiento, de absoluta coparticipación con los demás grupos políticos catalanes, y que esto era fundamental, porque lo que yo no puedo ignorar es que una política que no hubiese hecho esto, no hubiese sabido encontrar un acuerdo positivo y válido entre las diversas fuerzas políticas representativas del pueblo catalán, hubiese podido abrir una irreversible división en la comunidad catalana, y que éste es el peor atentado contra cualquier planteamiento nacionalista como el que nosotros postulamos.

Desde nuestra perspectiva nacionalista, lo fundamental era agrupar, englobar en un planteamiento común a las diversas fuerzas políticas y sociológicas catalanas para no dividir en modo alguno la comunidad de nuestro país.

Lo que resulta del artículo 141 a nosotros nos dice una cosa. Estamos en condiciones de construir en Cataluña, a través del instrumento estatutario, un país sólido, capaz, eficaz y, evidentemente, fortalecido. Podemos, desde el pragmatismo de la aceptación que este pacto constitucional supone, recuperar muchos y muchos déficit en todos los terrenos de las infraestructuras, desde las económicas, desde las sociales y desde las culturales. Y esto es lo que hoy valoramos.

Sabemos que se han quedado muchas cosas en el camino, sabemos que, incluso, muchas veces, se han quedado por apriorismos o recelos que esperamos que dentro de un tiempo desaparezcan y nos permitan seguir avanzando en la línea que la Constitución nos permite; pero sabemos también que hemos encontrado la base suficiente para decirle, en todo caso, al pueblo de Cataluña que todas las fuerzas políticas catalanas estamos en condiciones, no únicamente de recuperar, sino de construir una nueva sociedad, que es lo que, en definitiva, está en juego. Y si somos capaces de trasladar este mensaje, si somos capaces de hacerlo así, lo haremos también con el entusiasmo de que hemos de hacer gala desde planteamientos políticos, porque sólo desde las políticas de la esperanza es posible avanzar. No es posible, diríamos, desde unas vías del escepticismo trasladar ningún optimismo al pueblo para hacerle capaz de encontrar sus propias soluciones en el devenir de la historia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. ¿No hay más solicitudes de palabra? (Pausa.)

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Una intervención muy breve, señor Presidente, por alusiones.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Letamendía, pero la Presidencia es únicamente la competente para calificar las alusiones. El artículo 61 del Reglamento determina que son alusiones cuando hay referencia del interviniente a actos o personas. En el artículo 118, apartado 4, se establece un turno de explicación de voto por término de cinco minutos para todos los Grupos Parlamentarios. Por la vía de unas alusiones, que no son alusiones, tendría lugar aquí una intervención cual si fuera un Grupo Parlamentario. La Presidencia, bajo su responsabilidad, le ruega que no insista en su solicitud y, como le quedan muchas enmiendas en artículos sucesivos, la 64 de S. S., tendrá ocasión de exponer cualquier tesis de fondo al particular. (Asentimiento del señor Letamendía. El señor Benegas pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Benegas.

El señor BENEGAS HADDAD: Cuestión de orden. Señor Presidente, tengo que decir que yo he hecho una alusión concreta al Diputado señor Letamendía, y creo que se le debería dejar contestar.

El señor PRESIDENTE: El señor Letamendía ha aceptado el criterio de la Presidencia y ruego dejen seguir el debate.

Tiene la palabra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Este artículo 141 es, evidentemente, un punto neurálgico de la Constitución. Todo el Título VIII de la Constitución es la parte más importante de la misma, porque nos pone en presencia de un viejo problema pendiente. Por eso creo que este artículo puede llegar a alcanzar la categoría de un símbolo, al contemplar, de un lado, las competencias del Estado, y, de otro, las competencias de las Comunidades Autónomas.

Hay un acuerdo general, no ya entre las fuerzas políticas, sino un acuerdo que proviene de la sensibilidad común de todo el pueblo español, de que es preciso terminar con un Estado centralista y sofocante, de que es preciso, y en esto también hay acuerdo con el que brota de la sensibilidad popular, de dar cumplimiento, dar satisfacción a las aspiraciones de los distintos pueblos de España, y liberar energías soterradas durante muchos años y aun durante siglos. Así se ha hablado por voces vascas o por voces catalanas, lo mismo podría hablarse por voces gallegas, como es mi caso, o por voces de todos los pueblos que componen España. Y ese problema secular al que me refería fue denominado de una manera gráfica que aún permanece, por un español insigne, por Ortega, como «la invertébración de España». Problema pendiente, vertebrar las partes disociadas de España, como lo es también vertebrar las partes de su cuerpo social, de las distintas clases sociales.

El mismo Ortega en el comienzo de ese libro, cuyo título acabo de recordar, incluye una cita de Mommsen de cómo la historia de los grandes pueblos es una vasta labor de incorporaciones y no de disociaciones. Yo creo que es lo que estamos intentando hacer aquí.

Ya comprenden SS. SS. que esto no se puede hacer en un minuto, en unas horas, que no se puede resolver con unas palabras, con unos preceptos por muy bien pensados que estén insertados en una Constitución; pero hay que intentarlo. No lo lograremos en un día o en unos meses, como decía el Presidente Kennedy al comienzo de su mandato, pero comencemos; es preciso intentarlo. Esa respuesta a ese problema pendiente y arrastrado exige una responsabilidad, que la respuesta se dé con un horizonte amplio, con el que viene delimitado por el pasado y por la proyección de lo que vamos a hacer hacia el porvenir. Un horizonte dilatado que vaya más allá del oportunismo, más allá de los problemas concretos del presente. Este horizonte es sencillamente España, de la que forman parte las generaciones pasadas, las que ahora están aquí representadas y las que vendrán detrás de nosotros.

Esta responsabilidad exige de todos nosotros, de las fuerzas políticas, más concreta-

mente de los representantes del pueblo español, de los comisionados —como se gusta decir en esta sala— prudencia, claridad y magnanimidad. Todas estas virtudes son necesarias en los momentos claves, en momentos cruciales como éste de hacer una Constitución, como el que corresponde a un período constituyente. Se trata de hablar con claridad y con sinceridad; se trata de no hacer una consideración retórica del reconocimiento de la personalidad de los pueblos. Y esto es lo que hemos hecho al reconocer y al regular las autonomías, al reconocer la existencia de las comunidades autónomas como partes integrantes del Estado. Pero, al mismo tiempo, tenemos que defender, tenemos que vigorizar el Estado. Un Estado democrático no es un Estado necesariamente débil; y en esto hay que poner un gran énfasis, porque prestaríamos un flaco servicio a la democracia si hiciésemos creer a los que no creen en la democracia que un Estado democrático es un Estado esencialmente débil, o un Estado esencialmente desarmado. No se puede desmedular al Estado. Queremos un Estado vertebrado, queremos una España vertebrada, y de ahí esas competencias exclusivas que ayer aprobamos al discutir y debatir el artículo 141.

Pero este título VIII, y concretamente este artículo 141, no cierra toda esperanza, no es como ese muro del cuento de Chejov que se encuentra a escasa distancia quien abre ilusionadamente la ventana. Es un artículo que tiene, evidentemente, fronteras, es un artículo que fija unos límites, que no concibe al Estado como un magma sin ninguna delimitación, sino de una manera vertebrada, de una manera clara y definida.

Pero encierra, asimismo, esa regulación de las competencias del artículo 141 una gran puerta abierta. No estoy de acuerdo con las afirmaciones que se han hecho de que aquí está todo cerrado, de que esta regulación no es abierta. Basta leer con cuidado las competencias que se fijan en este artículo 141; basta con leer esas prosaicas palabras, pero importantes en un texto constitucional, de «sin perjuicio», que se repiten en la lista de competencias del Estado; basta leer el apartado 2 del artículo 141, y basta también leer

el artículo 143 para concluir que hay un régimen abierto, que yo diría que no es menos generoso y que es más claro que el de la Constitución de 1931 y que tiene, en cambio, la ventaja de no ofrecer los peligros de disociación que allí pudieron encerrarse, quizá por fallos en su regulación.

Tiene este artículo 141, que hay que leer en conjunto con los demás que componen el título, la intención de rehacer el Estado, la intención de respetar y reconocer los legítimos derechos y las personalidades de las distintas Comunidades o de hacerlo de manera que no genere ninguna nueva frustración, que podría venir por la falta de claridad en las definiciones.

Creo que ayer se introdujeron mejoras importantes, y no voy ahora a detallarlas, en materia de legislación civil y procesal en relación con los derechos forales, en la lucha contra eso que es algo fundamental que hiera la sensibilidad de los españoles, como son los desequilibrios entre las distintas partes de España, al defender una enmienda concreta sobre concesiones hidráulicas e instalaciones eléctricas, porque a través de estas enmiendas, aparentemente modestas, se puede luchar contra los grandes problemas que laceran el alma española. Se ha introducido —y en esto estoy absolutamente de acuerdo— una mejora en la redacción relativa a enseñanza que ha de respetar las peculiaridades de las distintas partes de España, pero que, al mismo tiempo, nos deben enraizar en el mismo tronco común. Creo que ha habido una regulación equilibrada, que pienso que es simbólica también de todo lo que supone la Constitución en este título VIII, por lo que se refiere a la seguridad pública, al orden público, sobre lo cual ayer tuve ocasión de hablar. Se trata de garantizar ese orden público y esa seguridad y esa paz ciudadana, como armonía de libertades individuales, y también como armonía de libertades colectivas, más allá de la simple dialéctica de imponer y someter, buscando, en cambio, la colaboración, la participación, la responsabilidad de todos en una tarea común.

Lo que estamos haciendo aquí, lo que hemos aprobado ayer, es, indudablemente, sólo un punto de partida. No está escrito todo el

futuro en este texto constitucional, pero sí está aquí el germen de lo que puede ser la convivencia en una mucho más solidaria, mucho más justa.

España es una Patria común —lo dijimos al comienzo de esta Constitución— y todos tenemos que hacer esfuerzos para que nos sintamos cómodos en ese hogar común; es una tarea de todos, y lo que afecta a una parte afecta al resto de la comunidad, afecta al resto de España. No somos insensibles quienes no vivimos en el País Vasco, por ejemplo, a todo lo que allí ocurre, como tampoco son insensibles los que allí habitan respecto de lo que ocurra en todo el resto de España. Tenemos una historia en común, hemos vivido en común, queremos seguir viviendo en común, no sólo conllevarnos, sino comprendernos hasta el fondo, convivir, con toda la fuerza que lleva este término.

La responsabilidad que nos exige la respuesta a esta cuestión pendiente tiene que hacerse con visión de Estado, y que es la que debe acompañar y acompaña a todas las fuerzas políticas y que legítimamente yo debo predicar del Grupo Parlamentario al que ahora mismo represento, porque se trata de reconocer los derechos irrenunciables de los distintos pueblos de España; pero se trata también de no crear nuevas divisiones; de no engendrar nuevas frustraciones.

La Unión de Centro Democrático ha hablado de autonomías y las ha defendido; las ha defendido de una manera concreta y práctica, como puede demostrarse con la regulación que de las mismas se contiene en la Constitución. Han de conjugar cosas a veces muy difíciles. Tenemos que conjugar la unidad de España con la identidad de los pueblos que la integran, y tenemos que hacerlo sin imponer nada a nadie, en libertad. Por eso, en la base la regulación de las autonomías está la libertad. Todos pueden llegar al autogobierno, todos pueden convertirse en comunidades autónomas, pero todos tienen derecho también a hacerlo de acuerdo con lo que ellos quieran; de ahí las distintas fases o los distintos ritmos que la Constitución prevé de una manera general, sin que imponga nada a nadie.

Queremos zanjar, con este título VIII de

las autonomías, viejas querellas; pero no se puede hacer esto de una vez; es un problema no de unos, sino de todos, y es un problema de tiempo.

La Constitución es la norma fundamental para la convivencia, y esta Constitución reconoce y reclama la soberanía única, y sobre esta idea de la soberanía única tenemos que montar toda la regulación de las autonomías, con toda la flexibilidad necesaria, con todo el respeto que requieren los derechos históricos, a las peculiaridades de cada una de las partes que componen España. Esta es una Constitución abierta, pero tiene las fronteras que a sí misma se ha dado: la soberanía nacional, la unidad de España.

El Estado que en esta Constitución se delimita y se define no es un Estado magmático o de plastilina; es un Estado que queremos que tenga una osamenta recia que pueda aguantar todos los poderes del mismo; es un Estado para que convivamos todos. Interesa que todos colaboremos en la resolución de un problema que no es sólo de esta generación, sino que ha sido de generaciones anteriores, y que deseamos que no sea de las generaciones que nos sigan.

Creo que el contenido del artículo 141 y el modo en que se ha debatido marca un estilo muy característico de esta Constitución de 1978. Hay un esfuerzo compartido de comprensión; un esfuerzo enorme de comprensión por llegar a soluciones aceptables por todos. Esta es la gloria y la servidumbre del consenso. La comparación de este debate con el de las Constituyentes de 1931, en tantos puntos que dividieron irremisible e irreductiblemente, y después, desgraciadamente, de una manera bélica, a los españoles, arroja una gran ventaja para la situación presente, precisamente por el esfuerzo de concordia y comprensión de llegar a puntos de encuentro.

Es esto, señor Presidente, lo que quería decir en esta explicación de voto. Estamos poniendo los fundamentos, con esta Constitución, y concretamente con este título VIII, de la solución de un problema viejo y secular, los fundamentos de una España solidaria que recobre las energías de todos sus pueblos y las proyecte en nuevas y renovadas empresas comunes. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meilán.

Tiene la palabra el señor Martín Toval.

El señor MARTÍN TOVAL: Intentaré, con brevedad, explicar el sentido del voto de Socialistas de Cataluña, no sólo en este artículo 141, sino, también, en esta extrapolación breve, como se ha hecho en las restantes intervenciones, al conjunto de los que llevamos del título de las autonomías.

En primer lugar, mi Grupo quiere, con mucho énfasis, felicitarse del debate habido en relación a este artículo 141, debate posible, debate real, pese a lo que se había dicho de la incompatibilidad del debate constitucional cuando el consenso, eso que se ha dado en llamar el consenso, existía; consenso que yo también quiero aquí proclamar con énfasis que no es tal, sino acuerdos parlamentarios, y como acuerdos parlamentarios perfectamente integrables en el conjunto del debate de esta Constitución.

Nuestro Grupo ha ido interviniendo a lo largo de la discusión del artículo 141, y particularmente en el conjunto de apartados de su número 1, y, por tanto, no quiero aquí entrar en la explicación concreta del porqué de nuestro voto en cada uno de esos apartados; pero sí quiero decir que hemos votado en contra de todas aquellas enmiendas que se han planteado porque unas nos parecían regresivas en relación a otras enmiendas que hemos votado positivamente, o incluso al texto de la Ponencia, y otras no sabíamos el porqué se presentaban, no sabíamos qué finalidad perseguían y, en cualquier caso, no encontramos su encuadre lógico en el marco del título VIII tal como estaba diseñado y que tiene una filosofía concreta.

En este sentido, y sólo a título de ejemplo, creemos que la supresión de toda referencia a la seguridad pública en el apartado 25 de este número 1 supondría, quizá, contradecir algo que, desde luego, nosotros no queremos contradecir, y es que España es un Estado, incluso un Estado federal, como ya se ha afirmado repetidas veces. Es cierto que la solución —y no quiero hablar aquí de regiones o nacionalidades concretas—, es cierto que la solución de los problemas de orden público en las distintas regiones y nacionalidades

puede ser diversa; pero solución diversa que en absoluto puede desconocer, debe desconocer, desde nuestra perspectiva, que estamos construyendo un Estado. Es por esto —y siempre a título de ejemplo de lo que antes he afirmado respecto al conjunto de enmiendas— por lo que hemos votado la enmienda «in voce» presentada por Unión de Centro Democrático a este apartado 25, porque creemos que es más progresiva que la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Vasco, a la que hemos dado nuestro voto negativo. En la enmienda de UCD se explicita el reconocimiento por parte de la Constitución de la posibilidad de creación de Policías por las comunidades autónomas, mientras que no sabemos qué quería decir —y, desde luego, coincidimos con la interpretación que aquí ha dado un orador antes—, no sabemos qué quería decir la enmienda referente a las competencias estatales en materia de conflictos concurrentes entre comunidades, y pensamos que era una formulación más regresiva que la que ha sido aprobada.

El conjunto del artículo —en alguna de mis intervenciones de ayer ya lo afirmé— debe ponerse en relación con lo aprobado en el 139 bis, como competencia que pueden asumir las comunidades autónomas, y lo que presumiblemente hemos de aprobar, a la vista de los textos de las enmiendas presentadas y del texto de la Ponencia, en los artículos 142 y 43, es —ya lo he indicado antes— un marco coherente, generalizado y generalizable de autonomías que conforma un Estado unido en las autonomías, un Estado de autonomías. Cree nuestro Grupo que ese marco permite ir asumiendo, progresivamente, competencias desde el Estatuto, o después del Estatuto, por parte de las comunidades autónomas, pero siempre con un límite: el límite de no romper el Estado. Nosotros aquí hemos hablado y explicitado nuestro proyecto de Estado. Posiblemente, otras fuerzas y Grupos Parlamentarios no lo han explicitado tanto. Aquí se ha hablado, y nosotros hemos tenido que reafirmarlo, de que tenemos un programa de objetivos que, en el marco o en la referencia de lo que sería la organización del Estado, tiene como punto final la organización de un Estado federal. Pero también hemos explicitado que aquí hemos venido a procurar la confirmación

constitucional de un Estado unido, abierto a las autonomías. Por eso nosotros hemos luchado y seguiremos, en lo que queda de este título, manteniendo posiciones que permitan el engrandecimiento, la apertura de esas autonomías, sin menoscabo de la existencia del Estado. No estaremos, como aquí se ha dicho, por aceptar unas autonomías más pobres a costa de que la Constitución sea más abierta, porque no entendemos a qué ha de ser más abierta: o lo es a las autonomías, y, por tanto, vamos por ellas, o, si no, no lo entendemos.

Construir un nuevo Estado es y ha sido el objetivo de mi Grupo en las discusiones constitucionales. Hemos asumido en ello toda la responsabilidad que creemos debíamos asumir. No hemos venido aquí a hablar sólo de Cataluña —aunque somos un Grupo que representa el sector mayoritario electoral del 15 de junio en Cataluña; hemos venido aquí a hablar de un Estado, del Estado España, a construir un Estado democrático y un Estado de las autonomías.

Mi Grupo tiene que congratularse de que en la discusión de este punto del Título de las Autonomías hayamos podido lograr una coincidencia fundamental entre todos los Grupos y Diputados que, directa o indirectamente, representamos aquí al electorado de Cataluña. Es para nosotros fundamental entender que las autonomías que estamos constitucionalizando sirven y deben servir en esta Constitución para construir el Estado y no para destruirlo. Se trata, en suma, de construir un Estado unido en la solidaridad de todas sus regiones y nacionalidades, todas ellas con capacidad igual de acceder a su autogobierno.

Finalizo con la reiteración de algo que ya indiqué ayer en una de mis intervenciones, en representación de mi Grupo. Ayer intervine en un determinado momento para pronunciar-me en contra de testimonialismos y protagonismos, a los que aquí hoy también se ha hecho referencia. Creemos que la tarea que aquí nos incumbe es la de la responsabilidad en la construcción de ese Estado de las autonomías al que tanta referencia se ha hecho, no —y quiero ser muy amigable en esta expresión— la irresponsabilidad testimonial, máxime cuando se ha llegado a afirmar, «sotto voce», que había acuerdo real en que

este título podía representar y representa la auténtica consecución de reales y ejecutivos autogobiernos por parte de todas las regiones y nacionalidades del Estado español. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Toval.

Tiene la palabra el señor Fuejo, del Grupo Mixto.

El señor FUEJO LAGO: El Grupo que represento quiere dejar constancia de su satisfacción por haber conseguido constitucionalizar las autonomías de las comunidades de los pueblos que integran España. Es una vieja aspiración de los Socialistas. Este es un primer paso que asume y que lleva y conlleva enormes posibilidades para el futuro. Tenemos una gran fe en la capacidad de convivencia y solidaridad de las nacionalidades, de los pueblos catalán y vasco, que forman hoy la avanzada de la vieja aspiración de las autonomías y de los autogobiernos. La utilización del autogobierno y la experiencia de este proceso, de cómo llevemos en el futuro la política de las autonomías, será un ejemplo a seguir por las demás regiones que forman el Estado español. Si las autonomías de las comunidades enriquecen y ayudan a consolidar la democracia y la unidad del Estado, debemos agradecer a estos pueblos que han llevado la avanzada, porque destruirían la idea centralista de la unidad de la Patria, que, en el fondo, no esconde más que la pervivencia de los privilegios escudándose en esta idea centralista de la unidad del Estado español.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuejo.

No hay más solicitudes de palabra.

Vamos a suspender la sesión quince minutos exactamente, con la advertencia de que empezaremos justamente dentro de quince minutos.

También, como plan de trabajo, tenemos que comunicar que, a pesar de que la Presidencia había dicho que esta tarde no trabajaríamos, por solicitud de la mayoría de los Grupos Parlamentarios vamos a trabajar. Lo siento por lo que suponga de perturbación —y a mí el primero— la variación de los

planes de viaje. Vamos a trabajar desde las cuatro de la tarde, porque ya que se hacen sacrificios, empezaremos la sesión a las cuatro, en el bien entendido de que se levantará a las ocho.

De momento, repito, suspendemos la sesión por quince minutos, como máximo.

Se reanuda la sesión.

Artículo 142 El señor PRESIDENTE: Artículo 142. Enmienda del señor De la Fuente, número 35. Puede hacer uso de la palabra S. S.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Yo no sé si, dada la situación de la sala, debo empezar a defender mi enmienda, puesto que, naturalmente, las personas que van a decidir con su voto, si se admite o no, no están aquí. Yo le pediría al señor Presidente que esperáramos unos momentos.

El señor PRESIDENTE: Tiene mucha razón S. S., pero yo no les puedo traer a la fuerza.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista escucha con la máxima atención al señor De la Fuente y los votos de los socialistas están aquí ya, así como también los de Unión de Centro Democrático, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Mixto y la Minoría Catalana.

El señor PRESIDENTE: Haga lo que quiera Su Señoría.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Como en ningún caso quiero que mi intervención pueda retrasar el ritmo de los debates y, efectivamente, entiendo que, aunque seamos pocos en número, tal vez la calidad de los asistentes pueda compensar esta falta de número, yo, con mucho gusto, acepto la indicación del señor Presidente.

Paso a defender el contenido de mi enmienda al artículo 142, número 1, que, en definitiva, postula la supresión de este apartado. Yo creo que, como decía antes con toda razón el señor Roça Junyent, en el fondo, lo que

se está discutiendo en este capítulo son diferentes concepciones del Estado nacional y de las autonomías que son posibles dentro de un Estado nacional, que sea lo suficientemente fuerte precisamente para que las propias autonomías sean posibles.

No nos engañemos con utopías o con bonitas palabras; creo que hay que descender a los hechos y a la realidad de cada día. Los hechos y la realidad de cada día nos dicen que los grandes problemas son fundamentalmente problemas nacionales, que tienen que resolverse desde la nación en su conjunto y, por tanto, desde el Estado nacional.

Nosotros, con el afán de resaltar la individualidad, la personalidad de dar satisfacción a las distintas partes del territorio nacional o de los pueblos que lo integran, podríamos, efectivamente, irles atribuyendo una sucesión constante de funciones cada vez más amplias, y podríamos encontrarnos, al final, con que estos mismos pueblos, con que estas mismas comunidades autónomas, por la necesaria limitación de sus posibilidades dentro del ámbito en que se mueven, no eran capaces de resolver los grandes problemas de su pueblo que, o se resuelven a nivel nacional, o difícilmente pueden ser resueltos.

Por eso, efectivamente, nos encontramos ante un problema de gradación entre lo que deben ser funciones y atribuciones del Estado y lo que deben ser funciones y atribuciones de los distintos organismos de las entidades autonómicas.

En este sentido, hay que hablar con el suficiente realismo para que esta combinación de funciones no dificulte o imposibilite de hecho la resolución de los grandes problemas nacionales. Naturalmente que no solo nos encontramos ante el tema de consideraciones de hecho. Por supuesto que existen en su raíz problemas de la concepción misma del Estado y de la soberanía. Es evidente que en el límite de esta concepción, por lo que se ha dicho aquí hace un rato, podría encontrarse la posición del señor Arzalluz, cuando afirma que, en realidad, la soberanía no corresponde al pueblo de España, sino que la soberanía corresponde a cada uno de los pueblos que en España están integrados. Si se parte de este supuesto, las conclusiones tienen que ser realmente diferentes. Pero yo creo que hemos

dejado sentado en la Constitución que la soberanía radica en el pueblo español, en su conjunto, y creo que esto es importante que no lo perdamos de vista en ningún momento, porque creo que ésta es la realidad histórica a la que hemos llegado al cabo de un proceso de integración que ha durado muchos siglos, y porque si ahora, incluso, tratáramos de delimitar y dividir la soberanía entre diversos pueblos de España, me temo que tendríamos que empezar a hacer un retroceso de siglos en unos avances de investigación histórica y pararnos, bien en un siglo o bien en otro siglo, para determinar concretamente en muchos casos cuál es la parte del pueblo español detentadora de esa soberanía, que, de alguna manera, se haría así parcial y fraccionaria.

Es, por tanto, a mi juicio, un principio fundamental del que hay que partir, el que ya ha establecido la Constitución de que la soberanía radica en el pueblo de España como un conjunto, como una totalidad, la cual hay que hacer, por supuesto, compatible con la idea de unas funciones y de una participación en el autogobierno de las entidades autónomas a base de una distribución de funciones y de competencias que, de un lado, permitan, efectivamente, la vida de esas comunidades, pero que, de otro, no debiliten el Estado de tal manera que prácticamente, al no resolverse los grandes problemas del pueblo a nivel nacional, la vida de las propias Comunidades Autónomas se vieran en peligro.

Creo que éste es el gran tema y el tema de prudencia y el tema de tacto que tiene que tener la Comisión al redactar los textos constitucionales en materia de autonomías, y creo que, en este sentido, como algunos otros han dicho antes que yo, son comprensibles y respetables las posiciones de todos, y yo, por lo menos, las respeto; pero son también y deben ser comprensibles y aceptables las discrepancias, sin que estas discrepancias merezcan por ello ningún tipo de valoración peyorativa. Yo estoy absolutamente convencido de que todos y cada uno de nosotros, aunque estemos defendiendo, probablemente, una concepción distinta del Estado, lo estamos haciendo con el mismo afán de servir a los intereses de nuestra Patria y de nuestro pueblo y, desde luego, lo que yo diga es pura

y exclusivamente con ese afán, y así quiero que sea interpretado.

En este sentido, mi enmienda al artículo 142 y la que tengo al artículo 143, de la que hablaremos luego, pero voy a concretarme ahora a la del artículo 142, lo que propone es la supresión del apartado 1, que dice que «las leyes de bases aprobadas por las Cortes Generales podrán atribuir expresamente a todas y cada una de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar para las mismas la correspondiente legislación delegada».

El fundamento de mi enmienda está en que si una vez establecidas las bases de una legislación se permite que cada una de las Comunidades autónomas desarrollen estas bases de forma diferente, nos encontraremos con una pluralidad legislativa y con una diversidad legislativa dentro del territorio español, que puede hacer inútil este principio que también se viene repitiendo a través de muchos artículos de la Constitución, de que todos los españoles son iguales ante la ley y de que todos los españoles tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones. Porque todos podemos comprender que en el desarrollo de una Ley de Bases queda la suficiente amplitud para que en una legislación delegada se puedan establecer derechos y obligaciones diferentes para unos españoles en relación con otros, según sea la comunidad que haya hecho el desarrollo de esa legislación básica; es decir, según sea la comunidad a la que hayamos atribuido la facultad de una legislación delegada; legislación delegada que, por otra parte, plantea una serie de problemas técnicos también bastante complejos. Porque, como aquí se dice sólo que podrá atribuirse esta legislación delegada, tenemos que acudir al artículo 75 para ver los condicionamientos de esta legislación delegada. Naturalmente, estos condicionamientos se establecen en relación con el Gobierno, porque es al Gobierno al que, en términos generales, establece la Constitución la facultad de dictar legislación delegada. Si no se dijera que las Comunidades Autónomas están sometidas en el desarrollo de la Ley de Bases a los mismos condicionamientos que el Gobierno, entonces la complicación sería todavía mucho mayor, e incluso esta legislación delegada de las Comunidades Autónomas podría quedar exenta de faculta-

des de suspensión, que para las Comisiones de las Cortes Generales establece el punto 6 de este artículo 75 del texto constitucional.

Como se ha repartido con anterioridad, y tengo a la vista, una enmienda «in voce» que al parecer va a presentar Unión de Centro Democrático sobre este apartado 1, encuentro que si, efectivamente, esta enmienda fuera aceptada, gran parte de estas objeciones que yo estoy poniendo quedarían salvadas. Es decir, mejoraría sustancialmente el texto, porque al menos quedaría claro que la legislación delegada que se pueda dictar por las Comunidades Autónomas está sometida a los mismos requisitos y condicionamientos que la legislación delegada que realice el Gobierno. Entonces, quedaría sólo como objeción fundamental por mi parte, pero ya como una objeción más débil, porque si las Leyes de Bases condicionan suficientemente la legislación, tal vez este efecto no podría producirse, el que señalaba al principio de que no pueda establecerse a través de una legislación delegada una diferencia sustancial de derechos y obligaciones entre todos los españoles. Creo que la legislación delegada puede ser útil para recoger, efectivamente, una singularidad de situaciones en la pluralidad diferencial que es realmente España. Pero creo que deberemos tomar todas las garantías para que en esta Constitución, de ninguna manera, se establezca una diferenciación sustancial entre el contenido básico de derechos y obligaciones de unos españoles en relación con otros.

Yo termino con esto mi intervención a este artículo 142. Y, a la vista de lo que ocurra con la enmienda de la Unión de Centro Democrático, propondría, en su caso, después a la Presidencia, si sometía o no a votación mi enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Fuente.

Había pedido la palabra don Miguel Roca, pero entiendo que, dado lo manifestado por el enmendante, podríamos conceder la palabra a la Unión de Centro Democrático, salvo que el Grupo Parlamentario Vasco quiera mantener la enmienda 676 que tiene presentada. ¿Se mantiene por Su Señoría?

El señor VIZCAYA RETANA: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vizcaya. Entonces tiene la palabra el representante de Unión de Centro Democrático para defender la enmienda «in voce» que, a juicio de esta Presidencia, comporta que una vez debatido el punto 1 de la enmienda de Sus Señorías tendríamos que entrar en el debate del artículo 143, porque significaría que dicho artículo 143 pasaba a ocupar el apartado 2 del artículo 142. ¿Es del mismo parecer el enmendante?

El señor MEILAN GIL: Absolutamente coincidente.

El señor PRESIDENTE: Entonces, adelante. Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MEILAN GIL: Para poner en suerte la enmienda «in voce» simplemente con un capotazo. Porque la enmienda propone, en primer lugar, la siguiente reordenación: que el apartado número 1 del artículo 142 sea el actual apartado número 1 de dicho artículo 142, añadiendo al final la expresión «en los términos de los artículos 75 y 76». La finalidad es muy clara y consiste en que el ejercicio de esta legislación delegada se haga con las garantías establecidas precisamente en los artículos 75 y 76, de tal manera que no haya ninguna duda respecto al alcance del ejercicio de esta potestad de legislación delegada.

Por lo que se refiere al apartado número 2, sería el actual artículo 143, sin modificación.

Y el apartado número 3 sería el actual apartado 2 del artículo 142 con unas leves modificaciones: concretamente sustituir los «entes territoriales», que figuraba en el proyecto de la Ponencia, por «Comunidades Autónomas», y cambiar el final relativo a la competencia que se atribuye al Senado en dicho artículo 142, atribuyéndosela a las Cortes Generales, de tal manera que diga «Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad», para evitar con ello estas discrepancias que pudieran producirse, tal como se ha dicho aquí hace un momento, en relación con el ejercicio de las potestades concedidas a las Comunidades Autónomas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meilán.

Tiene la palabra el señor De la Fuente.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Señor Presidente, si se va a discutir a la vez el artículo 143, de acuerdo con lo que propone la enmienda «in voce», yo tengo presentada una enmienda a dicho artículo 143. La Presidencia verá si éste es el momento de defenderla.

Artículo 143 El señor PRESIDENTE: Ahora mismo entramos en el debate del artículo 143, por cuanto el epígrafe número 1 de la enmienda no ha tenido contradicción. Entramos también, pues, en el artículo 143, que corresponde al número 1 del artículo 139 del primitivo texto.

Tiene la palabra el señor De la Fuente, para su enmienda 35.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Mi posición en relación con este artículo, que pasaría a ser un nuevo apartado del artículo 142, tiene que ser mucho más tajante y contundente que lo que decía antes en relación con el apartado 1.

Mi enmienda proponía la supresión de este apartado del antiguo artículo 139 —que se convirtió en un artículo nuevo, el 143—, por el cual se establece que el Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica y previa solicitud de las mismas, la ejecución de funciones de titularidad estatal.

Vale como justificación de mi petición de supresión de este apartado cuanto con carácter general decía antes al hablar del artículo 142, en relación con la necesidad de mantener un Estado nacional lo suficientemente fuerte para que incluso las propias autonomías sean posibles.

El señor Meilán hablaba hace un rato en su intervención, citando el libro de Ortega «La España invertebrada», de la vertebración de España y no de la disociación de España. Esta es, efectivamente, la tesis de Ortega, no sólo en este libro, sino en muchos otros artículos.

Creo que todo el proceso de vertebración de España para hacer de ella una nación es un proceso netamente positivo que debemos asumir y que debemos guardar evitando incurrir en ese otro fenómeno que sería la disociación de España, lo cual haría de España no una

España vertebrada, sino una España precisamente disociada.

A lo largo de las intervenciones anteriores que han ido justificando los distintos votos, se ha puesto de manifiesto cómo ya prácticamente no se habla de España como nación, sino de España como Estado.

Creo que es un tema que discutimos muy al principio de los trabajos de esta Constitución —así por el artículo 2.º—; entonces se decía que no era incompatible el concepto de una pluralidad nacional con el concepto de una unidad nacional. Yo sostuve entonces la tesis contraria, y las intervenciones que se han venido produciendo a lo largo de esta mañana me dan en este sentido la razón. Poco a poco van llevando la Constitución hacia una situación en la cual la declaración inicial de la unidad nacional de España puede verse absolutamente desvirtuada y llegar, efectivamente, a concebir España como un Estado plurinacional, cosa que es absolutamente diferente, y que es la conclusión lógica que yo veía que se iba a producir cuando discutíamos el artículo 2.º Por ello me oponía a la introducción del concepto de nación como no fuera específicamente referido a la nación española, porque me daba cuenta de las consecuencias inevitables que a lo largo de la configuración posterior de las autonomías iban a deducirse de esta trastocación fundamental, de hablar de España como nación a hablar de España como simple Estado.

Creo que ahí está encerrado un problema político de primer orden y que si nosotros, al final de la Constitución, en vez de configurar de verdad una nación de España configuramos sólo un Estado, entonces habrá sido inútil. Será absolutamente ineficaz aquella declaración que contiene el artículo 2.º acerca de la unidad nacional de España, y tendremos que recordar, desgraciadamente, que ya otra Constitución empañada empezó configurando al pueblo español como un conjunto de hombres puros, buenos y benéficos, sin que esta simple declaración, como es lógico, convirtiera a continuación nuestro país en una especie de paraíso terrenal del género humano.

Naturalmente, las declaraciones teóricas —ya se ha dicho aquí esta mañana— tienen un valor relativo. Lo importante es convertir esas declaraciones en la instrumentación ju-

ridica que las haga viables, que las haga posibles y que las mantenga, y si nosotros queremos mantener la unidad nacional de España, no nos basta con declararlo en una frase más o menos bonita, tenemos que establecer los instrumentos jurídicos que mantengan esta unidad nacional y que mantengan la fortaleza del Estado, que la defiendan y que la sostengan.

En este sentido, entrando ya en el artículo 143, resulta que nos hemos pasado discutiendo muy pormenorizadamente qué funciones pueden corresponder a las Comunidades Autónomas y qué funciones se reserva exclusivamente el Estado. Y en el artículo 141, a lo largo de todo el día de ayer, se discutió con apasionamiento qué funciones se considera que el Estado debe reservarse, a mi juicio, porque son absolutamente necesarias para la fortaleza de este Estado y porque responden a intereses generales que deben lógicamente estar por encima de los intereses puramente parciales o de los intereses puramente territoriales de las Comunidades Autónomas.

Pero yo me pregunto: ¿De qué puede servir que se haga una delimitación tan precisa de las funciones que son de exclusiva competencia del Estado si luego se puede hacer una delegación de esas funciones en las Comunidades Autónomas? Entonces resultará que funciones que antes hemos considerado que deben ser ejercidas por el ente nacional, porque son de interés general para todos los españoles, van a ser ejercidas a través de una parte de nuestro pueblo, concretamente de una o de varias de las Comunidades Autónomas, con lo cual, aparte de contradecir este principio que había servido para definir lo que debe ser competencia del Estado y lo que debe ser competencia de las Comunidades Autónomas, habremos dado origen a una desigualdad.

Yo digo que hay que atenerse a los hechos, y si prospera el artículo, con el tiempo lo veremos, habrá una desigualdad sustancial entre las distintas Comunidades Autónomas españolas o entre los distintos españoles. Unos van a tener no sólo el catálogo de funciones que ya se reconocen para las entidades autónomas, sino, además, una parte de aquellas que el Estado se ha reservado como compe-

tencia propia mientras que, por la ley natural de los hechos, en otras partes del territorio español esto, naturalmente, no será posible y ello dividirá a los españoles en dos categorías diferentes.

Esto va a ser así, lo digamos o no, como ocurrió cuando la Constitución dijo que los hombres eran buenos y benéficos y no por eso lo fueron. Las cosas serán como son por la fuerza de la realidad y de los hechos y no por las puras declaraciones programáticas que, en este sentido, haga la Constitución.

Y a través de este artículo 143 estamos introduciendo, indudablemente, un principio de desigualdad y un principio de división entre todos los españoles. Pero es que haremos algo más, y yo por eso tengo una gran preocupación por el tema, estaremos introduciendo un principio de reivindicación permanente de las Comunidades Autónomas frente al Estado. Aquí se ha hablado en el sentido de que la Constitución no puede ser cerrada y tiene que ser abierta y, llevando teóricamente esta afirmación a sus últimas consecuencias, resultaría que el objeto último de estas Comunidades Autónomas sería poder absorber prácticamente todas las funciones que en este momento tiene atribuidas el Estado.

Quiere decir entonces —y al decirlo no hago ninguna exageración, porque naturalmente comprendo que aquellos que entienden que la soberanía nacional no reside en el pueblo entero de España, sino en una parte concreta y parcial de ese pueblo, es lógico que mantengan abierta una reivindicación permanente para la asunción de todas las funciones en que esa soberanía se manifieste— que el dejar abierta esta posibilidad de asumir las funciones que el Estado se ha reservado para sí, es dejar una incitación permanente para una reivindicación de esas Comunidades Autónomas, que, Dios sabe, nadie puede luego controlar cómo va a manifestarse. Y que cuando se trata de utilizar instrumentos de presión frente al Estado para arrancarle una u otra de sus competencias, nadie podrá garantizarnos, en este momento, qué tipo de instrumentos de presión van a ser utilizados.

Creo que es necesario que miremos las cosas con la máxima serenidad y con el máximo realismo y que tengamos cuidado en no llegar en este tema más allá de donde, lógicamente,

se quiere llegar, se debe llegar, si no se quiere, como decía antes el señor Meilán, desarmar el Estado, desgazar el Estado; y una vez más digo esto no solamente desde la defensa de un Estado nacional, sino desde la defensa de las propias autonomías, porque si cometiéramos el error de hacer unas autonomías que de alguna manera hicieran inviable la vida del Estado nacional, yo aseguro que sería también inviable la vida de las propias comunidades autonómicas, porque están los problemas profundamente ligados entre sí y, si no se resuelven los problemas de los españoles a nivel nacional, difícilmente en el mundo en que nos ha tocado vivir se van a poder resolver a un nivel tan limitado como el que supone cada una de las Comunidades o Entidades Autónomas.

Quiero resaltar, al hablar del artículo 143, que en este sentido además la redacción es tan amplia que dice expresamente que podrá delegarse la ejecución de las funciones cuya titularidad asume el Estado. Entonces quiere decir que todas y cada una de las funciones que están contempladas en el artículo 141 pueden ser delegadas, puesto que no se hace ninguna referencia en contra. Por eso se ha dicho expresamente en el tema del orden público, que llevó ayer a una discusión tan larga y apasionada, que, en virtud de esta nueva delegación se podrían rebasar totalmente las fronteras que ayer se consideró que no era conveniente rebasar, y ser asumido en su integridad por una o algunas de estas Comunidades Autónomas. Lo mismo podría ocurrir con el problema de la legislación en materias básicas, o lo mismo podría ocurrir con el problema de la defensa, porque no se hace ninguna exclusión de las facultades cuya titularidad corresponde al Estado. Y el concepto de ejecución de las funciones cuya titularidad corresponde al Estado, quiere decir que si esa función es legislar, la ejecución de esa función es dictar leyes.

Yo estoy pensando que los autores de esta redacción es difícil que hayan querido llegar tan lejos. Pero lo cierto es que lo que dice esta Constitución es que la ejecución de cualquiera de las funciones —y la ejecución unas veces puede ser legislar y otras veces puede ser administrar— puede ser delegada en las entidades autónomas. Y si esta expresión se

mantiene en estos términos, es evidente que resulta, de alguna manera, relativamente inútil todo lo que se ha dicho y se ha discutido acerca del artículo 141. Yo pienso, más bien, que tal vez lo que los redactores del precepto hayan querido manifestar —y no es que esté de acuerdo con ello— es que cabe la delegación de algunos aspectos ejecutivos o administrativos de esta materia de la titularidad del Estado. Pero lo cierto es que la expresión que han utilizado no dice eso, y como yo presumo que mi enmienda, como si dijéramos, a la totalidad de este artículo, no va a prosperar (aunque yo en conciencia me he considerado obligado a defenderla porque lo entiendo así, y entiendo que mi criterio puede ser equivocado, pero merece la comprensión y el respeto de los demás, como yo tengo también para los criterios ajenos); no obstante, así la mantendré hasta el final, aunque puede no ser aceptada; yo al menos querría llamar a la reflexión, en un sentido totalmente constructivo, de las personas que más o menos han influido en la redacción de este precepto, para que traten de perfeccionar esta redacción de tal manera que no tenga la amplitud que ahora tiene.

Creo que más que referirse a la ejecución de funciones han querido decir funciones ejecutivas, pero no lo han dicho. Tal vez, simplemente, ese cambio terminológico sería suficientemente expresivo para hablar de que de lo que se trata es más bien de temas administrativos y ejecutivos que de la ordenación o de la legislación, etc. Pero tal vez todavía se puede llegar en ese perfeccionamiento a algo más.

Aquí se ha citado continuamente la legislación italiana como una de las fuentes inspiradoras de nuestro texto constitucional. Pues bien, cuando la Constitución italiana habla de este tema dice exactamente que el Estado, mediante ley, podrá delegar en las regiones —aquí no se atrevieron, por supuesto, a poner el término naciones, no obstante ser Italia una nación de nacimiento muchísimo más reciente que la nuestra— el ejercicio de otras funciones administrativas. Funciones administrativas, no la ejecución de las funciones de titularidad del Estado, sino de funciones administrativas, de la materia cuya competencia corresponde al Estado.

Llamo la atención de los demás Grupos Parlamentarios acerca de que tal vez sea ésta la intención; y si es ésta la intención, yo, en un sentido constructivo —aunque yo no lo vaya a apoyar, porque me opongo a la totalidad del precepto— insisto en que, tal vez, este texto salvaría algunas de las objeciones fundamentales que yo he mantenido. Desde luego, si no se hace esa corrección, las objeciones fundamentales quedarían totalmente en pie.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Fuente.

El señor Roca había solicitado la palabra.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, hablará en nombre de la Ponencia, pero, antes de asumir este papel, quisiera invocar que una buena norma de juego democrático, en este debate constitucional, sería no caer en una vieja astucia, que creo que, evidentemente, el señor De la Fuente está practicando, con todos los respetos, que es combatir el artículo 2.º en cada uno de los artículos de la Constitución, aun cuando no tengan nada que ver.

Dicho esto, señor Presidente, ahora, en nombre de la Ponencia, lamento decir que este artículo, en sus tres apartados, es un artículo hecho con el acuerdo de la Ponencia, en el que contribuyó a formar la mayoría el señor Fraga, deduciéndose además de la literalidad de su voto particular, en la página 702, del «Boletín» de 5 de enero de 1978, al artículo 14; voto particular de Alianza Popular, que es prácticamente idéntico al apartado 1, que ha sido enmendado por supresión de don Licinio de la Fuente.

Yo no sé si éste es un problema de coherencia o no, pero, en todo caso, Alianza Popular estaba conforme con el texto que resulta aquí. Y en el apartado 2, que es el artículo 143, en donde la diferencia es lo que don Licinio de la Fuente está sosteniendo, que es hablar de funciones administrativas, en vez de funciones de titularidad estatal, se concretó en la Ponencia que ésta era una redacción más afortunada, más técnica, ya que en definitiva estaba en la línea que se señala en este apartado 2.

Por lo tanto, no se desarma nada, no se está haciendo nada en contra de las cosas que

ha invocado don Licinio de la Fuente apelando a la coherencia de los comportamientos parlamentarios que por todas las voces han sido expresados. Por esto pedimos que se mantenga tal como está en la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Parlamentario de UCD, que viene a mejorar, incluso, lo que antes figuraba.

El señor PRESIDENTE: Como era enmienda escrita, don Licinio de la Fuente puede consumir un segundo turno.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Voy a consumir el segundo turno porque, aunque no tengo ninguna razón más que alegar de fundamental a lo que ya he expuesto —lógicamente no quiero ser reiterativo—, sí quiero contestar a las dos objeciones del señor Roca Junyent.

Quiero decirle que el que en el capítulo de las autonomías haya que hacer continuas referencias al problema de las naciones y de las nacionalidades, es una cosa absolutamente necesaria y congruente porque, naturalmente, la regulación de las autonomías (y no soy yo el primero que lo ha hecho, lo he visto en todas las explicaciones de voto) deriva fundamentalmente de cuál sea el concepto que, en relación con el Estado y con la nación española, tiene cada uno de los Grupos Parlamentarios o de los Diputados. De modo que es lógico y natural, cuando se están discutiendo los problemas de las autonomías, que tenga que hacerse referencia a los problemas de la concepción del Estado y de la concepción de la nación. Creo que no es recurrir a ningún viejo truco, sino ir absolutamente a las raíces de los problemas cuando hay que discutir sobre un tema concreto.

Y la otra objeción que ha hecho el señor Roca Junyent es que mi enmienda está en contradicción con un texto del voto particular de don Manuel Fraga.

Primero, yo creo que ya dijimos desde el principio que, naturalmente, las posiciones de los ponentes que redactaron el proyecto constitucional han sido después variadas sustancialmente por las enmiendas de sus Grupos. No se puede decir que en eso yo sea una excepción. Quisiera saber cuántas enmiendas ha presentado el señor Roca Junyent a los textos

que él aprobó; cuántas ha presentado Unión de Centro Democrático o cuántas ha presentado el Partido Socialista, y me parece lógico y razonable, porque, naturalmente, el texto de los ponentes era un texto de trabajo; si el texto de los ponentes hubiera vinculado a todos los miembros de los Grupos Parlamentarios, yo me temo que esta discusión de semanas hubiera sobrado, porque con haber dicho amén al texto de los ponentes hubiéramos tenido bastante. Yo creo que los ponentes sabían que los Diputados tenían el margen de libertad para hacer enmiendas a lo que ellos habían escrito y no podían sentirse vinculados (y además esto lo dice el propio Reglamento de esta Cámara) por lo que hubieran dicho previamente sus propios portavoces.

Hay algo más. Yo quiero aclarar en este punto que, tal vez, el señor Roca Junyent no ha entendido exactamente el fondo de mi enmienda, porque, si no he oído mal, dice que está en contradicción con el artículo 14. ¿Es así?

El señor ROCA JUNYENT: Exactamente.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Con el voto particular de don Manuel Fraga. Pues bien, la enmienda que yo estoy defendiendo en este momento —que es la del 143 y no la del 142— no tiene en absoluto nada que ver con este artículo 14, porque el artículo 14 habla de la facultad de legislación delegada, que es el tema al que me he referido en la enmienda anterior, y en la cual ya he manifestado, en cierto modo, mi aceptación de la precisión de la Unión de Centro Democrático. Pero yo no estoy hablando ahora de la legislación delegada; de lo que estoy hablando es de la delegación de funciones, cuya titularidad corresponde al Estado, tema que es del artículo 143 y no del 142 y, tal vez, en este sentido, quizá pudiera haber un error por parte del señor Roca.

El señor ROCA JUNYENT: No ha habido error.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Fuente.

Para un turno en contra tiene la palabra el señor Arzalluz.

El señor ARZALLUZ ANTIA: Señor Presidente, yo quiero ser absolutamente breve porque creo que en la larga disertación de don Licinio de la Fuente hay unas cuantas inexactitudes que conviene dejar claras.

En primer lugar, cuando aquí se habla de la soberanía del pueblo, o se ha hablado, ha sido refiriéndonos a una concepción de la formación del Estado. Desde el momento en que un pueblo se estructura con otros en un Estado, se le transfieren unas cotas de soberanía; esas cotas de soberanía son del Estado, están transferidas, y no se puede hablar, por lo tanto, de que hay, diríamos, pueblos que andan por libre, sino que existe un Estado.

Nadie ha discutido aquí, por lo menos por nuestra parte, un techo de soberanía estatal absolutamente indispensable para que ese Estado —el Estado siempre es uno— subsista y sea fuerte, porque es necesario para todos.

En cuanto al tema de la delegación, francamente mis concepciones jurídicas no entran en que una delegación de funciones ejecutivas pueda ser legislativa: funciones de ejecución. Además, es evidente que esta delegación implica siempre medidas de control e incluso de vuelta de esa delegación concedida que está en manos del delegante.

Por lo tanto, aquí no se rompe nada, aquí no se socava nada, sino que el Estado actúa a la medida de la conveniencia pública cuando entiende que una determinada función conviene que, en el período de tiempo necesario, o para siempre, si es que sigue siendo necesario, lo ejecuten los entes autónomos, porque también los entes autónomos son parte del Estado.

En último lugar el señor De la Fuente ha estado hablando de futuribles en sus temores. El futurible es aquel futuro que nunca se va a realizar. El testimonio histórico bien prolongado y bien universal demuestra que el temor a acontecimientos futuros no está en este caso en favor de que el Estado se vea disuelto por la fuerza de los entes autónomos, sino exactamente lo contrario, el recelo es el de los entes autónomos que tantas y tantas veces se han visto, a lo largo de la historia, en circunstancias muy diferentes, cómo incluso sus derechos, otorgados u originarios, han ido siendo absorbidos por formas centralistas, llámen-se absolutistas o liberales.

Por lo tanto, el problema es exactamente a la inversa: cómo preservar estas autonomías consagradas en la Constitución de la capacidad del Estado moderno tan frecuentemente demostrada. Nada más.

Artículo 142
(Continuación)

El señor PRESIDENTE: Terminado, pues, el debate sobre la enmienda número 35 de don Licinio de la Fuente, procede debatir el apartado 2 del artículo 142 que sería, según la enmienda de la Unión de Centro Democrático, el 3 del precepto reordenado, con la incorporación del artículo 143 como apartado 2.

¿Enmiendas que se mantienen al apartado 2 del artículo 142? (Pausa.) Si no se solicita la palabra, la tiene el señor Letamendía para defender su enmienda 64 de supresión.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a ser muy breve. Tal como queda redactado el apartado 2 de este artículo, esta redacción induce a la sospecha de que las competencias autonómicas, que en nuestra opinión son ya muy limitadas, pueden ser incluso limitadas posteriormente en base a estas leyes, de las que se dice en términos bastante vagos que se pueden establecer criterios necesarios para armonizar la cuestión de las normativas territoriales.

A nosotros estas armonizaciones de las leyes territoriales nos parecen francamente peligrosas; nos parece que supone una nueva intromisión del Parlamento central sobre aquello que pudiera ser perfectamente constitucional, es decir, sobre materias que son competencia propia de los territorios autónomos. Es por ello por lo que solicitamos el voto afirmativo a la enmienda de supresión de este apartado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Letamendía.

La Unión de Centro Democrático tiene la palabra para defender su enmienda «in voce» al apartado nuevo 3 del artículo 142.

El señor CISNEROS LABORDA: Ha sido defendida globalmente por el señor Meilán Gil en su intervención anterior.

El señor PRESIDENTE: Todavía podemos pasar a la votación —y con ello cerrar el de-

bate de esta mañana— de la enmienda «in voce» de UCD al punto 1 del artículo 142, que vamos a votar separadamente. Si se aprueba, don Licinio de la Fuente retirará su enmienda.

El señor DE LA FUENTE DE LA FUENTE: Así es, señor Presidente.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 25 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Al nuevo apartado 2 del artículo 142, que era el primitivo 143, existe una enmienda de don Licinio de la Fuente, que solicita sea puesta a votación.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 23 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente se pone a votación lo que será el apartado 2 del artículo 142, que es el artículo 143, según el texto debatido.

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 2 por 24 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Finalmente, procede poner a votación la enmienda 64 del señor Letamendía.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 24 votos en contra y uno a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Y, por último, se pone a votación el apartado 3 del precepto, según el texto de la enmienda de Unión de Centro Democrático que obra en poder de Sus Señorías.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 26 votos a favor y ninguno en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: Si hubiera solicitud de palabra, a pesar de lo avanzado de la hora, la concedería. (Pausa.)

Se levanta la sesión, para continuar a las

cuatro de la tarde, según hemos acordado anteriormente.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Artículo 143 bis *Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.*

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presentó por vía de enmienda «in voce» un artículo, el 143 bis. Tiene la palabra el señor Zapatero.

El señor VIZCAYA RETANA: Para una cuestión de orden, señor Presidente. Me gustaría saber si hay quórum.

El señor PRESIDENTE: Es una curiosidad malsana, señor Vizcaya, pero vamos a verlo.

Comprobada la existencia de quórum para dar comienzo a la sesión, dijo

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zapatero.

El señor ZAPATERO GOMEZ: A través de esta enmienda, el Grupo Socialista pretende un nuevo artículo 143 bis en el articulado del proyecto. Habría que aclarar que pretendemos pasarlo de donde está, que son las adicionales números 5 y 6, al artículo 143, y no al artículo 143 bis como hemos presentado en la enmienda, por cuanto al haber quedado —para utilizar la terminología del señor Presidente— desocupado el actual artículo 143, que ha pasado a ser el número 2 del 142, creemos que encuentra su lógico encaje como artículo 143. Pedimos ese cambio de ubicación, en primer lugar, por cuanto en el título VIII de este proyecto se regula de forma completa el tema de las autonomías. No hay razón, en principio, para que disposiciones al respecto figuren unas en la parte de disposiciones adicionales y otras en el seno del articulado.

El actual proyecto presenta un proceso lógico y coherente respecto al régimen autonómico. En primer lugar, se ha establecido un régimen general, y así tenemos el artículo 136, que regula la iniciativa autonómica; el 137 y

siguientes, que regulan el tema de las competencias y algunos aspectos más; el 141, que regula el tema de las competencias exclusivas del Estado, y el 139 bis, que regula las competencias de las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, hay un proceso respecto a la ampliación de estas competencias de las Comunidades Autónomas de forma que no queden reducidas a las competencias que figuran en el artículo 139 bis. Un primer proceso, una posibilidad de ampliar, de tener más competencias es si se sigue el proceso autonómico que figura en el artículo 143 que proponemos y que regula tres aspectos: en primer lugar, la iniciativa; en segundo lugar, la ratificación de la iniciativa, y, en tercer lugar, el procedimiento.

En cuanto a la iniciativa, proponemos alguna modificación importante en nuestra enmienda «in voce», puesto que en la disposición que enmendamos se dice que podrá proceder de la misma forma cualquier Comunidad Autónoma cuando así lo soliciten las cuatro quintas partes de los Municipios; mientras que en nuestra enmienda se dulcifica ese proceso, se hace mucho más fácil al exigir únicamente que la iniciativa la soliciten las tres cuartas partes de los Municipios que representen, no como decía el texto de la Ponencia, la mayoría de la población, sino que aquí introducimos una corrección técnica para que se dijera «la mayoría del censo electoral».

Por lo que se refiere a la ratificación de esta iniciativa, es también por vía de referéndum con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, y añadimos las palabras «en los términos que establezca una Ley Orgánica». Por esta vía entendemos que una Comunidad Autónoma puede tener más competencias que las que señalaba el artículo 139 bis, que aprobamos en el día de ayer. Y hay otra vía que es la excepción, que es la que figura en el número 3 del artículo 139 bis, y otra de las formas de ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas es sencillamente el transcurso de los cinco años.

Con nuestra enmienda, aparte de corregir una serie de posibles errores técnicos, creo que tiene como ventajas que a nuestro modo de ver la hacen merecedora de su aprobación, en primer lugar su mejor ubicación; en se-

gundo lugar, que el procedimiento del artículo 143 se convierte en la regla a efectos de aumentar las competencias de las Comunidades autónomas; y el procedimiento del número 3 del artículo 139 bis, es decir, el transcurso de los cinco años, es la excepción.

Por otra parte, como otra de las ventajas, hay una flexibilización del proceso: en lugar de las cuatro quintas partes de los Municipios, se pide únicamente las tres cuartas partes. Es decir, se posibilita que las Comunidades Autónomas obtengan mayores competencias que tal y como está en el informe.

Creo que estas diferencias son progresivas y por eso pedimos el voto favorable de los miembros de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zapatero.

¿Turno en contra? ¿No hay solicitudes de la palabra? (*Pausa.*)

El señor Vizcaya Retana tiene la palabra.

El señor VIZCAYA RETANA: No es que esté en contra, lo que quiero es defender la enmienda 652 que hace referencia precisamente al procedimiento que esta enmienda «in voce», la del 143 bis, establece.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIZCAYA RETANA: La enmienda 652 presentada por el Grupo Parlamentario Vasco propone un procedimiento en la elaboración y aprobación de estos estatutos más en consonancia con lo que supone en realidad el elaborar, por una norma institucional básica, por una Ley Orgánica, los estatutos para las Comunidades Autónomas.

La enmienda de mi Grupo mantiene la convocatoria por el Gobierno de la Asamblea de Parlamentarios a los solos efectos de elaborar el estatuto de autonomía. Sin embargo, a partir de ese punto, ya varía.

En este sentido, también tenemos que decir que nuestra enmienda es sensiblemente igual a la que presentó —no sé si fue como voto particular— la Minoría Catalana. La Asamblea de Parlamentarios Vascos, como elemento de elaboración del estatuto, viene a representar el espectro de fuerzas políticas

que concurren en el Parlamento. Por tanto, entendemos que es obvia la necesidad de pasar por la Comisión Constitucional en la que están precisamente esos Grupos Parlamentarios, puesto que en la Asamblea lo que se elabora es el estatuto y es precisamente donde están presentes estos grupos políticos en cada comunidad autónoma.

Por otra parte, un estatuto de autonomía, una vez reconocidas las competencias exclusivas del Estado en el artículo 141, tiene que respetar ese marco, y si no lo respeta es un estatuto anticonstitucional. Por esto es por lo que nosotros proponemos que, una vez elaborado el estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se someta directamente a referéndum del cuerpo electoral de la comunidad autónoma. Y sólo después se somete, no a la Comisión Constitucional, sino a las Cortes Generales, al Pleno, pero para un solo efecto: su ratificación; es decir, su declaración de constitucional o de anticonstitucional.

Ese es el voto que, a nuestro entender, deben de emitir las Cortes Generales: si es constitucional o inconstitucional, pero entendemos que si respeta el marco del artículo 141, la Comisión Constitucional no debe entrar en ese estudio detallado a que puede dar lugar, punto por punto. O es constitucional o es anticonstitucional. La comunidad autónoma a través de esa Asamblea de Parlamentarios tiene perfecta conciencia de qué es lo que puede o no asumir dentro de los límites que establece la Constitución.

Además, en nuestra enmienda, una vez emitan su voto las Cortes Generales, si este voto es de constitucionalidad, queda perfectamente ya ratificado el estatuto; pero si fuese de anticonstitucionalidad, lo que proponemos en nuestra enmienda es que la Asamblea de Parlamentarios pueda optar entre readaptar su estatuto a los efectos de convertirlo en constitucional o bien, por no estar de acuerdo con el voto de anticonstitucional emitido por las Cortes Generales, plantear un recurso ante el tribunal constitucional, único que nosotros entendemos como válido para juzgar si es constitucional o inconstitucional, como última instancia.

Por tanto, y en resumen, el procedimiento estatutario que el Grupo Parlamentario Vas-

co propone es el siguiente: elaboración de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios Vascos, convocada a tal efecto por el Gobierno; una vez elaborado, sometimiento a referéndum del cuerpo electoral de la comunidad autónoma; una vez aprobado, envío a las Cortes Generales para su voto de constitucional o inconstitucional y, por último, si se declarase inconstitucional, opción de la comunidad autónoma de recurrir al Tribunal Constitucional, o modificar el estatuto y volverlo después a remitir a las Cortes Generales.

El señor ROCA JUNYENT: Como el señor Vizcaya ha invocado que nuestro Grupo tenía una enmienda en este mismo sentido, para decir simplemente por qué la vamos a retirar.

El señor PRESIDENTE: Puede hacer uso de la palabra S. S.

El señor ROCA JUNYENT: Esta enmienda va a ser retirada porque el proceso es el siguiente. Había criterios dispares en orden a la elaboración del procedimiento del estatuto y a esta Minoría siempre le ha guiado en su actuación en este debate sacar lo máximo posible, como ya hemos dicho. Por tanto, si esta fórmula transaccional no tenía éxito, lo que salía era mucho peor.

Es por esto por lo que en mi actuación voy a votar por la fórmula transaccional y a desistir de la fórmula anterior, porque, evidentemente, tengo que ser fiel a los acuerdos alcanzados. En este punto voy a defender el texto de la Ponencia porque me parece que es el que da más satisfacción y no me conduce a un papel meramente de símbolo de una actuación que ya sé que no tiene el criterio, el consenso de la Comisión y que, de sostenerse, a lo único que podría reconducir es a una solución mucho peor.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, desde el punto de vista intelectual, ya en su momento nos produjo una gran satisfacción la enmienda del Grupo

Parlamentario Vasco, de la misma forma que nos produjo una gran satisfacción la enmienda del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, porque coincide con un texto anterior en el tiempo, que es nuestro voto particular al artículo 131, que tenía ese mismo procedimiento.

Nosotros, sin utilizar la frase que nos parece poco correcta desde el punto de vista del Derecho Constitucional, de sacar lo máximo posible de la Constitución, entendemos que, de acuerdo con los debates producidos en esta Comisión, para que la enmienda —insisto que desde el punto de vista intelectual nos produce satisfacción tanto la enmienda que ha defendido el señor Vizcaya como a la que se ha referido el señor Roca— fuera posible era necesario que se hubieran constitucionalizado las tres listas de competencias. Porque no se puede hacer un juicio de constitucionalidad sobre un estatuto si no están absolutamente cerradas las competencias exclusivas del Estado, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y lo que nosotros en nuestra tercera lista, que no existe ahora, llamábamos competencias compartidas.

Por otra parte, entiendo que esa afirmación, que creo que científicamente es irrefutable, de alguna manera está en contradicción con las palabras que esta mañana ha pronunciado el señor Arzalluz, al manifestar que su desencanto o el problema que producía a su Cuerpo Parlamentario, como nosotros ya habíamos oído en otras ocasiones sostener al señor Arzalluz, era porque quedaba a su juicio, definitivamente, cerrado el esquema de las competencias en la Constitución.

Sin embargo, este deseo de que quede abierto el esquema de las competencias está en contradicción con el hecho de defender un procedimiento para la aprobación del Estatuto que exige, inexorablemente, que estén cerradas las competencias con las tres listas.

Nosotros, insisto que desde el punto de vista puramente intelectual, creemos que es más correcto el sistema de nuestro voto particular y creemos también que es más correcto el sistema de las tres listas. Hemos realizado un acuerdo que ha supuesto un progreso importante en la materia y no ha pros-

perado, porque hemos sido el único Grupo Parlamentario con Socialistas de Cataluña que ha defendido el criterio de las tres listas. Por consiguiente, al no prosperar esto, nosotros tenemos que apoyar el criterio que ahora ha prosperado respecto de la elaboración del estatuto.

Por esas razones, reiterando nuestra satisfacción intelectual por esta enmienda, tenemos que estar, desgraciadamente, en contra de la misma, porque sería como introducir un elemento extraño con el conjunto del esquema que hoy plantea el procedimiento del título VIII en su generalidad. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba. Tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, no quisiéramos en nuestro Grupo violentar a nadie en sus acuerdos por defender nuestras enmiendas. La cita a la enmienda o voto particular de la Minoría Catalana había sido a título de ejemplo y no queríamos, en absoluto, herir a nadie. También se nos había olvidado citar el voto particular o enmienda que había presentado el Grupo Socialista, pero a nuestro modo de entender reflejaba más y mejor nuestros puntos de vista sobre el procedimiento estatutario. El hecho de la vinculación de unos acuerdos es sumamente respetable por nosotros. Por tanto, no tenemos más remedio que mantener nuestra enmienda, así como los demás mantienen las suyas.

Respecto a la manifestación del señor Peces-Barba, tendría que decir que el hecho de que las Cámaras, en concreto las Cortes, se limiten a aprobar o rechazar estatutos no tiene nada que ver respecto a la apertura o cerrazón del título de las autonomías. Hay ahí un artículo 141 en el que se habla de competencias exclusivas del Estado. Después, en el 142 y 143 se admite posteriormente —yo lo entiendo «a posteriori»— una posible delegación a través de leyes de bases, o una posible delegación de ejecución por el Estado; pero, a mi entender, eso es «a posteriori», porque, en el supuesto de aprobarse por la Constitución, inmediatamente puede elaborarse un Estatuto y presentarse a apro-

bación por las Cortes de tal forma que al Estado ni siquiera le haya dado tiempo de delegar ejecuciones. Por tanto, el Estatuto de autonomía, a mi modo de entender, recoja los puntos que recoja, o es constitucional o es anticonstitucional. Es decir, no veo exactamente cuál es la relación directa con el texto del 141, que ha quedado con la posibilidad de que no pase por la Comisión Constitucional y vaya directamente al Pleno, al voto de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por lo tanto, mi Grupo Parlamentario mantiene su enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor Solé Tura tiene la palabra para consumir el último turno en contra.

El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente. Formalmente, voy a consumir un turno en contra, pero más que turno en contra va a ser de aclaración.

Yo creo que la enmienda que presenta el señor Vizcaya se sitúa en un concepto distinto de lo que es el sistema de autonomías. Es evidente, porque el procedimiento que se presenta en la propuesta del Grupo Socialista del Congreso en la enmienda «in voce» se hace en función de la estructura actual del título de las autonomías, estructura actual en la que no se puede, digamos, tocar una pieza sin que todo se vea afectado. Aquí se contemplan unas vías de acceso a la autonomía, vías que, en principio, son igualitarias desde el punto de vista del Derecho, pero que, en cambio, pueden establecerse en el tiempo de modo que den respuesta a situaciones que hoy no son, evidentemente, equivalentes; son situaciones que tienen que irse estructurando porque, como he dicho esta mañana, me parece que el paso de un sistema supercentralizado, como el que nosotros tenemos, a un sistema de autonomías que no sólo supone descentralización administrativa, sino también autogobierno político, significa un período de tiempo que no podemos ver, si somos realistas, como un plazo inmediato, lo que nos produciría, seguramente, un cierto bloqueo en el terreno administrativo y también, con toda seguridad, en el terreno económico.

Esta concepción significa dos cosas funda-

mentales: primero, que las listas establecidas sean abiertas (aquí hay un grado de apertura determinado); segundo, que esa apertura tenga un nivel constitucional de negociación, y ese nivel de negociación es lo que se establece en la propuesta «in voce» del Grupo Socialista del Congreso. Lo que tenemos que saber es si esto lo mantenemos o renunciamos a ello. Ahora bien, si se acepta la enmienda que presenta el señor Vizcaya, vamos a otro concepto distinto, que tiene ciertas virtualidades, sin ninguna duda, pero también tiene enormes peligros, y entonces hay que ver si se asumen éstos en nombre de los otros o no.

El señor PRESIDENTE: En este punto queda exclusivamente la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, número 652, que figura en la página 263 del tomo de enmiendas, y la formulada «in voce» por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Vamos a proceder a la votación de la enmienda 652 del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 21 votos en contra y uno a favor, con tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente se pone a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que constituiría el artículo 143 bis.

Efectuada la votación, fue aprobada por 23 votos a favor y ninguno en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba para explicación de voto.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Brevemente, para explicación de voto y para indicar al señor Presidente que, puesto que el artículo 143 se ha colocado como nuevo apartado del artículo anterior, si le parece a la Mesa y hay consenso de la Comisión podemos quitar el bis al 143 y convertirlo en artículo 143.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: En cuanto a la explicación de nuestro voto, con toda brevedad, diré que ya hemos expresado las razones de nuestra objeción a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, por ser heterogénea con el contexto en que ahora se plantean las autonomías.

El señor Vizcaya ha dicho que no entendía las razones por las cuales nosotros consideramos que no se podía hacer un voto de inconstitucionalidad de un Estatuto siendo así que está el artículo 141. He de recordar que el artículo 141 contiene las competencias exclusivas del Estado, habiendo luego otro artículo —que creo es el 139 bis— en el que se recogen las competencias mínimas exclusivas de las Comunidades Autónomas. Pero es que entre esos dos artículos hay toda una serie de competencias que no son exclusivas del Estado y que no son mínimas de las Comunidades Autónomas, de tal manera que siempre, para atribuir esas competencias a las Comunidades Autónomas, es necesaria una negociación. Por consiguiente, el Estatuto, al requerir una negociación, no puede ser declarado inconstitucional, porque no están todas las competencias distribuidas en una de las dos o tres listas, como nosotros decíamos.

Por esa razón, porque es imprescindible en la concepción actual del título de las autonomías una negociación, es por lo que, al ser ésta imprescindible, no cabe declarar la inconstitucionalidad del Estatuto, o votar a favor o en contra simplemente por razones de inconstitucionalidad.

Por eso hemos votado en contra de la enmienda en cuestión y a favor de nuestra enmienda «in voce», que es coherente, como se ha dicho por otros compañeros, con la actual estructura del título VIII sobre las autonomías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba. Tiene la palabra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Para una breve explicación de voto en el sentido afirmativo a la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Socialistas del Congreso. Lo hacemos así para destacar la coherencia de lo que hemos aprobado con lo que la Unión de Centro De-

mocrático viene sosteniendo acerca de lo que entiende por autonomías.

Nos ha parecido un acierto trasladar de la disposición adicional al texto articulado este precepto, puesto que se trata aquí de un régimen general de las autonomías, régimen general que está abierto a todas las posibles Comunidades Autónomas. En tal sentido, esta filosofía nos parece un acierto y por ello la hemos votado afirmativamente.

Creemos también que, en esta dirección, ha sido positivo el reducir el porcentaje de cuatro quintos que se establecía primitivamente en la disposición adicional dejándolo en tres cuartos, porque esto equivale a facilitar el acceso a la fase plena de la autonomía.

Como saben SS. SS., estamos regulando en la Constitución dos fases: una primera que ha quedado regulada en los artículos 136 a 138, y otra que se está regulando en este nuevo artículo, que me parece va a ser el 143.

Pues bien, se trata de que quienes tengan un fuerte impulso autonómico y lo quieran, que supone la voluntad popular expresada en ese porcentaje, puedan acceder de inmediato, sin esperar al transcurso de los cinco años, a la segunda fase de la autonomía que esté de acuerdo con sus aspiraciones.

Creo que la regulación de las autonomías que se está haciendo en este título VIII, que se completa con el artículo que acabamos de aprobar, es fiel a esa línea de libertad a que me refería y subrayaba yo en otro momento, a fin de que cada comunidad escoja, de acuerdo con sus peculiaridades, el tipo de autonomía que deseen dentro de lo que es régimen común con todas las comunidades que constituyen España.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meilán.

¿No hay más solicitudes de palabra?
(Pausa.)

Por la vía de enmienda «in voce», se trata de introducir un nuevo artículo 144, propuesto por Minoría Catalana. Su texto está en dos folios a máquina y ha sido repartido entre SS. SS.

El señor Roca tiene la palabra.

El señor ROCA JUNYENT: Se trata en esta enmienda, primeramente, de una cues-

tion formal: la disposición adicional que constaba en el anteproyecto ha sido progresivamente incorporada, diríamos, a dosis diversas, al contenido de este título VIII. Así, el número 1 de la disposición adicional ya fue incorporado al primer artículo del capítulo referente a las Comunidades Autónomas. Las competencias mínimas de éstas también han sido incorporadas y acabamos de recoger en este artículo 143, en virtud de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, los números 3, 4, 5 y 6 de la disposición adicional mencionada.

Ahora se trataría de reconducir el número 7 de aquella disposición adicional a este artículo 144, porque, de esta manera, mantendríamos el contenido formal de la propuesta de la disposición adicional y, además, el proceso lógico de los artículos en este capítulo constitucional.

Por tanto, en una primera parte, nuestra enmienda se limita a reconducir al capítulo de las comunidades autónomas el número 7 de la disposición adicional y nada más.

No obstante, a la disposición adicional, en este nuevo enfoque o marco del artículo 144, se le incorporan diversas modificaciones que deben ser razonadas. La primera de ellas es el aspecto, ya reservado al tiempo de aprobar el artículo 141, número 5, relativo a la Administración de Justicia, que es la necesaria participación en la organización de las demarcaciones judiciales por parte de las comunidades autónomas.

Es evidente que estamos definiendo una autonomía política, una autonomía con su fuente legislativa, con su asamblea legislativa, una autonomía con su poder ejecutivo, con el consejo de gobierno, y a ello debía incorporarse la necesaria participación de estas comunidades autónomas en el ámbito judicial. (Varios señores Diputados hablan entre sí.)

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, no sé si se dan cuenta SS. SS. de la trascendencia de la enmienda que está defendiendo el señor Roca.

El señor ROCA JUNYENT: Muchas gracias, señor Presidente.

Esa incorporación supone, pues, cumplir o

Artículo 144
(nuevo)

dar satisfacción a la plenitud del concepto de la autonomía política. No obstante —y quiero con ello salir al paso de cualquier observación que pudiera formularse en esta línea—, es evidente que la progresiva evolución del poder judicial hacia un contenido de autoorganización ha desgajado muy positivamente la organización de dicho poder judicial de la vinculación del ejecutivo e incluso de la vinculación política.

Por tanto, era necesario mantener aquellas normas que se han señalado en el capítulo relativo al poder judicial, en el que se consagra no únicamente la unidad, sino también la independencia. Además, también se consagra este nivel de autoorganización, muy importante en las corrientes más modernas, en el campo del derecho judicial; era necesario introducir en este contexto estas dos aportaciones que se contemplan en el artículo que comentamos.

Por un lado, consagramos la necesidad de que en las comunidades autónomas, en esta fase, diríamos, en la que acceden a mayor nivel de competencias, cuenten inequívocamente con un Tribunal Superior de Justicia. Evidentemente, no quiero ocultar que, desde mi perspectiva territorial, con ello estamos intentando recuperar, en una línea constitucional actual, lo que fue para la Generalidad su Tribunal de Casación. Por lo tanto, el hecho de que aquí se hable de un Tribunal Superior de Justicia culminando la organización judicial, de cara a cada una de las organizaciones autónomas, nos parece un paso muy importante en el nivel de la autonomía política que queremos consagrar.

Consagramos asimismo en este artículo la posibilidad de que en el marco de la unidad, en el marco de la independencia del Poder Judicial y, además, en el marco —insisto otra vez— de una Ley Orgánica del Poder Judicial que debe distribuir este ejercicio concurrente de unas competencias que no deben ser en modo alguno conflictivas, puedan participar las comunidades autónomas, a través de diversas formas que los Estatutos podrán señalar, en la organización de las demarcaciones judiciales de sus respectivos territorios.

Este doble juego, el del Tribunal Superior de Justicia y la participación en la organización de las demarcaciones judiciales, se com-

pleta con el apartado en el que se concreta qué quiere decirse con todo ello y muy especialmente con referencia al Tribunal Superior de Justicia. Se quiere decir que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, que señala el ámbito judicial en todo el Estado del Tribunal Supremo, las sucesivas instancias procesales se agotarán ante órganos judiciales o jurisdiccionales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en el que esté el órgano competente en la Primera Instancia.

Son dos aportaciones que entendemos decisivas en la organización del poder judicial dentro del conjunto del Estado, que suponen algo más que una efectiva descentralización, que suponen dar satisfacción a viejas reivindicaciones en este terreno y que tienen, además, una larga historia consolidada en los escasos momentos de práctica autonómica en nuestra vida política.

Esto constituiría el número 1, el que recoge el ámbito institucional de los Estatutos aprobados de acuerdo con el procedimiento que se acaba de sancionar mediante enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Una segunda aportación que pretendemos en este artículo, que creemos debe estar precisamente en él, es la de dar a los Estatutos el contenido o la formalidad que se merecen.

En el artículo ya aprobado relativo al contenido de los Estatutos decíamos que el Estatuto será reformado de acuerdo con el procedimiento que en él mismo se señale. Esta reforma, evidentemente, hacía alusión a las modificaciones producidas a iniciativa de la propia comunidad autónoma, pero no contemplaba la posibilidad de modificaciones de este Estatuto producidas por leyes orgánicas de igual naturaleza. Abre aquí un conflicto de interpretación de si sería o no posible que una ley orgánica pudiese modificar otra ley orgánica, pero, en todo caso, bueno es que tal conflicto no quede a un margen de interpretación cuando creo entender, por parte de todos los Grupos Parlamentarios, que nada más lejos de su intención el que esta duda pudiera plantearse.

Es por ello por lo que se pretende incorporar al artículo 144 este apartado 2 de la enmienda, en el que se dice que, una vez sancionados y promulgados los respectivos

Estatutos y sus sucesivas reformas, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en el correspondiente censo.

Nos parece que ésta es la máxima garantía que se conjuga con la que establece el artículo 2.º al definir el derecho a la autonomía, en el que se dice que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Esta garantía encuentra en la enmienda que ahora se propone la máxima formalidad y la máxima solemnidad que el texto constitucional pudiera otorgar.

Por ello, señor Presidente, defiendo y solicito el apoyo de los señores comisionados para esta enmienda, que me parece vendrá a completar, con un carácter realmente satisfactorio, el esquema de la autonomía que estamos definiendo en este texto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.

¿Algún turno en contra? (Pausa.) No solicitada la palabra para pronunciarse en contra, como el Grupo Socialistas de Catalunya tiene presentada una enmienda «in voce» a la enmienda «in voce» de Minoría Catalana, el señor Reventós tiene la palabra.

El señor REVENTOS CARNER: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, para hacer constar, consecuentes con lo que siempre Socialistas de Cataluña hemos defendido, que apoyamos en todos sus términos la enmienda «in voce» presentada por la Minoría Catalana. Nuestro Grupo ha presentado una enmienda «in voce» a la enmienda «in voce» que acaba de defender el señor Roca. Esta enmienda consiste en incorporar al texto de la enmienda «in voce» de la Minoría Catalana un ordinal, número 3, cuya redacción tiene el tenor literal siguiente (aunque ha sido repartida a los señores comisionados, la leo, porque es muy breve):

«Mediante la agrupación de municipios, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica».

El razonamiento en defensa de esta enmienda «in voce» puede resumirse en las siguientes

consideraciones: de una parte, la concepción, que creo compartimos todos los Grupos en esta Comisión, de que la Constitución debe ser entendida como una Constitución abierta, como texto que facilite la capacidad creadora, la creación para estimular y dar cauce a las fuerzas potenciales que guardan aún nuestros pueblos; por otra parte, la constatación empírica de que en muchas nacionalidades y regiones de España existen realidades territoriales, geográficas, con un conjunto socioeconómico-político que aglutina y verifica en solidaridad el quehacer colectivo de los habitantes que en ellas viven. No me voy a referir a muchas, pero sí a unas muy concretas, que son las que mejor conozco: las comarcas catalanas.

Nuestra enmienda trata de recoger la posibilidad de que las entidades autonómicas puedan reconocer, establecer e institucionalizar estas realidades con personalidad jurídica plena. Esta posibilidad no sólo no está en contradicción con la acción del Estado, sino, al contrario, puede completar la acción política en el sentido genérico de la palabra, de la acción del Estado, de la acción de los Gobiernos autónomos, llevándola a todos los rincones del país, con lo que se daría satisfacción a una vieja aspiración del movimiento comarcalista, viva y profundamente sentida no solamente en Cataluña, sino en otras muchas zonas de España, que puede, además, permitir la acción de corrección de macrocefalias que deforman nuestra realidad.

En el tantas veces ya mencionado Estatuto de 1932 se recogía esta legítima aspiración, si bien tengo que decir que la división comarcal catalana no pudo demostrar su eficacia en el buen hacer político al quedar su institucionalización interrumpida por el estallido de la guerra civil.

Convencidos como estamos de la eficacia práctica que en el desarrollo de las actividades comunitarias y en el de las infraestructuras colectivas puede tener este tipo de entidades, es por lo que pedimos el voto afirmativo de SS. SS. para que los entes autónomos puedan establecer circunscripciones territoriales mediante la agrupación de municipios, dotándolas de plena capacidad jurídica,

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reventós. Don Marcos Vizcaya tiene una enmienda «in voce». ¿Es para contestar a ésta o para defender la de S. S.?

El señor VIZCAYA RETANA: Para contestar a esta enmienda que acaba de ser presentada.

El señor PRESIDENTE: ¿Por qué no hace ambivalente su intervención?

El señor VIZCAYA RETANA: Perfectamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Adelante, pues. Tiene la palabra S. S.

El señor VIZCAYA RETANA: Respecto a la intervención del señor Reventós, efectuada ahora mismo, mi Grupo Parlamentario está totalmente de acuerdo y apoya la enmienda «in voce» que ha presentado. Lo único que nos planteamos es la oportunidad del lugar, es decir, si verdaderamente en este artículo 144 debe recogerse esa enmienda «in voce». De todas formas, si el Grupo Socialistas de Cataluña está de acuerdo en que vaya aquí, no nos vamos a oponer; simplemente llamamos la atención a este respecto.

En cuanto a la enmienda «in voce» presentada por la Minoría Catalana, mi Grupo Parlamentario se felicita verdaderamente de que se haya conseguido algo. Consideramos sumamente positiva esta posibilidad del Tribunal Superior de Justicia, que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de las comunidades autónomas. Pensamos que quizá es una de las conquistas para nosotros más importantes de las que vamos ahora examinando y estamos plenamente satisfechos con la misma.

Únicamente hemos presentado a la Mesa una enmienda «in voce» que consistiría en retocar quizá este apartado 2 del artículo 144, en el cual se dice que un Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito de las comunidades autónomas y que en los Estatutos podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de tales en la organización de las demarcaciones judiciales, etc.

La enmienda de mi Grupo, no testimonial, dice exactamente: «Un Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de las comunidades autónomas y en los Estatutos podrán establecerse los supuestos y las formas de intervención de las comunidades autónomas en la organización judicial de las mismas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste».

Por tanto, la única modificación que introduce la enmienda de mi Grupo es cambiar «participación de las comunidades autónomas en la organización de las demarcaciones» por «los supuestos y las formas de intervención de las comunidades autónomas en la organización judicial de las mismas». Este es el sentido de nuestra enmienda en su tenor literal.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vizcaya. ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Carro.

El señor CARRO MARTINEZ: No quisiera intervenir para dificultar los debates, aun cuando comprendo que resulta muy difícil para los que no estamos todos los días en este debate el improvisar esta legislación a través de hojas sueltas que se nos van repartiendo poco a poco.

Si no he entendido mal, lo que aquí se pretende es, por una parte, establecer una organización política de lo que deban de contener los Estatutos, lo cual ya estaba contenido en la disposición adicional séptima, y aun cuando esto es innecesario aquí, no hay ningún inconveniente, porque se trata de una mera reproducción de lo que ya estaba acordado por la Ponencia.

Sin embargo, los dos párrafos que siguen a continuación no los entiendo exactamente y tengo muchas dudas de poderlos votar sin saber lo que se quiere decir. Parece como si se quisiera establecer aquí algo contradictorio con lo que establece el artículo 115, ya aprobado, en cuanto que dicho artículo 115 determina que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, etc. Parece que aquí se quiere establecer un Tri-

bunal de Casación —así se nos ha dicho—, es decir, un Tribunal último que, con carácter regional, sea la última instancia, o sea, el que case, por la infracción de forma, todos los asuntos en que pueda intervenir dentro de las comunidades autónomas. Si esto no es así, ruego que se me aclare. Pero si esto es como he dicho, desde luego mi Grupo tiene que votar en contra, primero, porque así se ha establecido en el artículo 115, y, segundo, porque el Tribunal Supremo o la doctrina jurisprudencial tiene que crearse por un solo órgano, pues ésta es una fuente de derecho muy importante que no podemos olvidar en estos momentos.

En cuanto a la enmienda del señor Reventós, no tenemos ninguna dificultad en admitirla. Sin embargo, parece como si se estuviera descubriendo el Mediterráneo a través de esta enmienda, cuando es una norma de las clásicamente admitidas, no ya en una Constitución, que no ha hecho falta, sino en los reglamentos de organización y funcionamiento de las Corporaciones Locales. Efectivamente, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales están actualmente admitidas las mancomunidades y agrupaciones de municipios con personalidad jurídica. Consiguientemente, si es éste el único alcance que se quiere dar al precepto, entiendo que esto es algo consagrado ya por legislación de rango inferior y que no hace falta darle rango constitucional.

De todas maneras, por entender que es algo obvio, nosotros no tendríamos inconveniente en votar esta enmienda, si así lo acuerda la mayoría de la Comisión, pero entendiendo que no debe ser de rango constitucional.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carro. De modo extraordinario esta Presidencia requiere al titular de la Minoría enmendante para que amplíe la explicación del alcance de su enmienda.

El señor ROCA JUNYENT: Gracias, señor Presidente, por este turno extraordinario de aclaración, que me permitirá, estoy seguro, convencer al señor Carro, o al menos intentar hacerlo.

No se trata de sustituir al Tribunal Su-

premo, porque precisamente se menciona explícitamente en la enmienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, lo cual quiere decir que tiene jurisdicción en todo el ámbito del Estado. Lo que se hace es crear un Tribunal Superior de Justicia en cada una de las comunidades autónomas, que agota las sucesivas instancias procesales iniciadas en esta comunidad autónoma; pero se agotan aquí, sin perjuicio, evidentemente, de la competencia del Tribunal Supremo y, por lo tanto, muy claramente, del recurso de casación.

Cuando quizá yo he provocado una interpretación defectuosa ha sido al decir que para nosotros esto podía suponer recuperar lo que fue, desde el punto de vista de la simbología y nunca de la traslación mecánica (porque las cosas han variado suficientemente como para que esto no sea posible), el Tribunal de Casación en Cataluña. Tengo que decir que muy posiblemente la punta de la pirámide en esta competencia será inferior, y posiblemente también que la base será muy superior.

Esto es un mejoramiento técnico que ayuda a un nuevo concepto de la organización del Poder judicial en el conjunto del Estado, que, insisto, no atenta en absoluto a esta organización del Poder judicial en su conjunto, y que además puede servir positivamente a una mejor aproximación de la justicia al justiciable, que es, en definitiva, lo que hoy impera y guía cualquier interpretación en la organización del Poder judicial.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca. El señor Peces-Barba tiene la palabra, un poco salidos del orden reglamentario, pero el tema lo merece.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Únicamente para insistir en la aclaración y perfilar algunas perspectivas, para que el Grupo Parlamentario de Alianza Popular quede absolutamente tranquilo en esta materia.

En primer lugar, el tema del Tribunal Superior o Tribunal de Casación de Cataluña, que ahora se llamará Tribunal Superior, no supone en absoluto el quitar la competencia o hacer desaparecer la competencia establecida en el artículo 115 en favor del Tribunal Supremo.

Sin embargo, entendemos, como sabe el señor Carro, que no todos los asuntos, no todas las pretensiones procesales que se plantean ante los Tribunales de Justicia se agotan en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas recogerán todas aquellas pretensiones que se agotan en órganos jurisdiccionales que no son el Tribunal Supremo. Existen, por ejemplo, como sabe el señor Carro, los procedimientos de arrendamientos urbanos, que acaban en las Audiencias Provinciales, y existen muchos procedimientos, como el de menor cuantía, que concluyen su vía procesal en las Audiencias Territoriales.

Hay dos cosas que entiendo se quieren decir aquí. En primer término, que el Tribunal Superior de Justicia culminará en la Comunidad Autónoma todos esos asuntos que agotaban el ámbito de lo contencioso en órganos jurisdiccionales inferiores al Tribunal Supremo. Y, en segundo lugar, que se recogen también como juzgados en última instancia por el Tribunal Superior de Justicia todos aquellos asuntos que están en el ámbito de las competencias propias del Derecho específico, del Derecho especial de una comunidad autónoma.

Por consiguiente, no hay en absoluto ninguna superación de la tesis que se establece en el artículo 115, ni por supuesto se establece ninguna antinomia.

Por otra parte, entendemos que el añadido que se ha producido posteriormente, de la participación de las Comunidades Autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales del correspondiente territorio, es enormemente correcto y positivo, porque supone la distribución de los Juzgados y Tribunales en los territorios, el establecimiento del número de Juzgados y Tribunales en una Comunidad Autónoma, y es muy lógico que sea la propia Comunidad Autónoma la que mejor conozca las necesidades inmediatas en cuanto al número de asuntos y contenciosos en cada una de las partes de su territorio.

Entendemos que es una norma muy positiva y por eso el Grupo Parlamentario Socialista anuncia su voto favorable a la enmienda «in voce» de la Minoría Catalana y, por su-

puesto, a la enmienda «in voce» de Socialistas de Cataluña.

El señor CARRO MARTINEZ: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S.

El señor CARRO MARTINEZ: Agradezco mucho las aclaraciones que se han hecho y que, evidentemente, han tranquilizado un tanto mis cuitas y mis dudas sobre el tema. Sin embargo, la redacción del precepto sigue suscitándome dudas y cuitas. Por eso, y como no quisiéramos oponernos con nuestro voto a este precepto, si fuera posible desearíamos reunirnos un momento para ver si aclaráramos la redacción. Creo que esto sería muy positivo.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos unos minutos, a los efectos que interesan a SS. SS.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Parece que, aclarada la posible confusión o dudas que hubiera podido determinar el alcance de la enmienda «in voce» que estamos debatiendo, don Antonio Carro solicita la palabra, y puede hacer uso de ella.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, hemos dialogado los diversos Grupos en un común esfuerzo por entendernos y encontrar una redacción satisfactoria. Pero realmente mi capacidad de convicción ha sido mínima, porque no he logrado que se introdujera la más mínima modificación en el texto. Sin embargo, debo decir que sí se me han dado explicaciones satisfactorias, de tal forma que yo quisiera, para poder votar este precepto favorablemente, puntualizar cuál es nuestro criterio, o qué es lo que nosotros entendemos de este precepto en el momento de votarlo afirmativamente.

Entendemos que en todo territorio autónomo puede haber un Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Territorial o como se le quiera llamar, y que pueden intervenir estas

Comunidades Autónomas en la delimitación de la demarcación judicial del correspondiente territorio, delimitación que no quiere decir participar dentro de la organización, no entendiendo qué es lo que se quiere decir con esto de «participar en la organización». Asimismo entendemos que rige el artículo 115, relativo al Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, lo cual quiere decir que cuando el apartado 3 habla de las sucesivas instancias procesales, son verdaderas instancias, pero que la casación siempre corresponde, siempre quedará atribuida al Tribunal Supremo.

Siendo ésta la interpretación auténtica, por lo menos la que yo he creído entender de los señores comisionados con quienes he tenido el gusto de hablar, nosotros no tendríamos inconveniente en votar favorablemente el precepto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carro.

Por lo tanto, procede la votación. Tenemos, en primer lugar, la enmienda «in voce» defendida por el señor Roca, de la Minoría Catalana; a seguido, la enmienda «in voce» de Socialistas de Cataluña, o conjuntamente si por general asentimiento se acumulan, y, finalmente, la del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación de la enmienda «in voce» de la Minoría Catalana, a la que se incorporó la de Socialistas de Cataluña, fue aprobada por unanimidad con 27 votos.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, que ha sido defendida por el señor Vizcaya.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 12 votos en contra y uno a favor, con 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca para explicación de voto.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: En relación con la enmienda «in voce» de la Minoría Catalana, aprobada con el voto favorable del Grupo que represento, considero necesario hacer unas manifestaciones.

Es evidente que en la intervención del señor Roca se han señalado los posibles paralelismos simbólicos que la introducción de esta enmienda aporta con el techo autonómico de 1931 y del Estatuto Catalán dictado en virtud de la Constitución republicana.

En este caso queríamos decir que al hablar ahora del Poder judicial no se trata de establecer comparaciones entre techos autonómicos, sino que se debe partir de la distinta consideración de la naturaleza del problema. La Constitución de la República de 1931 hablaba de la Administración de Justicia; la Constitución que estamos elaborando habla del Poder judicial y concibe a éste fundamentalmente como un Poder judicial uno e independiente.

Si tenía justificación y lógica que en la organización autonómica de entonces se discutieran las competencias de la Administración de Justicia entre un servicio centralizado —el Ministerio de Justicia— y los servicios autonómicos, la tiene menos o tiene un sentido cualitativamente diferente o de naturaleza distinta —y en esto se centra lo principal de nuestra explicación de voto— cuando la justicia se concibe como una justicia que no depende administrativamente de un servicio de la Administración Central, sino que está dotada de un alto grado de autogobierno a través del Consejo Superior de la Justicia.

En este sentido mi Grupo quiere hacer dos precisiones. Creemos una conquista de esta Constitución el que la Justicia se reconozca como Poder judicial independiente y único para garantía de la igualdad de los ciudadanos; creemos que en este sentido las querellas o disputas entre el Poder central y los Poderes autonómicos pierden relevancia, y creemos que de lo que se trata en este precepto es de adaptar la organización de los tribunales, que está concebida actualmente como una planta de un Estado unitario, a la planta de un Estado autonómico, y es necesario, evidentemente, que la organización de los tribunales corresponda y se adapte a la organización autonómica. Esto quizá mi Grupo habría encontrado conveniente que se realizara al hablar de la Administración de Justicia.

No es éste el momento procesal de plantear

la traslación del contenido de esta enmienda al título de la Administración de Justicia. Si lo fuera, así lo solicitaría mi Grupo, para que quedara aún más claro que todo esto se enmarca dentro de la unidad e independencia del Poder judicial. Pero no pudiendo ser posible pedirlo en este momento, sí considera necesario mi Grupo hacer esta explicación de voto para que quede constancia en acta del espíritu con que se ha votado esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez-Llorca. Así constará en acta.

El señor Solé tiene la palabra.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, una breve explicación de voto. Mi Grupo ha votado afirmativamente, como ha sido perfectamente visible, esta enmienda «in voce» presentada por la Minoría Catalana, y quiero ahora subrayar la importancia especial del texto que acabamos de aprobar. Precisamente porque tiene una importancia especial quiero poner de relieve la trascendencia que ha tenido el hecho de que haya sido aprobada por un voto unánime. Esto me parece que debe decirse no sólo en honor a la verdad, sino como un homenaje a todos los Grupos que están representados en esta Comisión.

El texto que hemos aprobado completa la imagen de lo que entendemos por autonomía política en el texto de esta Constitución, puesto que es un sistema que podrá ser alcanzable por algunos territorios cumpliendo los requisitos que antes hemos establecido, y que, desde luego, lo podrá serlo por todos, incluso sin cumplir estos requisitos, dentro de un cierto lapso de tiempo.

Aquí se contempla no sólo la existencia de una Asamblea legislativa elegida por sufragio universal con un sistema proporcional, sino también un Consejo de Gobierno responsable ante ella y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros, Consejo y Presidente que son políticamente responsables ante la Asamblea. Esto, que ya estaba, es muy importante recalcarlo en el texto mismo de la Constitución y no como una simple disposición transitoria.

Pero, además, lo que hemos aprobado completa la imagen de la autonomía política con el establecimiento de un Tribunal Superior de

Justicia. Yo no quiero establecer paralelismos históricos, ni tampoco quiero jugar con los términos, pero me parece que si hemos hablado de una Asamblea legislativa y que si en el artículo 141 hemos hecho importantes salvedades respecto a las competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, en lo relativo al Derecho Civil especial, a las especialidades procesales, etc., había que hablar, y así se hace, de un Tribunal Superior de Justicia.

También es importante que se establezca la participación de las comunidades autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales, y todo ello dentro de una concepción unitaria, de un Poder judicial independiente a nivel de todo el Estado que estamos configurando. Eso me parece que es una lección práctica de cómo se entiende realmente el juego de las autonomías políticas, en vinculación además con el Poder central. Sin comprender todo esto que estamos aprobando hoy es absolutamente imposible comprender también lo que aprobamos ayer, el artículo 141. Por eso es necesario que todos tengamos en cuenta la relación íntima que existe entre una y otra cosa.

Quiero, finalmente, referirme también a ese párrafo que hemos aprobado de la enmienda de Socialistas de Cataluña, relativo a la posibilidad de crear otras agrupaciones y circunscripciones territoriales mediante la agrupación de municipios, que permitan resolver con un criterio constructivo, y no obligatorio, pero sí constructivo, problemas que existen en cuanto al funcionamiento de circunscripciones territoriales en las diversas comunidades autónomas.

Insisto, en consecuencia, en la trascendencia de ese precepto que acabamos de aprobar por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solé.

¿Alguna otra solicitud de palabra? (Pausa.)

El señor Guerra Fontana tiene la palabra.

El señor GUERRA FONTANA: Señor Presidente, señores comisionados, Socialistas de Cataluña no puede en este acto dejar de hacer constar su satisfacción por el artículo

aprobado, tanto por el fondo de este artículo, por las especiales características que dentro del sistema autonómico, como muy bien ha destacado el señor Solé, tiene la existencia de un Tribunal Superior de Justicia, como también por lo que para Socialistas de Cataluña significa el Tribunal Superior de Justicia.

Sin pretender tampoco, ni mucho menos, establecer paralelismos —serían muy discutidos—, queremos dejar constancia al mismo tiempo de nuestra satisfacción porque, a pesar de todo, en una o en otra forma, y con las debidas diferencias, este Tribunal Superior de Justicia es un heredero si se quiere del Tribunal Superior que en su época hubo, que se denominó de Casación, y que en nuestro Grupo tiene especial recuerdo e interés por ser uno de sus miembros, el compañero Andreu Abelló, su último Presidente en tiempos de la Generalitat.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra Fontana.

Tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, a pesar de haber presentado una enmienda «in voce», nuestro Grupo Parlamentario ha votado a favor de la presentada por la Minoría Catalana por entender que es un avance sustancial y una conquista autonómica muy importante.

El Grupo Parlamentario se felicita de ello y únicamente quiere manifestar que la presentación de una enmienda «in voce» de la Minoría Catalana lógicamente tenía como intención mejorar el texto y ampliar un poco las facultades que en materia de organización judicial se atribuye la enmienda catalana.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. No habiendo más solicitud de palabra pasamos al artículo 145, correlativo al 141, del primitivo proyecto.

El señor SOLE TURA: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: La tiene Su Señoría.

El señor SOLE TURA: Creo que es la Mesa la que tiene que decidir, pero modestamente quisiera hacer una propuesta, y es que, para completar el texto que acabamos de aprobar y situarlo en ese contexto global a que antes me refería, quizá sería útil —ésta es la sugerencia— abordar ahora la aprobación de la disposición transitoria primera a la que he propuesto una enmienda «in voce» que debería ir como disposición transitoria, pero que sería bueno quizá aprobar ahora para acabar de perfilar todo el contexto de lo que estamos discutiendo.

El señor PRESIDENTE: ¿Ha sido distribuido entre SS. SS.?

El señor SOLE TURA: Desde esta mañana esta repartido.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Para manifestar nuestro apoyo, por coherencia con el texto general, a lo que acaba de pedir el señor Solé Tura en nombre del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo el resto de los Grupos Parlamentarios? (Pausa.)

El señor CISNEROS LABORDA: Creemos que es más fácil una composición general de criterio viendo ahora estas materias.

El señor PRESIDENTE: Sin embargo, sería disposición transitoria primera.

Tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente, y mi doble agradecimiento por haber aceptado la sugerencia. La enmienda «in voce» propuesta por mi Grupo intenta crear una nueva disposición transitoria que dé respuesta al problema de la existencia de órganos preautonómicos o bien órganos de régimen provisional de autonomía, que en esto la terminología actual del Gobierno no es clara.

En definitiva, se trata de solventar un cier-

Disposición
transitoria
primera

to vacío que existía en el texto de la Ponencia puesto que los órganos preautonómicos tenían un tratamiento muy secundario, por no decir que inexistente, y la disposición transitoria primera, que yo propongo, intenta colmar —no sé si lo consigue— este vacío. Concretamente, dice lo siguiente: «En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía sus órganos colegiados, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 136 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes». Es decir, que así como el artículo 136, al contemplar la iniciativa normal del Estatuto de autonomía habla de las Diputaciones u órganos interinsulares como órganos dotados de esa capacidad de iniciativa, aquí lo que se dice es que, cuando exista un régimen provisional de autonomía, estos órganos, que se especifica que han de ser colegiados por un procedimiento que es el acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, puedan ser los que tomen esta iniciativa.

Parece que es algo congruente con el proceso ya iniciado, puesto que, si se están dotando a diversas nacionalidades y regiones del país de órganos provisionales de autonomía, estos órganos deben ser contemplados en el proceso de transición que nos debe llevar desde la Constitución hasta el establecimiento de regímenes de autonomía. Este es el sentido de la enmienda, y agradecería un voto favorable a la misma por parte del conjunto de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Diputado desea hacer uso de la palabra para un turno en contra? (*Pausa.*) Tiene la palabra don Antonio Carro.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, no es turno en contra. Esperaba por si algún señor Diputado pedía la palabra para un turno en contra, porque realmente éste lo es a favor; es decir, que el Grupo Parlamentario que represento acepta esta enmienda «in voce» en todos sus términos tal y como está redactada, si bien entiende que esta alusión a «órganos colegiados» quizá resulte un tanto imprecisa o vaga. Quizá sería preferible, en-

tiendo, aludir a «sus superiores órganos representativos». Quizá eso sería más democrático, más eficaz y más preciso.

En todo caso, nosotros aceptamos la enmienda aunque sugiriendo esta ligera corrección, que entendemos perfecciona el texto.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, nosotros entendemos que el término es un término adecuado, tal como está en la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista.

Quizá se podría añadir el término «superiores», no sé si se podría añadir ese término para que no hubiera duda; pero desde luego el término «colegiados» es imprescindible mantenerlo. No sé si el señor Solé Tura está de acuerdo con que se añada «superiores».

El señor SOLE TURA: Exactamente eso iba a proponer. Estoy completamente de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: ¿Queda, a efectos de votación, «sus órganos colegiados superiores»? (*Asentimiento.*)

No hay texto de la Ponencia de referencia alguna, luego no hay más que poner a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 28 votos.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al artículo 145.

El señor MEILAN GIL: Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S.

El señor MEILAN GIL: Contra reloj, señor Presidente, pero creo que el silencio pudiera ser mal interpretado, aunque es suficiente el voto afirmativo, porque creemos que es una innovación importante para dar un respaldo a esta política de preautonomías que se ha iniciado en nuestro país.

Los órganos preautonómicos pueden cumplir y deben cumplir una función importante en la iniciativa del proceso autonómico pleno que prevé la Constitución. Por esto quería-

mos dejar constancia simplemente de nuestra adhesión, además de con nuestro voto afirmativo a la propuesta de esta disposición transitoria.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meilán. Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Con toda brevedad, señor Presidente, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expresar nuestra satisfacción por la aprobación de esta primera disposición transitoria, satisfacción que en el caso concreto del Diputado que tiene el honor de hablar, de Valladolid, con un régimen provisional de autonomía establecida, aumenta doblemente, porque supone el reconocimiento de esa realidad y la dignificación de los órganos preautonómicos de cara al proceso posterior de realización de las autonomías y también, y, por fin, expresar nuestra satisfacción porque se haya incorporado la palabra «superiores» que creo que es un signo de que todas las propuestas que vengan de cualquier Grupo Parlamentario son siempre acogidas con el máximo interés, y quiero agradecer además al señor Carro que haya hecho esta aportación, que consideramos muy positiva, como lo demuestra el voto unánime de la Comisión. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peces-Barba.

Disposición
transitoria
segunda

¿La UCD ha presentado una enmienda «in voce» con pretensión de disposición transitoria segunda y pretensión también de anticiparla al debate del artículo 145?

El señor MEILAN GIL: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues bien, tiene la palabra S. S.

El señor MEILAN GIL: Esta disposición transitoria se corresponde con el número 4 de la disposición adicional correspondiente al dictamen de la Ponencia.

Creemos que su lugar propia es justamente esta disposición transitoria, que viene a com-

pletar el régimen general por vía de transitoriedad que hemos establecido en artículos anteriores. En el artículo 143 se ha establecido la cláusula general relativa a las autonomías, concretamente a la segunda fase de las autonomías. Allí se ha dejado constancia de que toda comunidad autónoma puede acceder de inmediato, sin esperar a los cinco años establecidos en otro artículo, a la ampliación de las competencias que permite el juego de los artículos 141 y 139 bis combinados.

Se trata, en este caso, no de la consagración de ningún privilegio, sino —diría— de completar un proceso interrumpido. No se trata de contraponer aquí lo que Ortega decía en la discusión del Estatuto de Cataluña: la España arisca y la España dócil, sino de continuar el sentido de la historia interrumpido hace una serie de años. Se trata de que las manifestaciones de la voluntad popular puedan continuar en su proceso y pueda, por tanto, establecerse una línea continua de acuerdo con este sentimiento profundo de que Unamuno hablaba, del sentimiento continuo de la vida.

Esta es la razón por la que se introduce esta disposición transitoria que tiene esta única finalidad y, en absoluto, el volver a enfrentar a unos y otros, y no describir a España, como decía Cambó, como un oasis dentro de un desierto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meilán. Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Únicamente, señor Presidente, para indicar que, quizá, como sugerencia, por coherencia con lo que se ha aprobado en la disposición transitoria primera, donde dice: «por mayoría absoluta, sus órganos colegiados preautonómicos», debería decir: «sus órganos preautonómicos colegiados superiores», si el señor Meilán está de acuerdo.

El señor MEILAN GIL: Por supuesto, por coherencia.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay oposición a la propuesta del señor Meilán? (Pausa.) No

habiendo turno en contra, incorporada la modificación verbal del señor Peces-Barba a la enmienda, se pone a votación. No hace falta leerla, porque la tienen SS. SS.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 25 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Podemos entrar ya en el artículo 145? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Hay otras disposiciones transitorias en relación con el tema autonómico y hay unas enmiendas de nuestro Grupo en relación con unos territorios singulares. Entendemos que era necesario, para completar la visión del problema autonómico, la aprobación de estos, quedando las otras para su momento procesal oportuno.

Artículo 145 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Entonces pasamos al artículo 145 que contaba con cuatro subapartados, letras a), b), c) y d). ¿Las enmiendas que se mantienen al mismo son las que anteriormente constan por escrito? *(Pausa.)* No hay solicitud de palabra.

Existe una enmienda distribuida entre Sus Señorías, suscrita por la Unión de Centro Democrático, y supongo que el señor Meilán la expondrá.

El señor MEILAN GIL: La leeré, si soy capaz de entender mi propia caligrafía.

Tiene unos cambios de redacción y altera el orden de las frases. La única innovación es la relativa al apartado b), puesto que la redacción del informe de la Ponencia era equívoca al referirse a las funciones normativas delegadas, cuando, en realidad, debería referirse, como se hace en la enmienda oral, a funciones delegadas; y para que no haya ninguna duda de qué funciones delegadas se trata, se ha añadido la referencia al artículo 143, y entonces resulta lógico que sea el Gobierno quien controle el ejercicio de esas funciones delegadas, que el mismo Gobierno ha delegado de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 y con la garantía, obviamente, como decía el texto de la Ponencia, del Consejo de Estado. Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meilán.

Tiene la palabra el señor Roca Junyent.

El señor ROCA JUNYENT: Es para una precisión; en vez del artículo 143 que se invoca en la enmienda, es el 142.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Carro.

El señor CARRO MARTINEZ: No es para un turno en contra, señor Presidente; es, simplemente, con un afán de perfeccionismo, porque el texto, tal como ha sido enmendado, mejora muy sensiblemente la redacción anterior.

Ahora bien, así como estamos hablando del control de los órganos de las Comunidades Autónomas y este control es ejercido por el Tribunal Constitucional o por la Jurisdicción Contencioso-administrativa o por el Tribunal de Cuentas, es decir, siempre se trata de controles jurisdiccionales, en el apartado b) no es ejercido por ningún órgano jurisdiccional, sino por un órgano gubernativo. Sería más congruente y técnicamente más perfecto si este control se realizara, efectivamente, por el Gobierno, pero por el Gobierno vinculado por un órgano jurídico, equiparable o similar a los órganos jurisdiccionales que se citan en los otros apartados.

Entiendo que quedaría mejor redactado (quizá algún Grupo Parlamentario encuentre una fórmula más acertada) si el Gobierno tuviera que actuar aquí vinculado por un dictamen del Consejo de Estado y no libremente, como parece que queda ahora en el texto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: El Consejo de Estado es un órgano consultivo. Parece que no sería procedente que tuviera la facultad de vincular al máximo órgano del Poder ejecutivo de una manera excepcional y absolutamente fuera de los principios generales establecidos en la Constitución. Por consiguiente, nosotros mantenemos nuestro apoyo al texto tal como ha sido presentado en la enmienda «in voce».

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carro.

El señor CARRO MARTINEZ: Lo acepto, porque lo que yo pretendía era, simplemente, un perfeccionismo. Pero que no se asuste el señor Peces-Barba, porque el dictamen del Consejo de Estado es vinculante en varias ocasiones. Por ejemplo, la Ley de 3 de diciembre de 1963 vincula al Gobierno total y absolutamente en materia de urbanismo y zonas verdes, por lo cual el sistema no es tan absurdo; aun cuando el texto pueda quedar así, si la mayoría de los Grupos entienden que queda mejor.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Para una aclaración, por si pudiera terminar de desvanecer la duda del señor Carro.

La supresión del término «vinculante» en la Constitución no previene el que en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, al tratar de estas cuestiones, se dé carácter vinculante a las atribuciones del Consejo de Estado con carácter omnicompreensivo o en algún tipo de ellas. Lo que entendemos es que la introducción del término «vinculante» de manera omnicompreensiva y con rango constitucional podía ser un impedimento para el desarrollo legislativo que todas estas materias habrán de tener. Por tanto, esto es más progresivo y deja menos problemas para el futuro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Para leer exactamente la letra b), después de las atinadas observaciones que se han hecho.

Dice así: «Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, y el del ejercicio de las funciones delegadas al que se refiere el apartado 2 del artículo 142».

El señor PRESIDENTE: El resto queda igual que el texto que tienen SS. SS.

Vamos a pasar a la votación de la enmienda «invoce», de Unión de Centro Democrático, al artículo 145.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 29 votos.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al artículo 146. Como no tiene enmienda, se pone directamente a votación el texto de la Ponencia. **Artículo 146**

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por unanimidad, con 29 votos.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Diputado desea hacer uso de la palabra para explicación de voto? (Pausa.)

Pasamos al artículo 147, que consta de dos apartados. En su día hubo votos particulares de los señores Fraga Iribarne, Letamendía y Roca. **Artículo 147**

El señor ROCA JUNYENT: Desistido.

El señor PRESIDENTE: ¿Señores que mantengan enmiendas o votos particulares al apartado 1 del artículo 147? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fuejo.

El señor FUEJO LAGO: Hay una enmienda del señor Sánchez Ayuso, la 575, que se retira, pero hay una del señor Güell respecto a la cual me ha encargado que se vote.

El señor PRESIDENTE: Se pondrá a votación. Es la enmienda número 451.

Tiene la palabra el señor Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el apartado 1 del artículo 147 contiene una redacción, una de cuyas partes entendemos que es gravemente atentatoria contra la actuación de los órganos futuros de las comunidades autónomas. Este artículo dice en su párrafo primero que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, etc., podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

La redacción de este párrafo quiere decir

que una Comunidad Autónoma puede cumplir perfectamente las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y, sin embargo, puede atentar gravemente al interés general de España, lo cual no se entiende.

Es decir, si fuese este mismo incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales lo que atentara gravemente al interés general de España, no habría una conjunción disyuntiva «o» que separara ambas posibilidades. Por ello mi enmienda consiste en la supresión de esta frase, que considero atentatoria contra los intereses de las Comunidades Autónomas y que creo que puede dar lugar a que el Gobierno intervenga de manera desmedida en sus actuaciones, y concretamente se refiere a la supresión de «o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España».

El señor PRESIDENTE: ¿Hay petición de palabra para un turno en contra? (Pausa.)

El señor Pérez-Llorca tiene la palabra.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Señor Presidente, muy brevemente para tratar de desvanecer las dudas que existen sobre la necesidad de este precepto. Quería decir simplemente dos cosas: en primer lugar que, como siempre o en algunos casos, hay que buscar precedentes ilustres para la introducción de preceptos que tienen que venir a solucionar casos hipotéticos que nadie desea que se produzcan y que probablemente no se producirán, pero que la historia conoce que se han producido.

El precepto que nos ocupa es traducción casi literal de un precepto de la Constitución de la República Federal Alemana; por tanto, una mínima cautela de tipo federal que viene además aumentada, y ésta es la segunda parte de mi intervención, porque hay una enmienda «in voce» que será presentada cuando proceda, añadiéndose que la aprobación del Senado tendrá que ser por mayoría absoluta.

Se trata, por tanto, del típico caso de intervención federal aprobada por el Senado, que será órgano fundamentalmente de representación territorial y estamos aquí precisamente dentro de un Estado que no se organiza como federal, introduciendo como garantía no la

técnica de suspensión de acto o de intervención directa del Gobierno, que sería la propia de un Estado puramente autonómico, sino introduciendo, para mayor garantía y seguridad de las Comunidades Autónomas, una técnica típica del Estado federal y tomada, además, de un precepto de una Constitución federal moderna.

El señor PRESIDENTE: El voto particular del señor Fraga Iribarne mantenía que no debía ser necesaria la autorización del Senado; si acaso, del Congreso.

El señor Carro tiene la palabra.

El señor CARRO MARTINEZ: Retiramos este voto particular porque entendemos que, configurándose el Senado como una Cámara de representación territorial para el futuro, pensamos que lo va a ser, y porque creemos que el Senado es el órgano, la Cámara más apta para este tipo de actuaciones en relación con los problemas que pueden presentar las comunidades territoriales.

Consiguientemente, retiramos el voto particular.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Vasco mantiene su enmienda número 678?

El señor VIZCAYA RETANA: Para manifestar que no la mantenemos tal y como está redactada. La actualización previa de la mayoría absoluta del Senado era el contenido de nuestra enmienda; la damos por acogida ya y la retiramos.

El señor PRESIDENTE: De no solicitarse más la palabra para defender enmiendas o votos particulares, pasamos a debatir el voto particular que, como enmienda «in voce», ha presentado la Unión de Centro Democrático, cuyo texto ha sido distribuido a SS. SS.

Tiene la palabra la señora Revilla.

La señora REVILLA LOPEZ: Como pueden ver SS. SS. en el escrito que se ha repartido, la enmienda consiste en añadir al texto de la Ponencia aquellas palabras que en dicho escrito figuran subrayadas. Con esta adición no se modifica en absoluto el contenido del ar-

tículo, sino que únicamente se completa su redacción. Se trata, pues, de una enmienda puramente gramatical, pero necesaria. Su necesidad se desprende de la simple lectura del texto de la Ponencia relativo a este artículo 147, apartado 1.

En el texto de nuestra enmienda figura subrayada la expresión «por mayoría absoluta»; en el de la Ponencia se indica que es necesaria la aprobación del Senado para una actuación del Gobierno, pero no se dice nada de cómo debe efectuarse esta aprobación. En la enmienda se aclara que debe ser por mayoría absoluta.

Por otra parte, de los dos supuestos que contempla el artículo 147, se soluciona el primero de ellos, pero no el segundo, lo que trata de corregir esta enmienda.

La mejor defensa de la enmienda consiste en recomendar a SS. SS. que lean primero el texto de la Ponencia y después el de la enmienda, y así comprenderán la justificación de su necesidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Revilla. No tiene turno en contra la enmienda de la señora Revilla. (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Fuejo.

El señor FUEJO LAGO: En caso de que se introdujere en el texto de la Ponencia y se votara favorablemente lo de la mayoría absoluta del Senado, el señor Güell de Sentmenat retiraría su enmienda.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Que se vote primero.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, pues, la enmienda de la señora Revilla, tras haber retirado la suya el señor Güell, representado por el señor Fuejo.

Se pone a votación el artículo 147, según el texto de la Ponencia, con la enmienda presentada por la señora Revilla.

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 1 del artículo 147, con la enmienda de la señora Revilla, por unanimidad, con 30 votos.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Mi enmienda no ha sido sometida a votación.

El señor PRESIDENTE: Es verdad. ¿La enmienda de S. S. era a los dos epígrafes?

El señor LETAMENDIA: Al primero, señor Presidente. Pero dado que, en cierto modo, la aprobación del apartado 1 de este artículo ha determinado ya el resultado que fuera a arrojar la votación de mi enmienda, no la someto a votación, pero la defenderé en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Como la enmienda precisa ser desestimada para poder defenderla en el Pleno, la sometemos a votación.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 28 votos en contra y ninguno a favor, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada, por tanto, la enmienda 451 del señor Letamendía.

Al apartado 2 tenía una enmienda de supresión del mismo don Francisco Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Letamendía.

No teniendo contradicción el apartado 2 del artículo 147, se pone a votación.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad el apartado 2, con 27 votos.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay explicación de voto? (Pausa.)

Pasamos seguidamente al artículo 148 del **Artículo 148** texto de la Ponencia, antiguo 145, al que también el señor Letamendía tenía enmienda.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Francisco Letamendía.

El señor De la Fuente tiene presentada la enmienda número 35, en la que hace una extensa consideración sobre el principio de autofinanciación.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, el señor De la Fuente me ha rogado

que defendiera su enmienda, que consiste en aceptar el precepto tal como está, pero añadiendo el siguiente párrafo: «En garantía de los citados principios, los recursos a que se refieren los apartados a) y b) del artículo siguiente sólo podrán ser establecidos por ley aprobada por las Cortes Generales y no supondrá, en ningún caso, privilegio de unas regiones en relación con otras».

Esta enmienda se mantiene a efectos de que el señor De la Fuente pueda defenderla en el Pleno, si es que no se admite ahora.

El señor PRESIDENTE: Se pondrá a votación, por cuanto el texto no refiere la literalidad de la enmienda que ha leído Su Señoría. Por lo tanto, tendrá carácter de enmienda «in voce», y rogamos a Su Señoría nos la dé por escrito a efectos de votación. (El señor Carro Martínez entrega el texto de la enmienda a la Mesa.)

El señor Yebra formuló una enmienda, la 709. (Pausa.) Como no está presente, se da por retirada.

Por lo tanto, pasamos a la enmienda «in voce» de la Minoría Catalana, que es de adición de un párrafo y debe haber sido distribuida.

El señor Roca tiene la palabra.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, creo que al estar distribuida la enmienda no es necesario defenderla, porque se defiende por sus propios términos. Quiero explicar que se trata de mantener el apartado 2 del artículo 145 del antiguo texto de la Ponencia, que nos parece que abre unas posibilidades mayores, y más eficaces, para reforzar la autonomía financiera que se consagra en el apartado 1 de este mismo artículo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra a la enmienda «in voce» de adición de un apartado 2 al artículo 148? (Pausa.)

No teniendo, pues, contradicción el texto de la Ponencia, que pasaría a ser apartado 1, ni el número 2, que acaba de ser defendido, creo que podemos ponerlos a votación simultáneamente.

Efectuada la votación, fueron aprobados los apartados 1 y 2 del artículo 148, por unanimidad, con 29 votos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 148 en sus dos apartados, el primero referido al texto de la Ponencia, y el segundo a la enmienda de la Minoría Catalana.

Ponemos seguidamente a votación la enmienda número 35, de don Licinio de la Fuente.

Efectuada la votación, fue rechazada por 16 votos en contra, dos a favor y 12 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al artículo 149 relativo a los recursos de las Comunidades autónomas, que consta de tres apartados.

El señor Letamendía tenía presentada una enmienda a este artículo.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Vasco puede defender su enmienda número 679.

El señor VIZCAYA RETANA: Al antiguo artículo 146 del texto del anteproyecto nosotros formulamos una enmienda que señalaba la emisión de deuda pública, como otro de los recursos de los territorios autónomos o comunidades autónomas. Como no he visto en el informe de la Ponencia explicación alguna al respecto, yo solicitaría de alguno de los ponentes que tuviera la amabilidad de decir si en el producto de las operaciones de crédito se entiende incluida de alguna forma la posibilidad de emisión de deuda pública. Si se me contestase afirmativamente, mi Grupo Parlamentario retiraría esta enmienda.

A la espera de la respuesta, voy a pasar ahora a defender otra parte de la misma enmienda 679 relativa al apartado 3 —que pondremos que se señale como número 4 del actual 149—, que dice: «El Estado y las comunidades autónomas gozarán de igual prioridad en la cobertura de las necesidades y obligaciones que se deriven de su función pública».

Por tanto, el mantenimiento de la enmienda 679 se reduce al tema de la deuda pública y a añadir un párrafo 4, cuyo texto acabo de leer.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra la Ponencia?

El señor CISNEROS LABORDA: Respecto a la primera parte de la intervención del señor Vizcaya, manifestarle que fue sentir unánime de la Ponencia que la posible emisión de deuda pública quedara amparada por la facultad de concertar operaciones de crédito, lo cual nos parece técnicamente claro.

El señor VIZCAYA RETANA: En ese caso, el Grupo Parlamentario Vasco, si se estima que está comprendida la posibilidad de emisión de deuda pública en la facultad de concertar operaciones de crédito, retira su enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Decir únicamente que coincidimos con la concepción de la Ponencia hoy actuante, porque cuando se produjo ese debate quien tiene el honor de hablar ahora también formaba parte de la misma.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba.

El Grupo Parlamentario Socialista de Catalunya formuló enmienda verbal al apartado 3, que debe obrar en poder de Sus Señorías. Tiene la palabra el señor Guerra Fontana.

El señor GUERRA FONTANA: La enmienda propuesta por Socialistas de Cataluña no aporta en sí una modificación sustancial al texto de la Ponencia, si bien creemos que mejora su contenido, lo mejora haciendo referencia a que el ejercicio de las competencias financieras enumerado en el apartado 1, que, en el fondo, eran competencias que debía asumir el Estado central —serán reguladas, dice el texto de la Ponencia, mediante ley—, debe de poder regularse, aunque no obligatoriamente, mediante ley orgánica, tal como exponemos en la enmienda «in voce», y ello porque creemos que está en congruencia y en coordinación con lo manifestado en el artículo 143 ya aprobado.

Igualmente, introducimos una reforma que

creemos que mejora la redacción de este apartado y que consiste en suprimir lo que hace referencia a «estableciendo los límites y condiciones en que deberán desarrollarse», porque si la ley ha de regular el ejercicio de las competencias financieras, es indudable que los límites y las condiciones forman parte del ejercicio que la ley ha de regular. Por tanto, como es una redundancia esta oración que contiene el apartado 3, creemos que procede su supresión, con lo que logramos una mayor simplificación del texto.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)

El señor Gastón nos presenta ahora, sin tiempo para xerocopiar, la adición de una letra f) al número 1, que diría así: «Cánones especiales percibidos por la utilización de recursos naturales extraídos en los territorios de las comunidades autónomas».

El señor Gastón tiene la palabra.

El señor GASTON SANZ: Tengo otra enmienda de adición, que estaba ya formulada en el período de enmiendas, que es la número 90. Si le parece bien al señor Presidente, voy a defender las dos a la vez, puesto que tienen el mismo sentido, es decir, la enmienda que figura como número 90 y la enmienda «in voce».

Empiezo por la número 90, que era la escrita. En el apartado c) se habla de las «transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado». Mi enmienda consiste en añadir a este párrafo c) lo siguiente: «... fijándose por las Cortes el porcentaje mínimo que supondrá el fondo de compensación interterritorial sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado».

Esto es, señor Presidente, para dar una mayor concreción al apartado y para que se fije un porcentaje mínimo en los Presupuestos Generales del Estado para una de las materias más importantes que podemos tener y que entendemos debe estar fijada en la Constitución, que es la garantía necesaria para las regiones de niveles de renta inferiores. Es decir, que en la discusión anual del Presupuesto se decida qué proporción del mismo deberá destinarse a financiar el fondo de compensación

interterritorial. Sin este añadido, las garantías de auténtica solidaridad que andamos buscando, y este fondo de compensación, y este ánimo, y este espíritu que tiene toda la Constitución de paliar los desequilibrios regionales quedarían completamente en el aire. Esta es mi primera enmienda, que desearía que en el momento de la votación se votase aparte.

La otra enmienda es la que ha leído Su Señoría y se refiere a un apartado f), nuevo. Según ella, otro medio de financiación serán los «cánones especiales percibidos por la utilización de recursos naturales extraídos en los territorios autónomos». Aquí vuelvo a referirme a una materia que he tocado en otros capítulos y que se refiere a lo que está sucediendo en los territorios más pobres con la extracción de materias primas y energía que van a parar a otros lugares. No solamente estamos muy conformes con el principio de solidaridad, sino que pedimos que se mantenga a ultranza. Ahora bien, sabemos que existen en otros países para el transporte de la energía unos cánones o tarifas de distancia; sabemos que hay una energía que se pierde con estas redes tan largas y que la llamada energía-vehículo, al igual que el agua-vehículo, cuesta mucho dinero trasladarla de unas regiones o territorios a otros. Por todo ello, estos cánones de distancia, que existieron en España durante la República y fueron suprimidos por un decreto del año 1951, queremos que se vuelvan a poder imponer, para lo cual deben constar en la Constitución, porque así serían parte de las Comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gastón.

Había pedido la palabra en el curso de la intervención el señor Cisneros, que puede hacer uso de ella.

El señor CISNEROS LABORDA: Se trata de consumir un turno en contra, y nunca con mayor encarecimiento que en esta ocasión quisiera la Ponencia subrayar que dicha oposición no transita en absoluto por ninguna suerte de divergencia con los puntos de vista expuestos por el señor Gastón, ni mucho menos con las nobilísimas preocupaciones de no agravar los desequilibrios territoriales en nuestro país y de establecer todas las garan-

tías posibles para conseguir que esas proclamaciones de solidaridad y de igualdad que se contienen en distintos puntos de nuestra Constitución no queden remitidas al baúl de los buenos propósitos, sino que tengan una garantía de efectividad. Sin embargo, pasando de esta coincidencia en el espíritu de la intención a la articulación concreta que el señor Gastón nos propone en sus enmiendas, hemos de decir que es aquí donde surge la disparidad, por cuanto que confesamos, y confesamos paladinamente, que ese fondo de compensación interterritorial que se menciona en el apartado c) de este artículo 149 es una institución nueva, desde el punto de vista presupuestario y hacendístico, que estará necesitada de una perfilación técnica muy laboriosa, y de ello somos conscientes. Hemos querido acogerla desde este nivel de definición y de señalamiento de principio en el plano constitucional, pero no creemos estar en condiciones de completarla con mayores precisiones y mucho menos con una precisión casi casi de carácter porcentual y numérico como él señalaba, puesto que entrañaría graves dificultades técnicas y graves riesgos para el futuro. Se comprende fácilmente que será necesario jugar con la entidad de este fondo de compensación interterritorial en razón de circunstancias de la coyuntura económica, en razón del papel estimulante o fraccionario que los Presupuestos Generales del Estado tengan que tener en cada anualidad concreta. Hay todo un repertorio de problemas económicos que sería grave encorsetar desde la solemnidad del nivel constitucional dando acogida a la propuesta que el señor Gastón aporta. Habría toda otra serie de cuestiones económicas conectadas que interesan a distintas provincias españolas por uno u otro motivo y que todos somos coincidentes en la voluntad de albergarlas desde la proclamación del principio de solidaridad, pero que nos parece materialmente imposible darles un tratamiento diferencial adecuado desde este nivel constitucional.

Respecto a la segunda enmienda del señor Gastón, yo comparto de plano sus consideraciones, pero estimo que el concepto de canon está absolutamente acogido por la noción más técnica de tasa recogida en la letra b) del apartado 1 de este precepto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cisneros.

La Unión de Centro Democrático presenta una breve enmienda, que no ha dado tiempo de distribuirse, suscrita por el señor Echevarría, con relación al apartado b) del epígrafe 1.

El señor Echevarría tiene la palabra.

El señor ECHEVARRIA GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente. Realmente es una cuestión que fue ya argumentada y defendida en la Comisión en el momento en que se debatía el artículo 135.

Se trataría de que en la letra b) del artículo que comentamos, el 149, se sustituyera la actual expresión de la Ponencia «sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales» por este otro texto: «Sus propios tributos». De esta manera, y consecuentes con lo que ya aprobó la Comisión al debatir el artículo 135, dejaríamos totalmente englobados en la terminología genérica de tributos no sólo los que aquí se enuncian como «impuestos, tasas y contribuciones especiales», sino cualquier tipo de exacción, incluidas las parafiscales.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Echevarría.

¿Hay contradicción? (Pausa.)

Se concede una breve suspensión, sin levantar la sesión. (Pausa.)

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Echevarría.

El señor ECHEVARRIA GANGOITI: Gracias, señor Presidente.

En aras a la agilidad con que se van llevando hasta ahora los debates en la sesión de la tarde y entendiendo que la propuesta que hacía era técnica y no tenía carácter sustantivo, entidad singular, fuerte y consistente, no tengo inconveniente en retirarla para que continúen los debates.

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en trámite de votación, pero antes tiene la palabra el señor Carro,

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, había pedido la palabra en el momento que estaba haciendo uso de la misma el señor Gastón. Le había entregado al señor Presidente una enmienda del señor De la Fuente. Si se me permite, yo haré uso de la palabra con dos objetos. Primero, para defender la segunda enmienda del señor Gastón, que pretendía añadir un párrafo nuevo, la letra f), al artículo 149, 1.

Yo entiendo, frente a la autorizada opinión de los señores de la Ponencia, que la tasa responde a un concepto tributario en la medida en que se trata de retribuir servicios difíciles y que es un concepto tributario totalmente distinto del canon que pretende introducir el señor Gastón.

Por otra parte, éste es un tema ya muy antiguo que se ha planteado con reiteración ante esta Cámara. Se trata de que se está pagando en toda España la energía eléctrica con unas tarifas uniformes e iguales. Esto nos parece justo, pero, evidentemente, resulta que en las provincias productoras de la energía eléctrica, si no tuvieran que hacer el transporte de la misma, se podría obtener esa energía a un precio más barato que las provincias que consumen la mayor parte de esta energía. Y a cambio de tener que pagar la energía más cara, las provincias productoras de energía ven anegadas sus mejores vegas y sus mejores valles con pantanos, y también se ven perturbadas por la contaminación a través de las centrales térmicas y a través de las centrales nucleares. Y ello sin que suponga ningún beneficio.

Consiguientemente, en la medida en que la precisión del señor Gastón intenta producir una fuente tributaria a favor de las provincias, las regiones, las zonas o territorios que producen energía eléctrica, creo que es justo y deseable, y en la medida en que pertenezco a una provincia productora de energía eléctrica, considero la enmienda defendible y justificable y, por tanto, votaré a favor.

Por otra parte, y por lo que respecta a una enmienda que tenía presentada don Licinio De la Fuente a este párrafo 1, dicha enmienda es prácticamente la misma que la votada y rechazada en el artículo 148. Por ello no insisto en la misma.

Sin embargo, tenía presentada enmienda

también al apartado 2 que afirma que «las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios». El señor De la Fuente intentaba introducir un inciso de manera que este apartado dijera: «Las Comunidades Autónomas no podrán, en ningún caso, adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o cuya repercusión final se realice fuera del mismo...».

Creo que esta enmienda está plenamente justificada en virtud del fenómeno de traslación de los impuestos cuando se incorporan al valor de los productos. Entiendo, por ejemplo, en el caso de un impuesto de valor añadido, que sólo podrían establecerlo las Comunidades Autónomas a nivel de minoristas para que gravara sólo el consumo en la propia comunidad territorial. Porque si se establece a nivel de mayoristas o fabricantes, el impuesto acabarían pagándolo los consumidores del artículo en cualquier parte del territorio nacional, mientras que los beneficios se quedarían en la Comunidad Autónoma perceptora del impuesto. Y como normalmente el fenómeno productivo ocurre en las regiones más ricas, en las regiones productivas, resultaría que las regiones más pobres estarían subvencionando a las más ricas.

Consiguientemente, me parece justo y equitativo para las regiones más deprimidas el hecho de que no se puedan imponer medidas tributarias no sólo sobre los bienes situados fuera del territorio de la Comunidad, sino tampoco cuando su repercusión fiscal se realice fuera del mismo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carro. Tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: En nombre de la Ponencia quisiera replicar a las afirmaciones del señor Carro, y de paso también, puesto que él se ha referido en su apoyo a la enmienda presentada por el señor Gastón, volveré a insistir sobre esto.

A la Ponencia le parece que introducir aquí el término «canon» es una casuística excesiva que, además, no corresponde, por cuanto defendemos que el nivel genérico del pá-

rrafo b), que habla de «sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales», deja la puerta abierta para que, si es necesario establecer cánones, se establezcan. Pero en todo caso será en un contexto distinto; por ejemplo, en la propia Ley de Régimen Local o en otras disposiciones de rango equivalente.

En cuanto a la propuesta de enmienda que hace el señor Carro, que si no me equivoco es del señor De la Fuente, respecto a añadir la imposibilidad de gravar bienes cuando su repercusión sea fuera del territorio, eso establecería un grado de complicación tremendo. Nosotros, en la Ponencia, cuando empezamos a discutir un tema tan fundamental como este de la financiación de las Comunidades Autónomas, efectivamente empezamos a plantearnos posibilidades y casos, y finalmente nos encontramos metidos en medio de una casuística que hacía prácticamente imposible escribir un artículo que hablase de esta cuestión.

Prácticamente, nos veíamos abocados a redactar una ley casi al respecto. En ese sentido, optamos por establecer los principios generales y suficientes que puedan permitir llegar a la legislación ordinaria completa y desarrollar sus aspectos, sabiendo que lo que hay ahora establece una base suficiente para aclarar, primero, cuáles son las fuentes de financiación de las autonomías, y, segundo, cuál es el recurso entre esas fuentes de financiación y el sistema financiero en general. Por estas razones, nos oponemos a la enmienda presentada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé Tura.

Estimamos agotada la discusión al artículo 149, y vamos a proceder a la votación. Siendo así que consta de tres epígrafes, sin distinción en cuanto al primero de las cinco letras, subepígrafes, comenzamos por la enmienda número 90 del señor Gastón, que afectan al apartado c) del número 1. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 28 votos en contra y ninguno a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda número 90 del señor Gastón, que afecta a la letra c) del apartado 1,

También el señor Gastón defendió una enmienda «in voce» de adición de una letra f): «Cánones especiales, etc.», al apartado 1. Procedemos a la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 24 votos en contra y uno a favor, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda «in voce» del señor Gastón de adición de una letra al apartado 1.

Pasamos a la votación del texto de la Ponencia al apartado 1 del artículo 149. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 1 del texto de la Ponencia por unanimidad, con 28 votos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la Ponencia al apartado 1 del artículo 149.

El apartado 2 es objeto de la enmienda del señor De la Fuente, que se pone a votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 26 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la enmienda del señor De la Fuente al apartado 2.

Pasamos a votar el texto de la Ponencia al apartado 2 del artículo 149. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 2 del texto de la Ponencia por unanimidad, con 28 votos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la Ponencia al apartado 2 del artículo 149.

Procedemos, a continuación, a la votación de la enmienda mantenida por Socialistas de Cataluña al apartado 3, epígrafe 3. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialis-

tas de Cataluña al apartado 3, y no ha lugar a votar el texto de la Ponencia.

El Grupo Parlamentario Vasco mantuvo su enmienda 679, que finalmente redujo a la pretensión de incorporar el número 3 como 4 de su enmienda.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por ocho votos en contra y uno a favor, con 18 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada, con lo cual queda aprobado el artículo 149 del proyecto de Constitución.

El señor Vizcaya, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra para explicación de voto.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, simplemente para manifestar que en esta enmienda nosotros pretendíamos mejorar las garantías de las comunidades autónomas. Como nadie ha expuesto ningún argumento en contra, nos quedamos con la incertidumbre de por qué se ha votado en contra.

El señor PRESIDENTE: Pueden explicar el voto el resto de los Grupos Parlamentarios para dar las razones que estimen oportunas. (*Pausa.*) En caso contrario, pasamos al artículo 150. (*Pausa.*) Nos faltan dos artículos nada más para terminar el título VIII, «De las Comunidades Autónomas», y creo que merece la pena se llegue a él.

El artículo 150 consta de dos epígrafes. **Artículo 150**

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Podríamos seguir hasta las ocho en punto, con lo cual podríamos incluso entrar en el «Tribunal Constitucional».

El señor PRESIDENTE: Seguiremos hasta que la Presidencia levante la sesión.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: De acuerdo con lo que ha dicho la Presidencia esta mañana, la sesión se levantaría a las ocho.

El señor PRESIDENTE: Pero se puede rectificar. Enmiendas que se mantengan al primer epígrafe.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Retiro la enmienda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda 691 de don Laureano López Rodó, ¿se mantiene?

El señor CARRO MARTINEZ: Se retira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Y la 680 del Grupo Parlamentario Vasco?

El señor VIZCAYA RETANA: También se retira.

El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas «in voce».

El señor CARRO MARTINEZ: Pero queda una enmienda, que yo he entregado al Presidente, de don Licinio de la Fuente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Carro, pero no dio tiempo a xerocopiarla.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden. La enmienda «in voce» que se plantea ahora ¿es una enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, o de don Licinio de la Fuente?

El señor PRESIDENTE: La enmienda dice así: Enmienda que propone don Licinio de la Fuente, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, al actual artículo 150».

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Entonces estaba presentada con anterioridad.

El señor PRESIDENTE: Si lo autoriza el Grupo, y en esta línea de flexibilidad que estamos utilizando, se cubrirá la forma, y rápidamente el señor Carro la podrá defender si usa de la palabra.

El señor CARRO MARTINEZ: Muy rápidamente porque el objeto es fundamentalmente que se vote, para que el señor De la Fuente tenga oportunidad de defenderla en su momento, si lo estima oportuno, en el Pleno.

Realmente se trata de dos adiciones al aparta-

tado 1, porque en donde dice en dicho párrafo que «En los Presupuestos Generales podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas, en función del volumen de los servicios y de las actividades estatales que hayan asumido...», el señor De la Fuente intenta que sea también de conformidad con su capacidad contributiva, lo cual, posiblemente, puede ser más o menos discutible, pero, en cambio, intenta añadir otro principio que sí me parece mucho más encajado que el que contiene la redacción de la Ponencia, que sigue diciendo: «y de la garantía de un nivel mínimo», y el señor De la Fuente pretende que este nivel mínimo sea sustituido por nivel igualitario.

Entendemos que el principio de igualdad es mucho más ponderado; entendemos que todos los ciudadanos, de cualquier territorio a que pertenezcan, tienen derecho no a servicios mínimos, sino a servicios iguales. Comprendemos que esto es difícil de conseguir, pero creo que, como objetivo, es mucho mejor que un texto programático, como es la Constitución, señale este objetivo de obtener un nivel igualitaria para todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio en que éstos vivan.

Por otra parte, en el apartado 2, el señor De la Fuente propone añadir un inciso final, que diga lo siguiente: «El fondo de compensación se nutrirá con aportaciones del Estado y de las propias Comunidades Autónomas, en la forma y cuantía que aprueben las Cortes Generales».

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos sobre la enmienda? (Pausa.)

A la Ponencia se le llama la atención de que, en realidad, sustancialmente, es «mínimo» por «igualitario».

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, en todo caso, la Ponencia considera que el adjetivo «mínimo» quiere decir exactamente lo mismo, puesto que si es un nivel mínimo ya se entiende que es igual. Por eso no consideramos necesario incluir esa rectificación.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. No mantenida ninguna otra enmienda al número 1, pasamos al apartado 2 del artículo 150.

¿Hay alguna enmienda escrita que se mantenga en este apartado? ¿El Grupo Mixto?

El señor FUEJO LAGO: Desearía que se votara la enmienda del señor Gómez de las Rocas para que la pudiera defender en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: ¿Afectada a este párrafo?

El señor FUEJO LAGO: Creo que sí, es la enmienda número 62.

El señor PRESIDENTE: Había una enmienda número 62 que era un párrafo nuevo, pero en mi estudio no tengo enmienda del señor Gómez de las Rocas al apartado 2.

El señor FUEJO LAGO: Perdón, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Qué dice el texto de la enmienda del señor Gómez de las Rocas, que S. S. pretende que se someta a votación?

El señor FUEJO LAGO: Efectivamente, creo que era el apartado 4.

El señor PRESIDENTE: Era un párrafo nuevo que luego se pondrá a votación en último lugar.

El Grupo Parlamentario Comunista ha formulado enmienda «in voce» al apartado 2 que ha sido distribuida. Tiene la palabra el señor Solé.

El señor SOLE TURA: Nuestra enmienda tiende a completar el sentido de este apartado 2, añadiendo el término «hacer efectivo el principio de solidaridad». Puede parecer que es una simple declaración programática de carácter general, pero nos parece importante que esto conste, porque este apartado 2 va más allá del simple enunciado técnico de la creación de un fondo de compensación.

Este fondo de compensación, efectivamente, ha sido concebido y deberá ser estructurado, y así deberá funcionar, como un fondo que tienda a hacer realidad aquello que hemos proclamado en el artículo 2.º de la Constitución; es decir, el principio de solidaridad entre los españoles y entre las comunidades autónomas que se constituyan.

En este sentido nos parece que no basta con decir que el fondo de compensación se establecerá con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales, que es efectivamente una de sus finalidades y muy importante, sino que esto también va ligado al principio ético general de que eso tiene el objetivo de hacer efectivo el principio de solidaridad.

Repito que es una enmienda, si se quiere, programática, pero con un sentido muy concreto que tiende a dar toda su entidad y toda su trascendencia a esta institución del fondo de compensación interterritorial.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé. ¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda número 62, del señor Gómez de las Rocas.

El señor FUEJO LAGO: Pido que se vote, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda número 764, del señor Rodríguez-Miranda.

El señor CISNEROS LABORDA: Se da por retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: No existen, pues, al precepto que nos ocupa en sus dos apartados más enmiendas. Por consiguiente, vamos a proceder a votar al apartado 1 la enmienda del señor De la Fuente, tal como ha sido desarrollada por don Antonio Carro.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 12 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. A continuación vamos a proceder a votar el texto de la Ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia propuesto al apartado 1 por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la enmienda «in voce» del Grupo Comunista al apartado 2 del artículo 150.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 27 votos.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar ya a votar el texto de la Ponencia.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, pido que se vote la enmienda de don Licinio de la Fuente a este apartado 2, para que pueda tener la posibilidad de defenderla en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la enmienda de don Licinio de la Fuente al apartado 2.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la enmienda número 62, de adición de un apartado 3. Es una enmienda del señor Gómez de las Rocas, que ha solicitado el señor Fuejo su votación.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 25 votos en contra y dos a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Explicación de voto si hubiere lugar. *(Pausa.)*
Artículo 151 y último del título VIII.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

Existe una enmienda consistente en la adición de un artículo nuevo con el que culmina el título VIII. Pido al señor Presidente que, una vez que se debata el artículo 151, me permita defender mi enmienda consistente en la adición de un artículo nuevo, que sería el 149 bis.

Artículo 151 El señor PRESIDENTE: Ya llegaremos a eso. Vamos a empezar con el artículo 151.

El artículo 151 del texto de la Ponencia: «Presupuestos de las comunidades autónomas», no tuvo enmienda en el informe de la Ponencia. ¿Hay alguna enmienda «in voce»?

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, brevemente para decir que este precepto, como tantos otros de que está nutrida la Constitución, es un precepto detallista y

minucioso, y realmente no tiene verdadero rango constitucional. Nuestro Grupo no se opone a su inclusión. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este precepto afirma dos ideas: primero lo relativo a los presupuestos de las comunidades autónomas —presupuestos ordinarios— y a continuación prevé la posibilidad de que se formen presupuestos extraordinarios. Nuestro Grupo entiende que esto es rizar el rizo. Llega a un detallismo tal que son normas prácticamente reglamentarias de haciendas locales, mucho más que de un precepto constitucional.

De todas formas, señor Presidente, entiendo que los presupuestos extraordinarios son una heterodoxia. En la medida en que en el artículo 126, que se aprobó para los Presupuestos Generales del Estado, no se acepta esa heterodoxia de los presupuestos extraordinarios, el Presupuesto del Estado es único en virtud de su principio de unidad de presupuesto y unidad de caja, ¿por qué vamos a admitir esta heterodoxia para las comunidades territoriales?

Se me puede contestar que las Administraciones Locales tienen esta mala práctica tradicionalmente de los presupuestos extraordinarios, pero entiendo que la ortodoxia financiera es que exista un único presupuesto, que exista la unidad de caja en las comunidades territoriales, y que no se les invite a esta facilidad de elaborar presupuestos extraordinarios que irían contra los principios de unidad de caja y unidad de presupuestos, que entiendo que son principios financieros sanos que deben prevalecer también para las comunidades territoriales. *(El señor Solé Tura pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura, las consideraciones que ha hecho el señor Carro no obedecían a enmienda alguna. Constitan en acta.

El señor SOLE TURA: Pido la palabra en nombre de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Si la hubiera solicitado en nombre de la Ponencia...

El señor SOLE TURA: He levantado la mano y la mano no habla.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor SOLE TURA: A nosotros nos parece que lo que ha planteado el señor Carro es razonable. En consecuencia, quizá sí que sería conveniente suprimirlo de este artículo, ya que es un añadido superfluo que no dice nada nuevo. En todo caso, podría ser motivo de una ley ordinaria.

En ese sentido nosotros votaríamos a favor si se tiene que hacer una enmienda «in voce» de supresión.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Pedimos cinco minutos de suspensión.

El señor PRESIDENTE: Si pueden ser menos, mejor.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, creo que el tiempo fue bastante. Estábamos en el artículo 151 y ha habido una intervención de don Antonio Carro, seguida de otras del señor Solé Tura y de don Gregorio Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Creo que estamos de acuerdo en la redacción. Puesto que es simplemente de supresión, aceptamos la posición y las razones que ha expuesto el señor Carro (me refiero, naturalmente, al Grupo Parlamentario Socialista, que es el único en nombre del cual puedo hablar).

El señor PRESIDENTE: El señor Carro, ¿sería tan amable de formular por escrito la enmienda «in voce» para constancia de que es enmienda de supresión? En cualquier caso, creo que podemos poner a votación dicha enmienda de supresión.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda de supresión del artículo 151 del texto de la Ponencia por unanimidad, con 24 votos.

El señor PRESIDENTE: Ha lugar a que don Francisco Letamendía defienda el conjunto de su enmienda que entonces fue al artículo 148, pero denominado título VIII bis. El señor Letamendía tendrá la bondad de

defenderla y seguidamente la someteremos a votación.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados. Voy a ser muy breve en la defensa de esta enmienda, porque entiendo que el debate sobre el principio de autodeterminación, las razones en pro y en contra, se expresaron ya en su totalidad en las enmiendas que tuvieron lugar en la discusión del artículo 2.º de la Constitución.

Por tanto, lo que voy a hacer únicamente es recordar algunos puntos, entre los cuales entra el hecho de que el Partido del Gobierno debe recordar que el Gobierno español ha ratificado un Pacto de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyo primer artículo defiende el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Recordar al ala demócrata-cristiana de la Unión de Centro Democrático que en el XX Congreso de los demócrata-cristianos europeos, celebrado apenas hace dos semanas, en el proyecto de Resolución se contiene una frase que dice: «Los demócrata-cristianos europeos tienen una concepción de Europa que sobrepasa los límites actuales de la Comunidad Europea. El derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, comprendido el pueblo alemán, sigue siendo para ello un principio de toda política europea».

Recordar al Partido Comunista que no hace muchos años, en 1970, Dolores Ibárruri, «La Pasionaria», escribía en su libro «España, Estado multinacional», que la primera tarea para la democratización del Estado español era devolver el derecho de autodeterminación a Euzkadi, Cataluña y Galicia.

Recordar a los miembros del Partido Socialista que hace apenas dos meses, en la celebración del Aberri Eguna, hombres del Partido Socialista, hombres públicos, parlamentarios del Partido Socialista, encabezaron una manifestación junto con otros hombres públicos, sosteniendo una pancarta en donde se leía claramente: «Autodeterminación».

Y advertir a todos estos partidos, y especialmente al último por su representación numérica en Euzkadi, que si votan en contra de este derecho a la autodeterminación, tendrán

que asumir sus responsabilidades ante el pueblo vasco.

Voy a leer este artículo o, mejor dicho, este conjunto de artículos, y con ello voy a dar por terminada la defensa de la enmienda. Su lectura va a poner de relieve que si este derecho no ha sido incluido en la Constitución no es porque sea irrealizable, no es porque no sea posible, sino porque los partidos parlamentarios no lo han querido introducir:

«Artículo 149 bis. El derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado español supone, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados en su día por aquél, el que los mismos establezcan libremente su condición política, pudiendo, en consecuencia, optar entre seguir formando parte del Estado o separarse pacíficamente de éste y constituir un Estado independiente.

»Artículo 149 ter. Para el ejercicio del derecho de autodeterminación, los pueblos del Estado deberán cumplir las siguientes condiciones:

»1. Haberse constituido previamente en territorio autónomo conforme a lo dispuesto en el título VIII de la Constitución.

»2. Expresar su voluntad de ejercitar tal derecho, del modo que se regula en el artículo siguiente.

»Al artículo 149 quarter. Número 1. La iniciativa para convocar a la población del territorio autónomo al ejercicio del derecho de autodeterminación corresponde a la Asamblea de éste, a propuesta de una cuarta parte de sus miembros. Para su aprobación será necesario el voto afirmativo de la mayoría absoluta de éstos.

»Número 2. Esta iniciativa no podrá ser propuesta ante la Asamblea antes de transcurridos dos años desde la entrada en vigor del estatuto del territorio autónomo.

»Número 3. Obtenido el voto afirmativo de la Asamblea, se someterá a referéndum de la población afectada la opción expresada en el artículo 149 bis.

»Número 4. La decisión de constituirse en Estado independiente requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo electoral de cada una de las provincias, regiones

históricas o circunscripciones territoriales afectadas.

»Número 5. Si no se consiguiera el quórum necesario en la Asamblea del territorio autónomo para convocar a la población al referéndum citado, o si convocado no se alcanzara en el referéndum la mayoría establecida, no podrá replantearse la propuesta hasta la siguiente legislatura del territorio autónomo y, en todo caso, nunca antes de dos años desde la convocatoria del referéndum.

»Número 6. Si el resultado fuese afirmativo, el Estado español, de acuerdo con los órganos legislativo y ejecutivo del antiguo territorio autónomo, reconocerá al nuevo Estado y le transferirá la totalidad de las atribuciones que integren su plena soberanía».

Eso es todo, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Señor Presidente, muy brevemente para agradecer al señor Letamendía que nos haya exhortado al recuerdo, y utilizando tal exhortación, nosotros vamos a avivar el seso, en palabras del poeta, y a manifestar que el partido del Gobierno recuerda todo lo que ha de recordar, y recuerda que el pacto al que se refiere el señor Letamendía es un pacto firmado entre Estados soberanos, y que uno de esos Estados soberanos es España; y que el derecho de autodeterminación de los pueblos a que se refiere ese pacto es un derecho de autodeterminación referido a los pueblos que están bajo una dominación colonial y no a ninguno de los pueblos insertos en el marco de los Estados firmantes del pacto.

Y he de recordar que Unión de Centro Democrático, en todas sus alas, en todas sus ramas y en todas sus raíces, ha votado y está a favor de la autonomía, y ha votado la palabra «nacionalidades» porque estamos a favor del mantenimiento pacífico de la unidad de España, y de una unidad de España que sea unidad de corazones y no una unidad impuesta; y que a favor de esa unidad pacífica y concorde, y para mantenerla, protegerla y mejorarla, hemos votado las nacionalidades y la autonomía.

Y, por último, le recuerdo que, efectiva-

mente, el derecho de autodeterminación, cuyo único precedente está en la ya por mí varias veces mencionada Constitución de la Unión Soviética, que lo mantuvo junto a la consagración de la constitucionalización del partido único, de que no ha sido hecho uso en ningún caso, no va a ser incluido probablemente, según espero, en la Constitución. Lo cual, como dice el señor Letamendía, sería posible si lo votamos, pero si no lo votamos, o si votamos en contra, será porque la inmensa mayoría del pueblo español está en contra de la inclusión de ese precepto en nuestra Constitución.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez-Llorca.

Felizmente hemos culminado el difícil y complejo... (*Rumores. Varios señores Diputados manifiestan que no se ha votado la enmienda del señor Letamendía.*)

Perdón, señor Letamendía. Creí que había votado el señor Pérez-Llorca por toda la Cámara.

Se pone a votación la enmienda número 64, del señor Letamendía.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 24 votos en contra y uno a favor, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solé Tura para explicación de voto.

El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente. La enmienda que ha presentado el señor Letamendía es una enmienda importante, pero es evidente que tenía una connotación muy específica. Esa enmienda tiene la connotación de obligar a que los que estamos aquí digamos si estamos o no, en abstracto, por el derecho de autodeterminación. Ante esto caben tres actitudes: decir que sí al tema tal como está planteado, sabiendo que eso no va a tener mayor implicación; la otra alternativa es escurrir el bulto, es decir, irse de la sala en el momento de votar, y la tercera alternativa es asumir todas las responsabilidades. Yo he escogido la tercera.

En nuestro programa, tanto del Partido Comunista de España como del Partido Socialista Unificado de Cataluña, nosotros habla-

mos del derecho de autodeterminación y pensamos que es un concepto que tiene una larga trayectoria en el pensamiento marxista y que puede y debe ser seguramente un concepto a aplicar en función de la situación en cada país como solución definitiva de un problema de las nacionalidades. Pero también decimos que, en caso de ejercer este derecho de autodeterminación, nosotros votaremos contra la separación. Es decir, que ya fijamos cómo debe ejercerse y cómo debemos llamar a la población a ejercer ese derecho.

Pero éste es un aspecto de la cuestión, y a mí el que me interesa es el otro. El planteamiento de una enmienda de este tipo es puramente ideologista, y aquí no estamos haciendo una Constitución ideologista. ¿Qué Constitución estamos haciendo? Ya dijimos el otro día que no estábamos haciendo una Constitución federal, no estamos haciendo ni queremos hacer, porque el país no lo necesita, una Constitución testimonial. Estamos haciendo la mejor Constitución que podemos en el contexto actual y queremos que sea una Constitución que refleje las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población española, y para eso en esta Constitución hay que poner en común aquello que efectivamente es común, y dejar de lado aquellas cosas que o no son compartidas por la mayoría, o pueden provocar divisiones y laceraciones tremendas.

En consecuencia, nosotros estamos haciendo esa Constitución y no otra, y por eso hemos votado los artículos que hemos votado. Hemos renunciado a lo que nos parecía que había que renunciar, pero hemos afirmado lo que había que afirmar. Hemos votado el artículo 2.º, y asumimos el artículo 2.º en todas sus consecuencias y con todas sus connotaciones, y allí se dicen cosas muy concretas y hay que saber si nos situamos en el artículo 2.º, o si lo hemos aprobado simplemente para olvidarlo al llegar al final del texto constitucional. Nosotros, evidentemente, no lo olvidamos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, en nombre del Grupo Parla-

mentario Socialista, para explicar nuestro voto contrario a la enmienda del señor Letamendía, que incorporaba un nuevo título VIII bis, en relación con el ejercicio del derecho de autodeterminación.

En primer lugar, hacer una corrección sobre la actitud del Partido Socialista en esta materia. No solamente los socialistas se han colocado delante de una pancarta en ese tema, sino que en el XXVII Congreso del Partido está recogido el tema del derecho a la autodeterminación; lo que ocurre es que nosotros entendemos el derecho a la autodeterminación de una manera totalmente diferente a como lo entiende el señor Letamendía.

El derecho a la autodeterminación, el derecho a la autorreflexión o al autogobierno, a la manifestación de la voluntad de una determinada comunidad en el marco de un Estado federal, es el planteamiento y el sentido de la autodeterminación del Partido Socialista Obrero Español. La autodeterminación planteada en el Derecho internacional para los pueblos colonizados, sometidos a la soberanía de otros Estados, es un problema distinto en relación con el que nosotros no estamos de acuerdo.

Tener en cuenta la aprobación del texto del señor Letamendía supondría el votar a favor, o siquiera el abstenerse, aceptar que el pueblo vasco es un pueblo colonizado como algunos de los pueblos que se encuentran en otros continentes; y nosotros no podemos hacer esa ofensa al pueblo vasco.

Hemos oído frases del señor Letamendía que nos han parecido —aunque suponemos que no era ésa su intención— como una amenaza al Partido Socialista. Nosotros respondemos siempre de las conductas que tenemos, y, desde luego, responderemos en la forma que creemos que se responde en una democracia, que es con la razón y ante las urnas. Si alguien pretende hacernos responder de otra manera, en forma alguna aceptaremos ese planteamiento. Nosotros pensamos —y yo me he sentado en los mismos bancos que el señor Letamendía en el proceso de Burgos defendiendo a una serie de procesados de ETA— que el pueblo vasco, del cual la voz fundamental o la voz mayoritaria después de las elecciones del 15 de junio está representada conjuntamente por el Partido Naciona-

lista Vasco y por el Partido Socialista de Euzkadi, se manifestará ante las urnas en las próximas elecciones, y esperamos que en su respuesta justifique y comprenda perfectamente la racionalidad de nuestra actitud.

Nosotros pensamos que la provocación no es el mejor camino para defender las ideas; y por eso, porque somos conscientes de que haber votado la enmienda quizá hubiera supuesto que no solamente no hubiera habido autodeterminación, sino posiblemente ni siquiera democracia, es por lo que, de una manera muy consciente, hemos votado en contra, y, por supuesto, puede tener el señor Letamendía la seguridad de que el Partido Socialista responderá ante el pueblo vasco de este voto. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peces-Barba. Tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: El Partido Nacionalista Vasco ha votado sí, pero creo que debo explicar con todo detalle el sentido de ese sí. El Partido Nacionalista Vasco ha votado sí al derecho de autodeterminación como tal derecho teórico, pero no a su constitucionalización. Si el Partido Nacionalista Vasco hubiera querido constitucionalizar el derecho de autodeterminación, hubiese presentado una enmienda en tal sentido. Pero las vías del Partido Nacionalista Vasco para conseguir las mayores cotas de libertad para nuestro pueblo van por otro camino. Y en este sentido creo que toda la Comisión ha podido ver, y en el Pleno también se ratificará, cuáles son las tesis del partido, porque están plasmadas muy abiertamente, muy francamente y muy sinceramente en sus enmiendas.

Pero nuestro partido tenía que ser consecuente con algo que recientemente, en el Congreso de la Democracia Cristiana que acaba de citar el señor Letamendía, celebrado en Berlín, junto con otros partidos de la Democracia Cristiana europea, votó a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos; pero no entendemos tampoco que la autodeterminación, este derecho como tal, sólo se refiere a aquellos pueblos que están colonizados.

En este sentido no creo que ese derecho tenga esa interpretación exclusiva. Vuelvo a repetir que la postura del Partido Nacionalis-

ta Vasco ha sido afirmativa para un derecho que, en teoría, reconocemos, pero que nosotros no pretendemos su constitucionalización. Quiero dejar esto bien claro, porque sabíamos que el levantarnos en esta votación —que hubiésemos preferido que no se hubiese producido— puede dar lugar a interpretaciones de personas, o de grupos, de intereses que quieren precisamente, a través de una descalificación del Partido Nacionalista Vasco, agravar más los problemas que existen en Euzkadi y en otras nacionalidades. Por tanto, me gustaría que los aquí presentes sepan valorar y entender el sentido de nuestro voto, y que se abstengan de interpretaciones distintas a las que acabamos de dar, porque no tendríamos otro remedio que rebatirlas.

También creo que no es buen camino —sinceramente lo digo, a pesar de ser el señor Letamendía miembro de una coalición defensora también de los derechos del Pueblo Vasco— el recordar a los partidos sus programas o sus anteriores opiniones. Pienso que en este recordatorio ha habido una cierta coacción, que creo que debe estar totalmente exenta en los debates parlamentarios de una democracia parlamentaria. Cada uno sabe en qué es consecuente con sus programas; cada uno sabe cuándo debe votar en contra y, por tanto, no creo que a la responsabilidad de cada uno de los Grupos, aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones, deba atribuírsele esta responsabilidad gratuita. No pienso que los Grupos Parlamentarios se merezcan esto. Cada uno, vuelvo a repetir, tiene sus puntos de vista, que muchas veces no coinciden, pero precisamente la ausencia de estas situaciones violentas y de fuerza es lo que da lugar a la colaboración, de la cual se deben obtener buenos frutos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vizcaya.

Como Presidente debo decir que ni un solo miembro de esta Comisión ni Grupo Parlamentario piensa agravar las circunstancias que puedan concurrir en el Pueblo Vasco. Lo que todos pretendemos es resolverlo, dentro del espíritu democrático común que a todos nos anima. Y tampoco ha habido coacción ninguna por parte de ningún miembro de los

que han intervenido aquí hoy, y estas palabras no son para debate alguno.

El señor Carro tiene la palabra.

El señor CARRO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. También para explicación de voto, porque entiendo que el tema que se ha plantetado por el señor Letamendía es de tal envergadura y de tal importancia política para nuestro país que debe quedar claramente fijada cuál es la posición de los diversos Grupos Parlamentarios que tenemos el honor de participar en este debate.

Hacia tiempo que había pedido la palabra al señor Presidente y no me veía. Me la ha dado al final y me alegro que haya sido así porque de esta forma he tenido la oportunidad de escuchar al señor Vizcaya unas manifestaciones que a mí particularmente me han satisfecho enormemente. Estaba francamente preocupado del resultado de la votación, porque creía interpretar en su formulación unas conclusiones que, afortunadamente, han quedado desvanecidas después de esta explicación que ha hecho el señor Vizcaya de su voto.

Entiendo, señor Presidente y señores comisionados, como ya se ha dicho aquí, que el derecho de autodeterminación, que se fija en los textos internacionales a que ha hecho referencia el señor Letamendía, es un texto que se refiere exclusivamente a los territorios colonizados; y realmente me da pena, me da tristeza que haya un solo vasco que pueda pensar que no es un compañero, que no es un igual a todos los españoles, sino que se considere colonizado por el resto de los españoles. Consecuentemente, entiendo que lo primero que entre todos tenemos que procurar desvirtuar esa impresión psicológica que existe en algún parlamentario a efectos de que se consideren totalmente iguales, con los mismos derechos, con los mismos privilegios y en las mismas circunstancias que el resto de los españoles.

Por lo demás, el derecho a la autodeterminación aquí ha quedado expuesto con muchas sutilezas por algunos partidos políticos, que ellos entienden, que Dios ayude a entenderlo también, porque yo lo entiendo mucho más simplemente. El derecho de la autodeterminación es el derecho a secesionarse, a inde-

pendizarse un territorio del Estado dentro del cual está encuadrado. En este sentido, mi Grupo Parlamentario considera que la soberanía del Estado español es indivisible, que el territorio del Estado español es también indivisible y que incluso hay algunos preceptos de la Constitución ya aprobados de carácter primordial, porque se trata de preceptos preliminares de la Constitución en donde se afirma la unidad de la Patria y se atribuye al Ejército la obligación de defender la integridad territorial de la Patria. Quiere esto decir que no sólo es que ese derecho de autodeterminación no es desconocido en esta Constitución, sino, muy al contrario, ha sido muy tenido en cuenta y se ha afirmado en forma negativa por una gran mayoría de todos los señores Diputados que han intervenido en los debates en orden a este derecho.

Por otra parte, téngase en cuenta que estamos constituyendo un Estado regionalista, autonomista, como se quiera llamar, pero que ni siquiera es un Estado federal, y no conozco ningún Estado federal en cuya Constitución figure el derecho a la autodeterminación, salvo en el artículo 72 de la Constitución de la URSS, al que se ha referido el señor Pérez-Llorca, en cuyo texto último, aprobado hace seis meses, se vuelve a insistir sobre este derecho de la autodeterminación. Pero a este derecho de la autodeterminación no le tengo ningún miedo ni ningún ruso le tiene ningún miedo, por cuanto que existe el elemento corrector: partido único. Un derecho de autodeterminación con partido único no ofrece riesgo, y no deja de ser más que una declaración nominal en una Constitución, máxime cuando esta Constitución, a través de otros preceptos, pena muy grandemente a todos aquellos ciudadanos que atenten contra la unidad de la Patria, contra el prestigio de la Patria y contra la unidad territorial de la Patria, por lo cual no deja de ser incongruente esta Constitución de la URSS.

Por todo ello, y porque además el principio de la autodeterminación no es una cosa exclusiva de los miembros del territorio que habitan esa comunidad autodeterminable, sino un principio que afecta a toda la población del territorio nacional, todos los ciudadanos españoles somos especialmente sensibles, responsables e interesados en el tema de que no

se desgaje de la unidad nacional parte de nuestro territorio. Cualquier decisión que se adoptara en este punto no podría quedar al arbitrio exclusivamente de la población de un territorio, sino que tendría que ser una decisión democráticamente aprobada por toda la comunidad nacional.

En este sentido, y porque la Constitución es una Constitución autonómica, regionalista, no federalista, o aunque lo fuera el principio de la autodeterminación no debía ser reconocido, el Grupo Parlamentario que tengo el honor de representar ve con sentimiento y con pena que se haya tenido que plantear este debate y que haya en el camino incluso algún voto a favor de la autodeterminación, aun cuando el voto a favor haya quedado cumplidamente explicado por el señor Vizcaya.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias. ¿Algún otro Grupo? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cisneros.

El señor CISNEROS LABORDA: Muy brevemente, puesto que habiendo consumido la Unión de Centro Democrático, por boca del señor Pérez-Llorca, el turno en contra a la intervención del señor Letamendía, su posición en la votación ha quedado ya meridianamente establecida.

Para nosotros, los hombres de la Unión de Centro Democrático, el sentido del derecho a la autodeterminación es cabalmente el que ha expresado el señor Pérez-Llorca y ha sido después ratificado por el señor Carro en su intervención. Hace referencia al contexto de relaciones entre naciones soberanas y aceptamos y consideramos estimables sus esfuerzos por dar a este término, que ha cobrado significación en el contexto internacional, y concretamente en el mundo posbélico de las grandes revoluciones del tercer mundo, una significación bien clara. Sin embargo, aceptamos y estimamos como válidos los esfuerzos de comprensión que representan la búsqueda de otras interpretaciones. Lamentamos que, sin duda por circunstancias azarosas no significativas de lo avanzado de la hora y de lo pesado del debate, esta votación no se haya visto honrada por el concurso de alguna fuerza política, y querríamos hacer una consideración con respecto a un voto que nos

resulta entristecedor: el voto del Partido Nacionalista Vasco; porque somos muy conscientes de que un objetivo tan deseado, tan fervientemente anhelado por todos, como es el de la pacificación del País Vasco, pasa sin duda por el concurso, por el esfuerzo, por la leal y franca colaboración en la tarea común del Partido Nacionalista Vasco.

Descuide el señor Vizcaya que no formularemos ninguna interpretación malévola, ninguna interpretación divergente de aquella que él mismo intenta suministrarnos en sus explicaciones. Tenemos la máxima voluntad de comprensión, la máxima voluntad de entendimiento, hacia sus posiciones, pero necesitamos, incluso para ejercitar esta voluntad de entendimiento, que el Partido Nacionalista Vasco nos facilite mínimamente las cosas con una praxis parlamentaria más inteligible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cisneros. Tiene la palabra el señor Roca.

El señor ROCA JUNYENT: Por claras e indirectas alusiones, señor Presidente.

Lamento mucho las manifestaciones por las que yo me siento aludido, pero quiero dejar constancia de que en mi dedicación a la Comisión no puede hablarse en este caso de intenciones azarasas.

No quiero entrar en disquisiciones teóricas sobre este problema, problema que a todos nos afecta. Lo único que quiero decir para despejar dudas es que yo no hubiese votado a favor de la enmienda del señor Letamendía. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. Tiene la palabra el señor Guerra, por Socialistas de Cataluña.

El señor GUERRA FONTANA: Los Socialistas de Cataluña en gran forma también nos sentimos aludidos por la intervención del Diputado de Unión de Centro Democrático, y casi podríamos repetir más o menos textualmente las palabras de la Minoría Catalana en el sentido de que si hubiéramos votado no hubiéramos votado que sí.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra. Tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Creía que había sido claro. De todas formas, agradezco la intervención del señor Cisneros, pero creo, sinceramente, que el último estribillo no es consecuente con lo que nosotros hemos dicho aquí. Entiendo que nuestra postura es muy clara y lo ininteligible yo pienso que ha sido un desliz, porque nuestras pretensiones, vuelvo a repetir, están publicadas en el «Boletín Oficial de las Cortes».

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Únicamente para pedir que iniciemos el Título «Del Tribunal Constitucional», y que entremos en el primer artículo.

El señor PRESIDENTE: Si no hubiera intervenido S. S., ya habríamos empezado.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El artículo 152 **Artículo 152** consta de cuatro apartados. Enmiendas que se mantienen de las que en su día se formularon por escrito al apartado 1. Les recuerdo a SS. SS. la 214 del señor Barrera Costa.

El señor ROCA JUNYENT: Desde una ubicación distinta, para pedir que se vote, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se votará. Enmienda 64 del señor Letamendía, que tiene la palabra.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi enmienda consiste en equiparar el contenido autonómico del artículo 152 del presente proyecto con el de la Constitución republicana de 1931. En la composición del Tribunal Constitucional que este artículo comprende no se menciona en ningún caso a los representantes de las comunidades autonómicas. Por el contrario, en el artículo 122 de la Constitución de 1931 se decía que formaría parte del Tribunal de Garantías Constitucionales un

representante por cada una de las regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley. Es por ello por lo que la redacción que propongo comprende representantes de las Comunidades Autónomas, en el siguiente sentido: «El Tribunal Constitucional estará compuesto de 12 miembros, elegidos por mitad por ambas Cámaras por mayoría de tres quintos de sus miembros, y un miembro más por cada uno de los territorios autónomos, el cual tendrá carácter de representante de éstos, siendo elegidos estos últimos en la forma que determinará la ley».

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Letamendía.

Otras enmiendas o votos particulares que Sus Señorías deben conocer, recordar y mantener en este acto. Caso contrario entendemos que quedan retiradas todas las enmiendas y votos particulares a los cuatro apartados que comprende. Si no solicitan SS. SS. la palabra, entraremos en las enmiendas «in voce». Toda enmienda que no se solicita defender y se defiende queda retirada, desistida o decaída.

El señor ROCA JUNYENT: Bien entendido que la enmienda del señor Barrera será sometida a votación. No sé si en este apartado o en otros posteriores hay también una enmienda del señor Canyellas que también interesaría fuera votada. Creo recordar que hay esa enmienda, señor Presidente; si me equivoco, mis excusas.

El señor PRESIDENTE: En el artículo 152, en mi estudio no figura.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Es al 152 antiguo.

El señor ROCA JUNYENT: Exactamente. Perdón, señor Presidente, es en relación con el artículo 154.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros.

El señor CISNEROS LABORDA: Es para un turno en contra de la enmienda del señor Letamendía, con el fin de intentar llevar a su

ánimo que la Ponencia no fue, desde luego, ajena a la preocupación que late en la enmienda, pero entendió que la dificultad, la extrema dificultad de preservar por una parte las garantías de independencia de que este Tribunal debe estar revestido, y por otra racionalizar los criterios de su composición a través del procedimiento sobre reclutamiento parlamentario, determinaba que esa eventual presencia o concurrencia de las comunidades autónomas en la composición del Tribunal Constitucional sólo podía hacerse, necesariamente, a través de la composición de voluntades de todos los representantes de las comunidades autónomas que habrán de integrar el Senado, y de aquí que sea en términos paritarios con el propio Congreso de Diputados como el Senado concurre en la composición de este Tribunal Constitucional.

Esa es la razón de la oposición a su enmienda, y no, insisto, una divergencia diametral del espíritu que la anima.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cisneros. Llegan a la Mesa dos enmiendas «in voce» gemelas de la Unión de Centro Democrático y del Grupo Socialista.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Aplíquese en tal caso el «prior tempore potior iure».

El señor PRESIDENTE: Muy bien. «Prior tempore potior iure». En consecuencia, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Con toda brevedad, señor Presidente, para expresar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista porque el proyecto de Constitución que estamos debatiendo incorpore una tradición que ha tenido graves dificultades para introducirla en los textos constitucionales, que es la del control de la constitucionalidad de las leyes a través de un Tribunal Constitucional.

Desde que se hizo la elaboración teórica por el profesor Kelsen en su teoría pura del Derecho, y sobre todo desde que el profesor Capelleti hizo la gran teoría en esta materia, es un derecho adquirido la necesidad del control constitucional de las leyes. Ya los

norteamericanos, en la práctica de su Tribunal Federal, desde el caso «Marbury versus Madison» de 1903, la habían incorporado, y creo que con esto hemos superado una mala tradición junto a las muy buenas que Montesquieu ha tenido en su obra, que era aquella tradición en virtud de la cual los jueces eran sólo la boca muda que pronunciaba las palabras de la ley.

Por ello, después de habernos felicitado con esta incorporación, pensamos que el número de años necesario para ser miembro del Tribunal Constitucional, que debería ser un equilibrio con otra altísima función ya aprobada, la del Consejo Superior del Poder Judicial, que también afecta a personas vinculadas a la profesión jurídica, debería reducirse de veinte a quince años. Por esa razón hemos presentado esa enmienda «in voce» que es tan racional que ha encontrado la aportación gemela, como ha dicho el señor Presidente, del Partido del Gobierno. Pedimos a la Comisión el voto favorable a esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Quiéramos defender nuestra enmienda en un brevísimo turno. Simplemente para decir que la consideramos defendida en la intervención de los profesores Peces-Barba y Capelleti. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Los apartados 3 y 4 no tienen enmiendas y, por tanto, vamos a proceder a la votación de este precepto y seguidamente levantar la sesión. Como cuando levantamos la sesión Sus Señorías se van, se advierte que la próxima reunión será el lunes a las cinco de la tarde.

Por tanto, al apartado 1 del artículo 152

está la enmienda 214, de don Heribert Barreira, que se pone a votación.

Efectuada la votación fue rechazada la enmienda con 24 votos en contra, ninguno a favor y dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 64, de don Francisco Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se va a poner a votación el texto de la Ponencia.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: ¿No podemos votar todos los apartados con la enmienda «in voce»?

El señor CARRO MARTINEZ: Aceptamos la votación conjunta con la enmienda incorporada.

El señor PRESIDENTE: Entonces, el apartado 2 se entiende redactado con la enmienda formulada por el Grupo Socialista y Unión de Centro Democrático. Los apartados 3 y 4 con el texto de la Ponencia y, consecuentemente, se ponen a votación conjuntamente los tres apartados.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: El apartado 1 no se había votado.

El señor PRESIDENTE: En efecto, así es. Se pone a votación todo el precepto.

Efectuada la votación, fue aprobado el artículo 152 por unanimidad, con 26 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.

Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 38

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.590 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID